



**RESISTENCIA CIVIL Y CONTROL TERRITORIAL DE LA
COMUNIDAD INDIGENA NASA FRENTE A LOS GRUPOS
ARMADOS ILEGALES: JAMBALÓ CAUCA, COLOMBIA
2015-2019**

Juan Sebastián Medina Medina

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencia Política
Santiago de Cali
2021



**RESISTENCIA CIVIL Y CONTROL TERRITORIAL DE LA
COMUNIDAD INDIGENA NASA FRENTE A LOS GRUPOS
ARMADOS ILEGALES: JAMBALÓ CAUCA, COLOMBIA
2015-2019**

Juan Sebastián Medina Medina.

Trabajo de grado para optar por el título de Politólogo

Director:

Joaquín G. Tovar Barreto

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Programa académico de Ciencia Política

2021

Agradecimientos.

Agradezco a mis padres por siempre brindarme su apoyo, compañía en cada uno de los proyectos emprendidos

Agradezco a Beethoven por ser mi compañero fiel durante tantos años.

Agradezco a la Comunidad Nasa, Misak y a los habitantes de Jambaló Cauca, por compartir sus experiencias y permitir la entrada a su territorio ancestral.

A mi Director de Tesis, Joaquín Tovar, por guiarme y compartir sus enseñanzas para que este proyecto saliera de la mejor manera. Gracias.

A la Universidad Javeriana Cali y Profesores de la carrera de Ciencia Política, por tener espacios íntegros para el aprendizaje y por impartir conocimientos fundamentales para el crecimiento profesional y personal. Gracias.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
PROBLEMATIZACIÓN	4
ESTADO DEL ARTE	10
¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS SOBRE LA TERRITORIALIDAD?	12
LA AUTONOMÍA Y RESISTENCIA: VARIABLES DE INTERÉS ACADÉMICO PARA COMPRENDER LAS ACCIONES COLECTIVAS INDÍGENAS.....	19
Lo que dicen los estudios sobre la autonomía y la resistencia indígena en Colombia	26
MARCO TEÓRICO.....	34
RESISTENCIA CIVIL: MÁS ALLÁ DE LA DICOTOMÍA ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL ..	34
HACIA UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE CONTROL TERRITORIAL	44
METODOLOGÍA	49
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	52
CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	52
1.1. DISPUTAS POR LAS TIERRAS EN EL CAUCA.....	56
1.1.2 La consolidación del conflicto en el Cauca.....	59
1.2. El desarrollo del conflicto armado en el departamento del Cauca	59
1.3 Las consecuencias de los Megaproyectos en el departamento del Cauca	63
CAPÍTULO 2. La resistencia civil en el municipio de Jambaló-Cauca.....	67
2.1 La resistencia civil en el caso del municipio de Jambaló	74
CAPÍTULO 3. El autorreconocimiento como un método de defensa territorial	80
3.1 El autorreconocimiento Nasa	84
CONCLUSIONES.....	92
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	97
ANEXOS	103

INDICE DE TABLAS.

<i>Tabla No. 1. Ubicación y habitantes de las principales comunidades indígenas Departamento del Cauca.</i>	53
<i>Tabla No. 2. Principales datos de la situación económica en el Cauca</i>	55
<i>Tabla No. 3. La práctica de la resistencia civil ha servido para la defensa del territorio.</i>	75
<i>Tabla No. 4. Autorreconocimiento.</i>	85
<i>Tabla No. 5. Tabla cruzada de resistencia civil y autorreconocimiento de las personas como indígenas</i>	86
<i>Tabla 6. Tabla cruzada autorreconocimiento y Grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio</i>	87
<i>Tabla No. 7. Tabla cruzada del grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio y defensa del territorio.</i>	88
<i>Tabla No. 8. Tabla cruzada de acciones utilizadas para la defensa territorial y el grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio.</i>	89

INTRODUCCIÓN

En América Latina las continuas protestas ciudadanas evidencian el fortalecimiento de los movimientos y organizaciones sociales. Desde el inicio del presente siglo, solo por citar algunos ejemplos, diversos actores como los indígenas en Ecuador, Perú y Colombia, los campesinos sin tierra de Brasil, Chile y Colombia, las organizaciones feministas o ecologistas, los movimientos estudiantiles, cada uno de ellos, a partir de sus propias estrategias y a su manera, han perfilado el accionar de los movimientos sociales y el repertorio de acción de la protesta y las luchas sociales.

Los movimientos sociales expresan diferentes inconformidades. Por ejemplo, alrededor de los poderes como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que toman las grandes decisiones de tipo económico; también, cuando se presenta la usurpación de tierras para la explotación minera y la omisión históricas de las necesidades insatisfechas de los ciudadanos.

En América Latina la congregación de diversos sectores sociales en torno a causas comunes ha facilitado la coordinación de sus repertorios de acción. Académicos de la región se han dado a la tarea de comprender y explicar las diferentes manifestaciones que llevan a cabo los movimientos sociales. Por ejemplo, Martínez (2016), menciona que los espacios de convergencia realizados en foros internacionales han servido para discutir Causas comunes que creen en la posibilidad de construir “otro mundo posible”.

Este tipo de fenómenos han despertado gran interés en las ciencias sociales sobre la importancia que hay alrededor de las luchas sociales y de conceptos como resistencia y resistencia civil. Ambos conceptos permiten comprender y explicar las características de las acciones llevadas a cabo por grupos sociales, colectivos, comunidades... que se oponen a las diferentes formas de dominación y opresión existentes en el mundo.

Particularmente, en el contexto colombiano, inmerso en un conflicto armado interno, la noción de resistencia que llevan a cabo las comunidades indígenas alude al ejercicio de una acción para evidenciar “*oposición a...*” o en “*contra de...*”. Esto es, negarse a ceder ante las expresiones de la dominación, a sublevarse ante los ataques violentos producto de las

disputas territoriales. Bajo esa perspectiva, la resistencia por sí misma no excluye la apelación a la violencia, pero cuando se habla de manera más restringida y de métodos no violentos se menciona propiamente la resistencia civil.

La resistencia civil no es un método de uso reciente. Para Hernández (2006) las comunidades indígenas son un caso ejemplarizante de resistencia ancestral, los pueblos étnicos han logrado pervivir pese a la adversidad y a las distintas violencias; en los últimos treinta años se han comprometido con propuestas y acciones no violentas en torno a la recuperación, el fortalecimiento y la protección de sus culturas, su ejercicio de autonomía y el desarrollo de proyectos políticos que ellos identifican como la “construcción de un nuevo país y un nuevo mundo posible”(Delgado, 2006).

Bajo ese argumento, existen dos tipos de posiciones académicas frente a estos procesos. De una parte, la resistencia civil que se desarrolla como método de oposición a la guerra sin recurrir a la violencia. De otra parte, la resistencia civil como un método de conexión entre la defensa y las estrategias de renovación ciudadana. En esta tesis procuramos hacer una mimesis entre ambas teorías. El objetivo de las prácticas de resistencia civil indígena, no solo, surge de la oposición a la violencia (cualquiera que sea su tipo); también, construye e invita a consolidar métodos que propicien un desarrollo comunal acompañadas de exigencias de defensa de los derechos fundamentales de las comunidades.

Por lo tanto, en esta investigación visibilizaremos los esfuerzos de la comunidad Nasa de Jambaló especialmente las manifestaciones que den cuenta alrededor de la autonomía y el control territorial. Para el desarrollo de esta investigación se realizó una encuesta para conocer las percepciones sociales que tiene la comunidad Nasa de Jambaló sobre la resistencia civil como mecanismo de defensa territorial para cambiar la vida de la comunidad. Por tal motivo, nuestra investigación quiere contribuir a las discusiones presentes en la Ciencia Política a cerca de la consolidación de la resistencia en las comunidades indígenas de nuestro país. A la pregunta ¿De qué manera las comunidades indígenas del municipio de Jambaló Cauca utilizan la resistencia civil para ejercer el control territorial ante los actores armados entre los años 2015-2019? Buscamos, teniendo como referente las variables como la identidad, el territorio y la resistencia civil, determinar la función que la comunidad Nasa le ha dado a la resistencia civil para ejercer el control territorial.

Esta tesis esta estructurada de la siguiente manera. En la problematización presentamos las principales características geográficas, sociales y políticas de la región, especialmente el contexto de conflicto armado que aflige a las comunidades indígenas. Con el estado del arte, presentamos el vacío teórico que encontramos en la literatura sobre territorialidad y autonomía indígena. La revisión de textos está organizada en dos secciones: unas consideraciones teóricas desde la perspectiva latinoamericanista de movimientos indígenas y sus luchas por autonomía, y los casos específicos de autonomía de las comunidades indígenas colombianas. En el marco teórico se plantea el análisis del concepto de resistencia civil y control territorial, las similitudes y diferencias que se encuentran en la práctica de estas nociones y las variantes académicas que surgen de estos conceptos, como por ejemplo la no violencia, la desobediencia civil, el espacio, el territorio, la territorialidad, entre otras nociones. Luego en el análisis de resultados respondemos a tres objetivos específicos. En el primer objetivo específico buscamos ilustrar las dinámicas que utilizan los actores armados para disputar el control territorial de las comunidades indígenas. Luego con el segundo objetivo es describir las diferentes estrategias de resistencia civil que utilizan las comunidades indígenas para defender el territorio. Con el tercer y último objetivo, se busca explicar la función que cumple la resistencia civil para que las comunidades ejerzan el control territorial. Finalmente, en las conclusiones se corrobora la hipótesis central que sostiene que las comunidades indígenas que residen en el resguardo de Jambaló utilizan la resistencia civil como un mecanismo de defensa, fortalecimiento de identidad y control territorial.

PROBLEMATIZACIÓN

El municipio de Jambaló se encuentra ubicado al nororiente del departamento del Cauca – Colombia, históricamente ha sido habitado principalmente por indígenas de la comunidad Nasa. La colonización y el modelo capitalista, de una u otra manera, han sido variables históricas estructurales que han influenciado el accionar político de esta comunidad. Una de esas acciones que han utilizado ha sido la resistencia civil, como estrategia comunitaria ha servido para enfrentar los impactos y efectos que los procesos políticos y económicos trasnacionales han generado sobre su territorio.

Como proceso político la resistencia civil se considera, de una parte, como una respuesta de las comunidades indígenas que se sustentan en iniciativas pacíficas de lucha (Correa, Cruz & Fernández, 2018). De otra parte, busca ser una apuesta política para enfrentar y demandar respuestas del Estado y la sociedad por las agudas desigualdades sociales, culturales y étnicas que, en este caso, ha vivido la población indígena.

Como la gran mayoría de comunidades indígenas del Cauca en Jambaló también se evidencia una historia de arraigo y lucha por la tierra que data desde la colonia. Esta lucha de la comunidad Nasa contribuyó a su activa participación en las guerras de independencia, sin embargo, antes de adherirse a las reivindicaciones políticas de los grupos involucrados, lo que buscaron fue eliminar el tributo colonial y reafirmar su soberanía territorial. Este propósito lo lograron en 1863 cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera, siendo presidente de la Confederación Granadina, devolvió las tierras a los indios de Pitayo y Jambaló. (Guzmán & Rodríguez, 2014)

En términos poblacionales, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018 realizado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la población total del municipio de Jambaló era de 19.743 personas. El 98,40% de los encuestados indicaron pertenecer a la comunidad indígena. De acuerdo a los resultados del CNPV del año 2018 llevado a cabo por el DANE, el 95,82% de la población indígena de Jambaló pertenecía al grupo étnico Paéz, que hace parte de la comunidad indígena Nasa; mientras que, el 9,04% al grupo étnico guambiano, que a su vez hace parte del pueblo indígena Misak. Las poblaciones

de ambas comunidades suman un total de 19.427 personas. El resto de la población, solo 286 personas, que se identificaron como población negra y/o afrodescendientes y mestizas.

La extensión del municipio de Jambaló es 25.400 hectáreas (Alcaldía de Jambaló, 2016). Como particularidad político-administrativa se destaca que es municipio y resguardo al mismo tiempo, según Castaño “el 96 % de su territorio es zona de resguardo exceptuando la cabecera municipal” (2015: 247). Esa particularidad evidencia que en la historia y desarrollo del municipio de Jambaló ha sido determinada por la comunidad indígena Nasa. Su cosmovisión y planes de vida definen la elaboración de los planes de desarrollo municipal, así como, la planeación del desarrollo territorial.

En cuanto a los aspectos socioeconómicos, según el Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023) “se resalta que el 90% de la población aproximadamente vive en lo rural y sólo el 10 % en el casco urbano” (Alcaldía Municipal de Jambaló, 2020). En este mismo documento se afirma que la producción se ha organizado a partir de la forma familiar, asociativa grupal y comunitaria. En el ámbito rural las principales actividades económicas del sector productivo agrícola son la siembra y producción de limón, cacao, café, caña panelera, maní. Además, se impulsa la producción ganadera, así como producción de especies menores como las crías de aves, porcinas, ovinas, caprinas, entre otros. El plan incluye la adición e impulso de la producción piscícola y de miel de abeja

En este contexto, las organizaciones de productores agropecuarios presentes en el municipio, coinciden en identificar a las largas e intensas temporadas de sequía, los altos costos de producción, los bajos precios de los productos durante las épocas de cosecha, la carencia o limitada asistencia técnica, tanto para la producción, como para la comercialización y el fortalecimiento socio-empresarial. (Alcaldía Municipal de Jambaló, 2020)

También, el proceso histórico de Jambaló ha sido permeado y afectado por el conflicto armado político y social que ha vivido el país. Desde la década de 1960 hicieron presencia grupos armados como las FARC-EP, también en la década de 1970 ingresan a Jambaló, el M-19 y el EPL, el Quintín Lame en 1986 y el ELN en los años 90 (Guzmán & Rodríguez, 2014)

En la actualidad, debido a la dinámica del conflicto armado, la población del municipio de Jambaló ha sido víctima de continuas violaciones a su autonomía y derechos como pueblos indígenas. Incluso después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, Jambaló fue reconocido como uno de los 170 municipios priorizados para la implementación de los acuerdos, debido a que estos territorios han sido especialmente afectados por el conflicto armado, la pobreza y la desigualdad.

Recordemos que la comunidad indígena Nasa se concentra principalmente en la región de Tierra adentro ubicada entre los departamentos del Huila y el Cauca, también se han expandido hacia departamentos como el Valle del Cauca, Caldas y Putumayo. Sin embargo, la mayoría de su población hacen presencia en diferentes municipios del departamento del Cauca (Cogua, 2017).

La comunidad indígena Nasa se encuentra entre las cuatro más numerosas en Colombia (DANE, 2018). Así mismo, se ha destacado por la defensa de sus territorios, recurriendo a un repertorio diverso de acciones colectivas en la lucha por el reconocimiento de sus derechos como pueblo (Cogua, 2017).

Las indígenas Nasa, se han caracterizado por mostrar una continua resistencia y oposición a los diversos procesos y actividades que podrían generar cambios o consecuencias negativas a su comunidad, cultura, creencias o cotidianidad política. A lo largo de la historia la comunidad Nasa ha mostrado su talento para organizarse, además de un espíritu de lucha, con lo cual ha alcanzado ejercer una importante influencia en los demás sectores sociales, que ha resultado un factor determinante en la formación de organizaciones indígenas como medio de lucha (Cogua, 2017).

En pro de la defensa de sus derechos esta comunidad ha realizado innumerables marchas (incluso desde sus territorios ancestrales hasta Bogotá), plantones, mingas, entre otras acciones con el fin de preservar su cultura. También, desde su cotidianidad han conservado y recuperado sus prácticas culturales ancestrales, como la lengua Nasa Yuwe y el tejido.

En esta misma vía, han fortalecido los Cabildos Indígenas que cuentan con un reconocimiento jurídico formal; así como, han desarrollado la estrategia de la guardia indígena o Kiwe Thegnas en Nasa Yuwe para defender su autonomía territorial.

El pueblo Nasa se caracteriza por poseer un origen propio lo que le otorga una lengua materna particular y autónoma. Entre sus rasgos culturales más resaltantes se encuentra el respeto a los valores, creencias, prácticas medicinales ancestrales, participación de la mingas y trabajos colectivos. Esta comunidad es participante activa del Proyecto Global que apoya el ejercicio del control territorial en la cual participan como guardia indígena. También, reciben el puesto de cabildo donde asumen funciones políticas, sociales y de administración territorial que son características de un estilo de gobierno propio y autónomo (Ipia, 2011).

A finales de los años ochenta se presentó una actividad de fortalecimiento de los procesos organizativos autónomos de la comunidad nasa y del Resguardo de Jambaló. Se configuró así un orden social en el que se ponía de relieve la autonomía construida desde la identidad étnica. A partir de allí, se gestaron procesos para la consolidación de su una educación, lengua y autoridades propias, además, se buscó afianzar la cultura nasa (Guzmán & Rodríguez, 2014).

Sin embargo, de manera paradójica, también a principios de esta década se comienza a agudizar la problemática del narcotráfico en el municipio, configurándose como una zona de cultivos como la amapola en la zona alta y de coca en las zonas media y baja (Guzmán y Rodríguez, 2014).

Teniendo en cuenta los referentes anteriormente expuestos, así como, el proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional, en esta tesis el periodo de investigación se centra en el periodo 2015 a 2019; argumentado por el auge de la protesta social en Colombia, el recrudecimiento del conflicto en el territorio del norte del Cauca y las consecuencias que este contexto inflige sobre la comunidad Nasa, así mismo, el acercamiento el estudio de caso es realizado en el año de 2019.

Después de iniciado el proceso de paz se presentó el surgimiento de pugnas de poder entre grupos disidentes de la ya desintegrada FARC-EP, lo que implicó el recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Cauca. Para enfrentar esta dinámica de guerra, las comunidades indígenas, entre ellas la de Jambaló, fortalecieron diversas estrategias para proteger los derechos de la comunidad, entre ellas, la guardia indígena y al aumento de las movilizaciones.

Durante los últimos años, el municipio de Jambaló ha demostrado una evidente resistencia al conflicto armado por parte de su comunidad indígena. Sin embargo, la población ha sufrido los efectos de las disputas armadas entre grupos disidentes y las fuerzas armadas nacional. Para hacer frente a este escenario la guardia indígena ha implementado actividades de control territorial de resguardo que, al no estar coordinadas y articuladas con la fuerza pública, buscan evitar que los grupos armados asuman que el pueblo indígena está en su contra y tomen represalias. (Guzmán & Rodríguez, 2014)

En esta tesis se resalta la importancia de las acciones colectivas que realiza la comunidad indígena Nasa para la defensa de su autonomía y derechos como pueblos. Haciendo uso de la categoría de Resistencia Civil se busca abordar analíticamente estas acciones que contribuyen al fortalecimiento de su identidad cultural. Cada una de esas acciones se realizan bajo el marco de la No violencia, del derecho constitucional a la protesta y de sus derechos propios como comunidad indígena con el fin de administrar y gobernar sus territorios de forma autónoma.

Una de las estrategias de resistencia civil que ha buscado fortalecer la comunidad indígena Nasa es el control autónomo y propio de sus territorios. Al realizarse desde el Cabildo y con la guardia indígena, los representantes de la comunidad se encargan de la administración de los recursos de la misma, así como, de la seguridad de la comunidad.

Por su parte los Kiwe Thegnas, se encargan principalmente de salvaguardar a la comunidad de actores externos, concentrándose en su seguridad y en la protección de la autonomía territorial de una forma pacífica, utilizando solamente el bastón de mando para este propósito. (Márquez, 2018)

Desobedecer y resistir desde el pacifismo ha sido la opción de vida de los indígenas Nasa. El bastón de mando, en este contexto, es el símbolo de resistencia pacífica, defensa y poder de palabra. Llama la atención su colorida apariencia. Pero, si se va más allá de una estética, la simbología del bastón es el verdadero catalizador de su poderoso mensaje de autoridad. Con el bastón, a diferencia del fusil, no hay balas sino palabras.

Los indígenas Nasa no hablan de participación ciudadana o comunitaria sino de mingas, considerados espacios de diálogo y resistencia con los integrantes de la comunidad. Cansados

de la guerra, en el 2001, los Nasa del Norte del Cauca pusieron la Guardia Indígena al servicio de la comunidad, de la defensa de los Derechos Humanos. Actualmente la Guardia Indígena cuenta con 8.000 defensores en todo el país (Márquez, 2018).

Jambaló ha sido uno de los territorios en los que la comunidad indígena se ha organizado para que los actores armados no violenten la armonía del resguardo, un ejemplo de ello fue en el año 2003 cuando “(...) frenaron la toma guerrillera del municipio de Jambaló. Por esta acción recibieron el Premio Nacional de Paz y recibieron un reconocimiento por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas – PNUD” (Márquez, 2018: 2).

En esta tesis, nos preguntamos ¿De qué manera las comunidades indígenas del municipio de Jambaló Cauca utilizan la Resistencia Civil para ejercer el control territorial ante los actores armados entre los años 2015-2019?

Sostenemos como argumento central que la resistencia civil protagonizada por los movimientos indígenas propone el uso de métodos propios frente a las constantes acciones violentas que adelantan los grupos armados, así como, del Estado. De esta manera el uso de la resistencia civil permite generar estrategias de protección del territorio como son las marchas, las mingas, cerrar el territorio para expulsar a los actores armados. Además, sirve como elemento simbólico para proteger su cultura, sus territorios y fortalecer los lazos de cooperación entre comunidades. También, para ejercer un control territorial que mantenga la armonía dentro de este.

Como objetivo principal se busca determinar la función que la comunidad nasa le ha dado a la Resistencia Civil para ejercer el control territorial. Además, planteamos tres objetivos específicos. El primero, ilustrar las dinámicas que utilizan los actores armados para disputar el control territorial a las comunidades indígenas. El segundo, describir las diferentes estrategias de Resistencia Civil que utilizan las Comunidades Indígenas para defender el territorio. Finalmente, con el objetivo específico tres, se busca explicar la función que cumple la Resistencia Civil para que las comunidades ejerzan el control territorial. Esperamos, al finalizar esta tesis llenar ese vacío académico existente sobre la poca información y explicaciones que se tienen para comprender la función que cumple la Resistencia Civil en la defensa del control territorial.

ESTADO DEL ARTE

La lucha histórica de los pueblos indígenas del Cauca ha dejado huella por su decisión política de resistir en defensa de su cultura, autonomía y el legado de grandes líderes. Estos pueblos le apuestan a la lucha para la transformación social desde un proyecto político propio y no violento, por lo tanto, en el presente estado del arte ilustraremos las múltiples formas de lucha por los territorios, resistencia civil y ejercicios de autonomía utilizada por los pueblos indígenas del sur de Colombia.

Para cumplir con ese objetivo nuestro, nos proponemos dividir el presente estado del arte en dos temáticas. En la primera, presentaremos la literatura que aporta al estudio de la territorialidad indígena, para este fin, elegimos los textos de investigadores como Barabas (2014), Larson y Soto (2012), Cisneros (2007), Colla (2017), Gutiérrez y Moya (2018), (Ulloa 2012) y la investigación de Duarte (2013). Con la segunda temática buscamos profundizar en los estudios relacionados con la autonomía indígena y sus manifestaciones de resistencia. Para cumplir con tal fin referenciamos a autores como Lerma (2016), Viera (2018), Torres-Salinas y Azócar-García (2016), Zibachi (2007), Álvarez y García (2016), López (2016), Muñoz (2017), Alvarado (2016), Ulloa (2010), Acosta- García y Dubois (2016), Hernández Delgado (2006), Levalle (2018), Rudvist y Anrup (2013), y terminaremos con el texto de Llano(2018).

Cabe resaltar que los textos utilizados para nuestra investigación provienen de distintas latitudes de Latinoamérica dadas las similitudes históricas de lucha por la autonomía indígena. Por ende, para una mejor comprensión y lectura, las referencias bibliográficas utilizadas en este estado del arte se encuentran organizadas desde lo global hacia lo local. Iniciamos con autores latinoamericanos, luego citamos aquellos autores que han estudiado el tema teniendo como sujeto de estudio diferentes comunidades indígenas de Colombia y,

finalmente, aquellos estudios que se han interesado puntualmente por el tema indígena en el departamento del Cauca.

De esa manera, en un primer momento, expondremos la literatura que estudia la territorialidad indígena como un potencial político y como un medio de reivindicación de derechos para las comunidades originarias. Estas investigaciones son importantes porque demuestran como los procesos económicos, especialmente los neoliberales y neoextractivismo, vulneran su acceso a la tierra, a los recursos vitales (agua) y, también limitan las oportunidades de subsistencia de los indígenas.

En un segundo momento abordaremos los ejemplos de autonomía y resistencia, al igual que, las razones que han obligado a las comunidades indígenas a defender sus derechos. En concreto, nos referimos a las amenazas provenientes de la violencia directa y estructural, desempeñada por grupos armados legales e ilegales, así como de organizaciones multinacionales, representantes estatales, entre otros actores.

Hay que mencionar, además que en el ámbito metodológico los enfoques predominantes identificados en el cualitativo y cuantitativo. Cuando se hace uso del primer enfoque los estudiosos del tema han utilizado herramientas como las entrevistas donde identifican los significados que las comunidades indígenas le otorgan a la resistencia social. También, han buscado acercarse a la construcción de identidad, organización social, autonomía y resistencias sociales lideradas por las comunidades. Un número significativa de autores usan la observación y la etnografía para comprender la forma cómo se visibilizan las luchas históricas y los contenidos para denunciar la violencia presente en los territorios. El enfoque cuantitativo es utilizado como una herramienta para acopiar información sobre el contexto sociopolítico y económico, las estadísticas de daños forestales, la afectación en las cuencas hídricas y las pérdidas de territorio indígena. Este enfoque en el caso colombiano es utilizado para medir el coeficiente Gini, presentando la evolución distributiva desigual de la tierra entre las décadas de 1970,1980, 1990 y 2000, también encontramos el conteo de hechos violentos protagonizados por actores armados entre los años de 1988 y 2012.

¿Qué dicen los estudios sobre la Territorialidad?

Nos interesa destacar los debates sobre el territorio y los contextos sociales de las comunidades indígenas de Latinoamérica, las cuales lideran una lucha por la supervivencia de sus comunidades en tierras disputadas por los pueblos originarios contra el Estado y las multinacionales.

Iniciemos con Barabas (2014). La autora observa, en la comunidad indígena oaxaqueña en México, como las autoridades crean categorías administrativas para instituir un ordenamiento territorial, una distribución agraria y un control político de los territorios de los pueblos originarios. Según Barabas, las categorías estatales son profundamente coloniales, continúan reproduciendo estigmas sobre las comunidades y transforman radicalmente su cultura. Por esa razón, el objetivo principal de su investigación es tomar las categorías, concepciones y prácticas propias de los indígenas acerca del territorio, principalmente las que aún se encuentran vigentes en las culturas indígenas, destacando así, los lugares sagrados que permiten trazar mapas territoriales de cada grupo étnico.

Metodológicamente, Barabas recurre a fuentes etnohistóricas para comprender la interrelación entre las simbolizaciones y prácticas relacionadas con la naturaleza, objetos y oralidad. En su investigación desarrollada en Oaxaca, la autora le confiere gran importancia al concepto de espacio, ya que, para ella no es inerte sino un objeto activo en la construcción simbólica del territorio, llevándola a pensar que la interacción humana mediante asignación de atributos especiales a las montañas, los ríos, las piedras, los árboles, las cuevas, crean una pertenencia colectiva. En otras palabras, para Barabas el espacio se constituye como un territorio cultural, al ser nombrado e identificado con representaciones, concepciones y creencias de profundo contenido emocional e histórico.

Según Barabas, las connotaciones geopolíticas creadas por instituciones de control territorial, no solo invisibiliza, sino que restringen la libertad cultural y la autonomía de los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca, pues estas instituciones dan por sentado que todos los territorios del Estado mexicano son homogéneos. Esta es una crítica importante para nuestro

estudio, ya que, es fundamental para la autonomía indígena demostrar la diferencia de su territorio con otros espacios que componen el país, esta distinción solo es posible por las características simbólicas e históricas referenciadas por la autora.

Bajo una perspectiva institucionalista, Larson y Soto (2012) siguen de cerca a las comunidades étnicas (especialmente las indígenas) de la Costa Caribe de Nicaragua en su lucha por la titulación de sus territorios. El gobierno nicaragüense creó la Ley 445, que institucionalizó el reconocimiento de los derechos históricos colectivos de las comunidades de las Regiones Autónomas, esto fue gracias a una alianza entre los líderes del partido Yatama y el gobierno del Frente Sandinista. Hasta el año el año 2011, se titularon 15 territorios para la comunidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RAAN), no obstante, estos territorios abarcan 215 comunidades, lo cual implica cerca de 2.25 millones de hectáreas. Según los cálculos mencionados en la investigación, se preveía que, si la titulación avanzaba según las proyecciones, el porcentaje de los territorios indígenas dentro de las tierras pertenecientes al país sumará el 30% del territorio.

Sin embargo, la hipótesis de Larson y Soto argumenta que un título no es garantía de seguridad ni mejoras de vida para los habitantes del RAAN. Para garantizar una gestión de la distribución del territorio justo, efectivo y equitativo, se necesitan instituciones de gobernanzas efectivas para disminuir la pobreza y para contrarrestar las amenazas. Los autores creen que las instituciones deben estar asentadas en el territorio y deben consolidar un puente de diálogo entre los sujetos políticos de las comunidades étnicas.

En ese sentido, el estudio realizado por las autoras tiene como propósito generar una mayor comprensión y comunicación sobre las dinámicas de los procesos de construcción territorial (estatal) y la gestión colectiva de la territorialidad (Estado + comunidades étnicas). Para lograr su objetivo, proponen sistematizar la información y las percepciones de tres territorios indígenas recién titulados en la RAAN.

La metodología de Larson y Soto consiste en la aplicación de una metodología en perspectiva de observación participativa. Mediante, la creación de un diplomado en territorialidad,

gobernanza y derechos territoriales, dirigido a las autoridades étnicas del RAAN. El diplomado se llevó a cabo entre enero y junio de 2011, con la participación de 40 estudiantes líderes de ocho territorios y, también se hizo trabajo de campo en tres territorios del RAAN. Este tipo de metodología participativa permitió conformar vínculos entre las autoridades, al igual que, identificar con mayor facilidad los obstáculos y el potencial de la gestión territorial.

A diferencia de Barabas, Larson y Soto realizan un estudio institucionalista estableciendo así una alianza entre las autoridades, la cual beneficio al Estado en su ejercicio de ente controlador en la distribución de tierra. Por otro lado, las comunidades se vieron beneficiadas porque no solo lograron concretar la administración de su territorio sino crear líderes que se encargaran de velar por la justa distribución y, también de contribuir a minimizar problemas locales. Este estudio resulta importante para nuestra investigación porque demuestra el resultado de luchas históricas étnicas por el territorio materializadas en tratos de beneficio, tanto para el gobierno nicaragüenses, como para las comunidades étnicas.

Ahora bien, el siguiente texto es opuesto al anteriormente referenciado. Cisneros (2007) señala que el Parque Nacional Yasuní es el área continental más grande protegida por el Ecuador, allí se encuentran los recursos naturales más preciados para la nación, en este espacio habitan las comunidades indígenas: Quichua y Huaorani, quienes dependen de la preservación de este territorio, pues en él encuentra su sustento diario y la preservación de su etnia y cultura. Cisnero indica que, a pesar de las denuncias realizadas por reconocidos círculos académicos, burócratas y activistas ambientales, la explotación extractivista aún sigue vigente en el territorio ecuatoriano, obligando a las comunidades indígenas a fomentar modelos de sostenibilidad y conservación en el Parque Nacional Yasuní.

La hipótesis de Cisnero está orientada a una problemática de inclusión. Este autor se preocupa por estudiar los aportes indígenas a la conservación del medio ambiente a raíz de las modificaciones de gobernanza ambiental durante los años 90's. Su argumento central sostiene que el gobierno ecuatoriano, al no reconocer los aportes que hacen las comunidades indígenas a la sustentabilidad ecológica y a la construcción de una democracia funcional, no atiende realmente las demandas de estas comunidades.

El objetivo central de Cisneros es realizar un estudio que abarque los emprendimientos de conservación tanto del Estado ecuatoriano como de los Quichua y Huaorani, sin dejar de lado los cambios culturales producidos por los proyectos políticos y la explotación extractivista.

El autor usa diferentes métodos de investigación, entre ellos se encuentra el análisis documental de la literatura proveniente de la extracción y la conservación de la Amazonía ecuatoriana para identificar las zonas de atención prioritaria del parque Yasuní. Así mismo, hace un trabajo de campo con 10 comunidades de la región amazónica cerca al Napo, con la intención de conocer de cerca la visión de los actores involucrados directa o indirectamente con los desórdenes sociales y ambientales producidos por el extractivismo.

En Cisneros encontramos un aporte valioso para nuestra investigación, este autor profundiza sobre el debate proveniente de la responsabilidad estatal con el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas, en ese sentido, muestra los indígenas como activistas y líderes medio ambientales. Sin embargo, este trabajo debió desarrollar los procesos de resistencia medio ambientales dirigidos por las comunidades cercanas al Napo, solo menciona los problemas relacionados con la expansión extractivista, pero no las respuestas de las comunidades a dicha expansión.

Bajo esa misma perspectiva de estudio, Colla (2017) observa como el conflicto por el territorio entre el gobierno argentino y la comunidad del pueblo Qom, se ha acrecentado debido al acelerado avance del desarrollo capitalista y la explotación de recursos naturales en el territorio indígena. Claramente, la explotación directa o indirectamente transforma negativamente a las poblaciones campesinas e indígenas que allí habitan. El objetivo principal de la autora es entender la disputa por el territorio que hay entre los indígenas frente a los proyectos extractivistas propuestos desde el gobierno de la provincia de Chaco.

Metodológicamente, Colla elige como sujeto de estudio al pueblo Qom, que representa el 74,5% de la población indígena de la provincia de Chaco y es uno de los pueblos con mayor desplazamiento rural interno de la región del noroeste argentino. La autora trabaja con la

comunidad Qom que vive en los parajes rurales cercanos a la localidad de Pampa del Indio, ya que allí es donde se desarrollan las mayores disputas territoriales. Colla especifica que su investigación es de índole cualitativo, pues recurre a técnicas de recolección de información como entrevistas semiestructuradas, observación participante en acciones comunales (asambleas y actos de protestas); la autora también usa datos catastrales, periodísticos y estadísticos.

Uno de los elementos más destacados de la investigación de Colla es el aporte que hace a la construcción de identidad etnopolítica de los indígenas, este aporte surge del análisis de la vida cotidiana de los Qom con el vínculo territorial de la comunidad. Este grupo indígena en todas sus esferas sociales procura crear medios sociales y laborales con la tierra, casi siempre se reorganizan para enfrentar a la producción capitalista. Es así como, Colla se convierte en un elemento importante para nuestra investigación por su estudio a la variedad de métodos de resistencia territorial utilizado por los Qom: la solidaridad familiar en la producción y cosecha de alimentos, recolección comunal de frutos y miel para autofinanciamiento, comercialización de algodón en cooperativas indígenas, entre otros elementos.

Esta investigación pone en evidencia los conflictos por la tierra, pero se enfoca en las prácticas claves para evadir los dispositivos capitalistas de poder, al igual que, en las condiciones propiciadas por los Qom para el cuidado de su territorio.

La investigación de Gutiérrez y Moya (2018) presenta las demandas de los pueblos indígenas frente a la continua omisión del Estado costarricense. Este trabajo busca visibilizar las demandas por los derechos de las comunidades indígenas desarrolladas hace más de 40 años. La hipótesis de los autores plantea que la demanda y propuestas de los movimientos indígenas de Costa Rica, ha ido configurando una agenda política centrada en consignas en favor de los derechos colectivos, especialmente en la no intromisión de las agentes estatales en sus territorios y en el reconocimiento de sus autoridades tradicionales. El objetivo principal que se plantean los autores es realizar una reflexión sobre las demandas de 8 organizaciones de pueblos indígenas costarricenses frente a sus negociaciones políticas con

el Estado. Además, su intención es demostrar el poco interés estatal frente a la legislación de distribución de tierras indígenas.

Este trabajo parte de la desposesión histórica de tierras indígenas desarrolladas desde la época colonial hasta la década de los años 70's; Gutiérrez y Moya, señalan reiteradamente una visión estatal presente a lo largo y ancho del continente americano, la cual tiende a homogeneizar todos los territorios pertenecientes a la nación, lo que conlleva al despojo constante de tierras de estos pueblos. Sin embargo, este trabajo dedica gran parte de sus páginas a la descripción densa de momentos coyunturales, actas legislativas y reformas gubernamentales, lo que conlleva a un insipiente desarrollo del objetivo principal, no terminan de mostrar las acciones de autonomía y exigencias contra el Estado costarricense.

Por otro lado, Ulloa (2012) se encarga de investigar las representaciones de territorialidad indígena en Colombia. Según Ulloa, la territorialidad y sus representaciones son ampliamente definidas dadas sus riquezas, a pesar de ser de gran valor para la nación, estos territorios y sus recursos están en mira de intereses transnacionales, cuyos actores buscan implantar políticas ambientales y económicas que favorezcan la explotación desmesurada en el país.

Para la autora, existen muchos más actores involucrados en la lucha por la tierra. La hipótesis de Ulloa plantea que los encargados de la explotación de recursos mineros, forestales o hídricos, y la presencia de actores armados, desconocen los territorios de los indígenas e imponen otras lógicas de relación con el espacio provocando la desterritorialización de los grupos tradicionales. En esa perspectiva, la autora cree que se invisibilizan las espacialidades ya existentes para crear nuevas valoraciones territoriales basadas en prioridades surgidas del mercado. Por lo tanto, el objetivo central es repensar las potencialidades y las limitaciones de los enfoques convencionales sobre el análisis de los territorios indígenas, planteando así, otras maneras de entender las representaciones y control de los territorios.

Para lograr este propósito, Ulloa plantea una doble metodología de interpretación: la primera está ligada a la observación y explicación de las dinámicas territoriales indígenas bajo el

concepto de autonomía relacional indígena, la cual supone estrategias de construcción de alianzas, reconsiderando así, las negociaciones y relaciones con otros actores sociales como: agentes armados ilegales y legales, otras comunidades indígenas, representantes estatales, empleados de multinacionales, entre otros actores. En un segundo momento, la autora recurre a las discusiones surgidas de la geografía crítica, la geografía feminista, las ontologías relacionales y la ecología política, estos enfoques le permiten abordar otro concepto clave en su análisis: territorialidades alternativas.

Ulloa es un referente primordial en nuestra investigación, dado que, nos posibilita profundizar en las prácticas espaciales indígenas, también nos permite observar detenidamente las lógicas de representación en constante cambio por la interacción con agentes externos al territorio. Este texto nos deja claro que las comunidades indígenas se transforman con la intención de establecer alternativas de representación y control territorial, no solo a través de la confrontación sino también de acciones sigilosas que potencien su autonomía. Por último, quisiéramos resaltar una idea crucial para el estudio de estas comunidades, es importante para el investigador no interponerse a las alternativas de los pueblos indígenas con análisis conceptuales y aportes academicistas.

Por último, Duarte (2013) investiga las dificultades institucionales al momento de reconocer los territorios indígenas y afrodescendientes del suroccidente colombiano. Según Duarte, la constitución de 1991 reconoció la diversidad cultural de Colombia, creando un esquema diferencial de derecho cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, los grupos étnicos en su ejercicio de control territorial se encuentran bajo dos grandes dificultades: la falta de herramientas para gobernar sus territorios frente a actores externos, al igual que, deficiencia de recursos para la administración de la salud, la educación y la financiación de proyectos locales.

Para su estudio, Duarte se acerca a las comunidades de CORPOAFRO (Patía), ACONC (Santander), representantes autónomos de organizaciones campesinas, Consejo Comunitario Campesino de Palenque Monte Oscuro (CCCPM- Puerto Tejada), CRIC y, el Movimiento Campesino de Cajibío. Son tres los objetivos del autor: entender las situaciones de conflicto

interétnicas generada por la falta de herramientas para gobernar los territorios; revisar el endeudamiento de sectores campesinos con el Banco Agrario para prever la pérdida de tierras por endeudamiento; por último, observar los problemas que han generado las políticas públicas.

El aporte más importante para nuestra investigación es el uso de distintos mecanismos metodológicos para la sistematización de información; Duarte en reiteradas ocasiones usa la cartografía social como herramienta para identificar los problemas económicos y sociales de las comunidades, también señala mediante los mapas el desplazamiento de las comunidades en el territorio. No obstante, el aporte más significativo de Duarte proviene de su trabajo de campo con los indígenas, campesinos y afrodescendientes, al proponer soluciones en reuniones lideradas por los movimientos locales.

Para finalizar con este apartado, presentaremos algunas consideraciones relacionadas con el tema de territorialidad. En los estudios referenciados, las comunidades indígenas tienen una característica común: la tierra es el principal componente en el desarrollo de su vida diaria. Así lo concluyen, autoras como Barabas, Ulloa y Colla, sin dejar de lado la perspectiva institucionalista presentada en autores como Cisneros, Larson y Soto, García y Mora. Estos enfoques tienen una ventaja, pues al problematizar las distintas razones que afectan el territorio indígena visibilizan las interpretaciones, alianzas y contextos, por los cuales surgen las manifestaciones de resistencia y autonomía.

La autonomía y resistencia: Variables de interés académico para comprender las acciones colectivas indígenas

Con el estudio de las variables autonomía y resistencia nos interesa acercarnos a las manifestaciones colectivas adelantadas por las comunidades del norte y sur del continente. Iniciemos con el texto de Lerma (2016), esta autora presenta una de las comunidades indígenas más grandes de México, el pueblo Yaqui cuenta con aproximadamente 35.000 miembros y está ubicado al sur del Estado de Sonora. Esta comunidad se caracteriza por liderar una lucha histórica por la restitución de su territorio, el reconocimiento federal para

reordenar su territorio de manera autónoma y, su lucha constante por el derecho al acceso del agua.

Como hipótesis, Lerma sostiene que las condiciones agrestes del ecosistema del sur de Sonora han provocado que el abastecimiento de agua de la presa La Angostura, retenga el caudal del Río Yaqui, que se encuentra cercano al territorio indígena, pero este está bajo el control de la Comisión Nacional del Agua, por lo tanto, el abastecimiento del líquido para la comunidad requiere de largos y constantes trámites burocráticos. La lucha por la conservación del agua es especialmente difícil, el movimiento se ha visto golpeado críticamente en los últimos años.

Lerma se interesa por seguir de cerca la autonomía Yaqui, por eso, su principal objetivo es mostrar el modo en que se ha desarrollado la coyuntura de resistencia por el vital líquido y los procesos legales que esto ha provocado para la comunidad. La autora recurre al análisis teórico de las manifestaciones de resistencia en especial a las formas de autonomía locales, encontrando a su paso que la comunidad al ser tan amplia se rige bajo un sistema de democracia representativa. Este tipo de sistema también se ha convertido en un obstáculo para el movimiento, pues existe una división interna en la comunidad para elegir al representante que muestre la verdadera tradición yaome.

Finalmente, nos resulta interesante el trabajo de seguimiento realizado por la autora. Destacamos las manifestaciones de autonomía de la comunidad, en especial, las relacionadas con la creación de conocimiento y debate; el pueblo Yaqui ha liderado encuentros de diálogo con el gobierno local y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para acordar el derecho y respeto de las distintas formas de gobiernos; esta comunidad también ha fomentado foros nacionales e internacionales para la defensa del agua.

Las obras de Viera (2018), Torres-Salinas y Azócar García (2016), y Zibeche (2007), nos acercan al panorama de resistencia y autonomía encabezado por el pueblo Mapuche en Chile. Particularmente, Viera (2018), se enmarca en la línea de los estudios históricos de las comunidades originarias, esta autora se refiere a la autonomía mapuche como una de los

movimientos de demandas reivindicativas más importantes de América Latina. El carácter reivindicativo de las actuales demandas se remonta a las movilizaciones iniciadas durante la ocupación militar del ejército chileno en la segunda mitad del siglo XX.

Según la hipótesis de Viera (2018), el movimiento autonomista mapuche es de larga duración, pues desde el periodo de post ocupación (1968) se ha presentado un carácter continuo de lucha hasta que, en el año de 1997, se establece el surgimiento de un nuevo ciclo de reivindicaciones, el cual fue perseguido constantemente por el Estado.

El artículo de Viera tiene por objetivo realizar un recorrido por algunas de las experiencias organizativas mapuche más relevantes desde el periodo post ocupación, buscando comprobar la autonomía del pueblo al despojo de territorio. Para lograr su objetivo, la autora resalta 6 momentos históricos para el movimiento, pero nosotros rescatamos el último momento por su especial similitud con el movimiento indígena colombiano. Viera menciona que el control territorial al quedar en manos de los indígenas, permite la organización de las prácticas productivas como la recolección de alimentos y la venta de objetos artesanales, para asegurar una base económica en beneficio de los indígenas empobrecidos de la comunidad.

Entre otros elementos particulares de las manifestaciones de resistencia, se encuentra el trabajo continuo de recuperar el control del territorio que en algún momento fue despojado, al igual que, lo realizado por los indígenas misak en los años 70's.

Por otro lado, Torres-Salinas y Azócar-García (2016), investigan la relación entre monocultivos forestales y escasez hídrica, se enfocan en la forma en como ese vínculo afecta la movilización del pueblo Mapuche contra el modelo de desarrollo forestal. Los autores ilustran la forma como el Estado chileno, a partir de una política de repoblamiento de la zona rural distribuyó los terrenos de bosque a nuevos colonos europeos, principalmente a familias suizas y alemanas, en menor medida a las familias chilenas. Los nuevos propietarios iniciaron actividades de agricultura a gran escala contrario a la agricultura móvil y pequeña que practicaban los Mapuche. Este tipo de agricultura respeta los ciclos de

regeneración del bosque nativo. Mientras, que con los nuevos pobladores se avanzó en la destrucción del bosque, reduciendo la disponibilidad del agua para los indígenas.

Torres-Salinas y Azócar-García destacan que el proceso de entrega de tierras a empresas privadas y nacionales, fueron gradualmente habilitadas para macro producción agrícola mientras que otros terrenos fueron destinados a explotación mineral. Los autores de manera crítica, haciendo uso de los argumentos relacionados con la ecología política y la justicia ambiental, llaman la atención respecto a la lucha del pueblo mapuche a través de las movilizaciones para recuperar y reivindicar las tierras ancestrales despojadas, al igual que, la resistencia realizada frente el avance de la degradación ambiental y escasez del líquido vital asociado al monocultivo forestal. Además, destacan la importancia de la movilización social Mapuche se encuentra en el amplio abanico de estrategias alternativas de resistencia, a pesar de la constante criminalización de su lucha. Entre las características propias de resistencia Mapuche se encuentran la formación de nuevos sujetos ambientalistas. Los autores los definen como las “personas que han llegado a pensar y actuar de nuevas formas en relación al dominio del medioambiente siendo gobernado”(Torres-salinas et al., 2016, p. 124).

Esta investigación se convierte en un referente para nuestra tesis, pues establece la relación entre los recursos naturales de los Mapuche y los efectos causados por las migraciones, entre ellos, la deforestación en los lugares en donde se concentra la resistencia indígena. Los autores mencionan en varias ocasiones la diversidad de mecanismos de resistencia realizada por los Mapuche, identificando a su paso, el valor de la autonomía y la identidad, dos características fundamentales del pensamiento indígena chileno.

Para complementar el panorama de resistencias Mapuche, abordaremos el trabajo realizado por Zibechi (2007). Su trabajo describe como la violencia contra los pueblos indígenas, se ha desarrollado mediante el uso de la fuerza; además, resalta la constante omisión y criminalización del Estado hacia el pueblo Mapuche. Se trata de un proceso constante de penalización del movimiento.

El objetivo de Zibechi es visibilizar la resistencia del pueblo Mapuche que ha renacido constantemente pese a la violencia directa y estructural, además de la constante criminalización al movimiento social por parte de los medios de comunicación. Este activista recoge tres entrevistas a personas pertenecientes a la comunidad, donde prioriza sus testimonios de experiencias en la lucha contra las prácticas neoliberales estatales, con ello, su intención principal es presentar las denuncias sobre el deterioro ambiental y social realizadas por decenas de comunidades Mapuche. El autor también se acerca a las comunidades de pescadores y campesinos quienes, de igual forma, advierten los peligros de seguir desarrollando la industria forestal.

Zibechi contrario a Torres y Azócar, profundiza en los testimonios de los habitantes de estas regiones, caracteriza el concepto de resistencia a partir de las vivencias de los Mapuche y no-mapuches; lo anterior termina siendo de especial interés para nuestra investigación, ya que, el acercamiento realizado por el autor nos permite comparar las experiencias de los Mapuche, con las del pueblo Nasa y Misak del municipio de Jámalo. No obstante, el artículo de Zibechi carece de otro tipo de métodos de investigación que profundicen sobre las condiciones sociales de estas comunidades, además, reiteradamente menciona que existe una estigmatización mediática por parte de los medios de comunicación de Chile, pero no explica en que consiste tal estigmatización ni cómo ni de qué forma se realiza. En definitiva, es un texto que sintetiza las experiencias de la población mapuche, pero no ahonda en los medios ni las herramientas de la violencia estructural y mediática que los afecta.

Bajo esa misma línea de trabajo se encuentra el artículo Álvarez y García (2016), quienes investigan las razones que han llevado a los pueblos indígenas a una emergencia social. Este estudio es de gran relevancia para nuestra investigación por dos razones. La primera, se refiere al énfasis de derechos étnicos de los grupos indígenas del Valle de Calchaquíes; la segunda razón, el ejercicio de autonomía realizado por los indígenas Quilmes e Ingamas por presentar diferentes perspectivas sobre el ejercicio de la participación y organización política.

Álvarez y García, observan que la reforma constitucional en Argentina en el año de 1994 reconoció la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos indígenas consolidando un cuerpo de medidas legislativas especiales con el fin de respetar la diversidad cultural y los derechos especiales indígenas. Sin embargo, la hipótesis planteada por los investigadores sostiene que las legislaciones e instituciones nacionales, en gran medida, han incumplido el marco jurídico definido para tal fin vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.

Apoyados en la interpretación realizada por Carlos Montemayor, los investigadores complementan la definición del concepto de autonomía al mencionar que gran parte de la vida de las comunidades indígenas desde hace siglos se desenvuelve por una toma de decisiones propias y articuladas en su comunidad. Al respecto, ejemplifican el concepto a través de las acciones comunitarias llamadas “fajina” o “tequio”, las cuales han sido esenciales para la subsistencia de numerosas comunidades incapaces de contratar mano de obra.

No obstante, la emergencia social se replica en otras latitudes del hemisferio sur, López (2016) investiga el proceso de transformación estatal en Bolivia y los retos que eso representa para las comunidades indígenas. El proceso de plurinacionalidad implica el reconocimiento e implementación de las autonomías indígenas como una de las propuestas para transitar hacia la construcción plural del Estado.

La hipótesis de López plantea que el gobierno boliviano estaría priorizando las visiones y las políticas basadas en los modelos de “desarrollo” de tipo neo-extractivista, contradiciendo el sentido de las autonomías indígenas establecidas en la constitucional nacional, lo que conllevaría a generar conflictos de índole socio-territoriales y socio-ambientales, además de poner en tela de juicio los principios y alcances de la plurinacionalidad del gobierno boliviano.

Su objetivo aproximarse a los procesos de disputa por la autonomía indígena y la plurinacionalidad en Bolivia, con el fin de analizar la reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la sociedad. López aclara que la vulneración de la autonomía de los pueblos

indígenas bolivianos estaría provocando una ola de manifestaciones y la reactivación del movimiento indígena, abanderados en reivindicaciones político-territoriales de autonomía y descolonización. Estos movimientos representan la resistencia frente a las políticas estatales capitalistas.

Por otro lado, Muñoz (2017) observa como la condición de colonialidad (heredada desde la conquista) en Bolivia, sienta unas bases para el desarrollo de una relación desigual de poder, vínculo que se mantiene hasta el día de hoy. En ese sentido, la hipótesis de la autora se encuentra dirigida a responder las siguientes preguntas, ¿quién tiene acceso a los recursos naturales y el territorio? ¿cómo se gestionan estos territorios? ¿qué tensiones surgen del control territorial?, además, este trabajo también se preocupa por la construcción de las relaciones de género creadas en torno a la figura de lo “indígena”. Por lo tanto, la autora se plantea las siguientes preguntas ¿quién, ¿cómo y desde dónde se definen las relaciones de género en las comunidades indígenas bolivianas?

Es así como la autora pretende dar una serie de aportes interdisciplinarios de distintos momentos históricos relevantes para la construcción de las relaciones de poder en torno a la naturaleza, la identidad y el género. A partir de ello, busca mostrar algunas de las continuidades y quiebres de estas relaciones en distintas épocas del movimiento indígena. Para lograr su objetivo, la autora aborda los principales aportes del movimiento indígena boliviano y ecuatoriano (el buen vivir o vivir bien) durante un momento de cambio estatal y contexto de conflictos socioambientales (se refiere a los últimos años del siglo XX e inicios del XXI).

Muñoz nos invita a comprender el dialogo entre los saberes tradicionales y los debates actuales de las ciencias sociales. En ese sentido, la despatriarcalización de las sociedades originarias propuesto por Muñoz, tiene una gran relevancia para nuestro análisis porque su práctica cada vez es más clara en las comunidades indígenas, lo cual conlleva a un cambio radical tanto en las relaciones de género como en la organización de la autonomía. Además, no todas las sociedades indígenas se basan en relaciones patriarcales, en nuestro país existen comunidades étnicas que practican la complementariedad como un modo de vida.

Para el caso peruano, Alvarado (2009) se ocupa de estudiar los hechos conocidos como “el Baguazo” en la Curva del Diablo en el año 2008. Estos hechos propiciaron un gran debate público por la invasión petrolera, el conflicto entre la población indígena amazónica y el gobierno peruano duro dos años, sin embargo, el abuso y la explotación por parte de las empresas extractivistas, sobre todo petroleras, con respaldo de los diferentes gobiernos venía dándose desde varias décadas. Los pueblos indígenas aledaños a la Curva del Diablo se levantaron ante el inminente daño medio ambiental en su territorio. La hipótesis de Alvarado infiere que el movimiento indígena de estos dos años marca un antes y un después para la región del Bagua.

Sin embargo, la metodología utilizada por Alvarado es corta para el análisis que propone, ya que su trabajo se encarga de hacer una larga narración de los hechos, relacionado cada hito durante los años de 2008 y 2009 con coyunturas que marcaron la lucha de las comunidades étnicas del Bagua. De este autor rescatamos que visibilizara la causa indígena, pues no omite ningún detalle de los hechos ocurridos durante el “Baguazo”, haciendo especial énfasis en las cohesiones socioculturales entre las comunidades por la “defensa de la tierra”, sin importar las connotaciones económicas, sociales, religiosas, políticas y de la cosmovisión de cada uno de los pueblos presentes en esa lucha.

Lo que dicen los estudios sobre la autonomía y la resistencia indígena en Colombia

Ahora se pasará a presentar los trabajos en el ámbito nacional, se trata de las siguientes investigaciones: se iniciará con el trabajo de Ulloa (2010), Acosta- García y Dubois (2016), Delgado (2006), Levalle (2018), Rudqvist y Anrup (2013), terminaremos con la investigación de Llano (2010). Estos trabajos estudian a las comunidades indígenas del sur occidente colombiano, especialmente la labor realizada por el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), a través de las tres últimas décadas del siglo XX y las dos iniciales del XXI.

Retomaremos los aportes realizados por Ulloa (2010), pero esta vez enfocados al análisis de autonomía de los grupos indígenas de Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). En SNSM, las demandas de los pueblos indígenas está presente la autonomía y la autodeterminación, las cuales han sido tanto apoyadas como fuertemente criticadas. Tanto la autonomía como la autodeterminación de los pueblos indígenas del país se enfrentan a desafíos de consolidación por los contextos de transformación estatal (dinámicas de desarrollo económico, conflicto armado y procesos de violencia que se libran en territorios indígenas).

En su hipótesis, Ulloa señala que la intromisión de distintos actores en el territorio indígena obliga a estas comunidades a repensarse constantemente su papel en las relaciones con estos actores y, sobre todo en la defensa de su autonomía. Su objetivo principal es reflexionar acerca de las nuevas realidades territoriales y políticas de los pueblos indígenas en Colombia, en especial en los que se encuentran en la SNSM (Kogui, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos).

La autora se propone metodológicamente analizar tres problemas que tienen las comunidades de la SNSM: el primero es la explotación y las políticas medioambientales que resultan de la alianza transnacional; en un segundo momento, observa como las políticas gubernamentales pretenden limitar la movilidad de las comunidades y, a su vez, expandir los límites territoriales de la nación; en tercer momento, evidencia los hostigamientos y enfrentamientos entre grupos armados por el territorio indígena.

En cuanto a la autonomía, es fundamental para nosotros las recomendaciones hechas por la autora a los investigadores al momento de estudiar los regímenes autonómicos de las comunidades indígenas del país. Como, por ejemplo, no desconocer la transferencia de capacidades, toma de decisiones y competencias administrativas de las autoridades multiétnicas locales. También, es fundamental observar detenidamente las políticas de autogobierno que funcionan dentro de las jurisdicciones indígenas legalmente reconocidas. Por último, la delimitación territorial es vital para entender los ejercicios de defensa de los derechos colectivos sobre la tierra y los recursos naturales.

Bajo esa misma perspectiva de estudio, Muñoz – García y Dubois (2016) plantean los desafíos que existen al momento de definir el bienestar de los pueblos indígenas. Para ellos, este trabajo exige ir más allá de las visiones estatales sobre las comunidades indígenas. Al igual que Ulloa, estos autores creen que el bienestar de la comunidad uitoto se ve comprometida por la intromisión de actores externos que imponen un nuevo orden territorial y los limitan a un solo tipo de gobierno. Por lo tanto, Muñoz-García y Dubois se proponen hacer una revisión teórica de las visiones indígenas, a partir de los estudios realizados por Sen, Rabasco y Toharia. Su objetivo es proponer nuevas nociones para la definición de los indicadores de bienestar, permitiendo así establecer nuevos objetivos y evaluar los resultados de los proyectos del gobierno sobre la comunidad uitoto.

En resumen, resaltamos el aporte realizado por los autores al señalar las características de la autonomía de la comunidad uitoto: 1) el control colectivo del territorio en organizaciones sociales propias, lideradas por instituciones y autoridades tradicionales; 2) capacidad de agencia cultural autónoma: la comunidad uitoto no solo concibe el territorio desde el punto de vista geográfico sino que el territorio es un mundo donde existen relaciones que involucran a los seres humanos, a los seres sobrenaturales y a los seres naturales; 3) por último, uno de los aspectos más importantes del ejercicio de la comunidad uitoto es la capacidad de lograr un ambiente tranquilo, es decir, a establecer aspectos de orden cultural y social que permitan la vida en comunidad: el respeto entre las personas, la vida sin vanidad, la vida sin orgullo y, la inteligencia (muchos autores llaman a estas nociones, *vivir bien*).

El CRIC (Consejo regional indígena del Cauca) se ha caracterizado por tener una lucha histórica, resistiendo a las mismas condiciones de exclusión y violencia estructural como las demás comunidades que hemos mencionado. De forma ejemplarizante, desde su resistencia ancestral en la historia reciente de Colombia, esta comunidad se ha convertido en un importante actor social y político, aportando significativamente a la construcción de paz en el país. Hernández (2006) sostiene al igual que, Álvarez y García, la diversidad étnica que caracteriza a Colombia, pues entre su población hay grupos indígenas, afrodescendientes, gitanos, raizales, entre otras comunidades; sin embargo, a lo largo de la historia del país, la

multiculturalidad ha sido sumida a distintas formas de violencia hasta el punto de invisibilizar y negarla.

A pesar de la violencia contra el CRIC, en los últimos treinta años se ha comprometido a través de ejercicio de participación política, organización social en su pleno derecho de su autonomía y mediante acciones no violentas, recuperar y proteger sus culturas e identidad. Por esa razón, el objetivo de Delgado es aportar elementos de reflexión y análisis sobre la experiencia de resistencia civil de los pueblos indígenas del Cauca. Este artículo surge de una síntesis realizada en torno a diez experiencias de construcción de paz, de las cuales, nueve son de resistencia no violenta en un periodo comprendido entre el 2002 y 2004. También, la autora desarrolla los conceptos de resistencia civil, violencia e identidad, esto con la intención de permitirle al lector una mayor comprensión de las banderas de luchas de las comunidades, pues su discurso de reivindicación gira en torno a estas nociones.

Delgado indica las siguientes características de ese conflicto: 1) en el Cauca se ha evidenciado una mayor presencia de la insurgencia, principalmente FARC-EP; 2) en la década de los ochenta en el siglo XX, el Movimiento Armado Indigenista Quintín Lame, tuvo una estrecha relación con las comunidades indígenas; 3) La Fuerza Pública genera violencia en el Cauca, en su afán de recuperar el control territorial, incurre en violaciones de los DDHH e infracciones al DIH; 4) las Autodefensas tienen vínculos con empresas privadas o con grupos de narcotraficantes para despojar y violentar a los indígenas del Cauca; 5) el narcotráfico ha constituido un factor de violencia en doble vía, pues ha generado el accionar violento contra la población indígena y campesina, ha incidido para que los actores armados fomenten y patrocinen cultivos ilícitos, principalmente de coca y amapola. (Delgado, 2006, p. 190)

Hernández, a diferencia de los autores anteriormente referenciados, trae un concepto sumamente importante para nuestra reflexión: la violencia. En las investigaciones anteriormente mencionadas, es repetitivo el uso de este concepto, pero nunca es explicado, se convierte en un concepto *per se*, sin alguna caracterización relevante. En cambio, Hernández lo presenta como uno de los aspectos característicos del contexto caucano, pues

los indígenas colombianos sufren de la misma violencia estructural y estigmatización de sus movimientos como los indígenas Mapuche, Quilmes e Ingamas, la diferencia es que ninguno de esos otros grupos se encuentra inmerso en un conflicto armado, protagonizado por fuerzas estatales, guerrilleros y grupos paramilitares. La desolación producida por la violencia política y social convierte el caso colombiano como único, por lo tanto, la resistencia civil indígena se entiende como un ejercicio no violento.

Por otro lado, Levalle (2018) sostiene que la hipótesis de su trabajo radica en el análisis de las transformaciones de las prácticas de resistencia indígena a la violencia política contra el CRIC, es así como utiliza tres variables de estudio: 1) las políticas estatales relacionadas con la distribución y uso de la tierra; 2) el desarrollo histórico del conflicto armado; 3) las formas de imaginar la nación y las políticas estatales de gestión de la diversidad a la que a ella se asocian.

En ese sentido, el objetivo de Levalle es analizar la variedad de formas de resistencia civil presentadas por el CRIC que ejemplarmente ha generado espacios de reconciliación y dialogo político entre la insurgencia y el gobierno. De esta manera, el autor entiende que la resistencia civil a la violencia política se practica a partir de un conjunto de acciones que se estructuran en dos sentidos: el primero, se producen espacios físicos de resistencia civil contra la guerra, entre los cuales, preponderan las acciones que buscan neutralizar el recrudecimiento del conflicto. Esto es llevado a cabo por la guardia indígena, las asambleas permanentes, las audiencias públicas para juzgar los crímenes de guerras y, las comisiones de búsqueda y rescate de personas secuestradas. El segundo elemento evidencia la recuperación de la lucha tradicional practicada por los movimientos sociales del Cauca: mingas, movilizaciones, organización autónoma en los territorios, fortalecimiento de la identidad mediante la educación ancestral, entre otras más.

La mayor diferencia entre Levalle y Hernández suscita en el enfoque de violencia y resistencia civil. Levalle se orienta de forma permanente en visibilizar a través de ejemplos, las manifestaciones político-pacíficas realizadas por el CRIC, a pesar de toda la violencia producida por los grupos armados, en ese sentido, Levalle presenta distintas estadísticas que

demuestran el recrudecimiento del conflicto armado y los protagonistas de la reproducción de la violencia. Sin embargo, Levalle en su ejercicio metodológico no omite la violencia estructural encabezada por el Estado, pues basándose en el coeficiente Gini, demuestra la distribución desigual de la tierra en el Cauca.

En ese sentido, el estudio de Levalle se convierte en un referente importante para nuestra monografía, ya que, al realizar un enfoque cuantitativo y teórico contextual del Cauca, nos permite señalar en qué momento se agudizó la violencia y cuáles fueron los actores que incidieron violentamente en el territorio. Este aspecto lo podemos relacionar con las manifestaciones de reconciliación entre actores armadores y comunidades indígenas, mencionados en el trabajo de Hernández.

Autores como Rudqvist y Anrup (2013), estudian la variedad de las manifestaciones de resistencia civil liderada por las comunidades indígenas del Cauca en su ejercicio de autonomía. Esta diversidad se presenta dadas las circunstancias de violencia que existen en el territorio, sin obviar el abandono estatal en el que se encuentran. Tras la firma de la Constitución en el año de 1991, las comunidades indígenas iniciaron legalmente la práctica de control jurisprudencial de sus territorios, logrando implantar sus propias leyes. Estos dos autores creen que estas comunidades basan su control territorial en el pluralismo jurídico, pues la intención de los resguardos es descentralizar el monopolio de la ley que invisibiliza y niega su diversidad, sin contar que no reciben ni seguridad ni justicia dadas las condiciones de desigualdad y conflicto armado. El objetivo de esta investigación es analizar las manifestaciones de resistencia civil basadas en el Derecho Mayor y Ley de Origen¹.

Por su parte, Llano (2010) realiza su investigación en los Centros de Etnoeducación para el Fortalecimiento del Plan de Vida Nasa en los resguardos ubicados en Toribio, Tacueyó y San Francisco durante los años de 2002-2006. La autora indica que, bajo el ideal de educación indígena, estas comunidades buscan recuperar la memoria histórica y generar consciencia especialmente en los jóvenes de los resguardos mediante la problematización del contexto

¹ Son las leyes heredadas por los mayores y caciques, creadas para defender los territorios originarios, organizar de sus propios gobiernos y vivir bajo sus propias costumbres.

económico, político y sociocultural. El objetivo de este trabajo es observar la variedad de herramientas utilizadas para salvaguardar la identidad étnica y la fomentar sujetos sociales críticos que busquen prolongar, defender y transformar sus territorios. A lo largo de su trabajo, Llano recoge catorce formas de etnoeducación basadas en la autonomía indígena, en ese sentido, resaltamos esta investigación porque sistematiza las experiencias de jóvenes del resguardo; además recolecta información relacionada con los procesos de resistencia, fortalecimiento de identidad, aprendizaje de la lengua Nasa Yuwe, la espiritualidad indígena como estrategia de resistencia, promoción de actividades en comunidad, problemáticas del contexto social, entre otros procesos más. Finalmente, la autora demuestra que la resistencia no solo oscila en el campo político y económico, la resistencia también está presente en los espacios culturales y espirituales.

Para finalizar este trabajo, queremos mencionar que cada uno de los textos aquí presentados constituyen distintas visiones sobre la resistencia a la violencia política, estructural y directa, a la cual, los pueblos indígenas han tenido que enfrentarse de distintas formas. El proceso de defensa propia de estas comunidades es de largo aliento, pues es una herramienta en constante cambio. Cada una responde a circunstancias y agentes distintos, fue así como, observamos que la trasgresión a los indígenas del Cauca, tienen sus peculiaridades que lamentablemente los involucran en el conflicto armado colombiano. Destacamos la variedad de elementos de análisis propuestos por los autores, quienes desarrollan de manera crítica los conceptos de violencia, resistencia e identidad.

Los procesos de resistencia de las comunidades indígenas en el cono sur, en conjunto destacan por su análisis a procesos específicos con contextos que se convierten comunes, es decir, a pesar de que se estudien ocho países distintos y más de nueve comunidades diferentes, los procesos de resistencia están por la usurpación de tierra por parte de multinacionales creadoras de monocultivos y mega fábricas industriales, empresas que lideran junto al Estado, procesos de violencia estructural contra las comunidades indígenas. Por otro lado, metodológicamente hacen uso de diversos recursos cuantitativos y cualitativos, recolección de mapas que visibilizan el desplazamiento producido por los monocultivos, extracción de materia prima y los conflictos armados, entrevistas a líderes tradicionales,

conceptualización de la identidad, territorialidad y la autonomía de los pueblos originarios, entre otros aspectos metodológicos importantes; los textos consultados son ricos metodológicamente por la interdisciplinariedad propuesta por sus autores.

Los argumentos centrales de los autores sobresalen porque recogen históricamente las luchas sociales de las comunidades y encuentran en coyunturas específicas, procesos de resistencia que incluso perduran hasta hoy en día. Los aportes que se destacan para este trabajo investigativo son: en primera instancia, la capacidad de síntesis de experiencias de luchas y conceptualización de las distintas formas de resistencias; en un segundo momento, la diversidad de enfoques metodológicos para estudiar los territorios; no obstante, existen algunos vacíos tales como la falta de comparación con otros procesos indígenas en otras latitudes del continente.

En conclusión, con este estado del arte hemos alcanzado dos propósitos. El primer propósito, presentar los esfuerzos colectivos para visibilizar los movimientos de autonomía y resistencia que recorren toda Latinoamérica, los cuales surgen por el inminente riesgo de perder el territorio comunal. El segundo propósito, identificar los vacíos en los textos expuestos, destacamos que ninguno de ellos, a pesar de tener diferentes características en común, compara o relaciona entre sí las luchas de las comunidades indígenas del continente. De todos modos, resultado de la precariedad de recursos y tiempo, es claro que nuestro interés y capacidad de respuesta no logre llenar esa vacío. No obstante, nuestro aporte con esta tesis a la Ciencia Política es observar los problemas que enfrentan las comunidades indígenas en el territorio, y a su vez, entender el papel que juega la resistencia civil para el control territorial.

MARCO TEÓRICO

Dos categorías de análisis son el referente central de este marco teórico, la Resistencia civil y el Control Territorial. La primera, ha sido ampliamente estudiada en las ciencias sociales, por tanto, para abarcar el concepto desde una perspectiva general hasta una específica, citaremos autores como Quiñonez (2003), Tolosa (2003), Martínez Bernal (2016) y Guerrero (2003) que se centran en las características teóricas y metodológicas de la resistencia civil en contraste con Osorio (2001), Hernández (2003) y Escobar (2004) quienes abordan las manifestaciones de resistencia civil en Colombia hasta llegar a la desobediencia civil y la no violencia. Estas dos variables concretan esta práctica de las que particularmente en Colombia, las comunidades indígenas hacen uso para enfrentar a los actores armados, se oponen al gobierno y proponen alternativas para la construcción de paz.

La segunda categoría, el control territorial, lo abordaremos desde tres variables de análisis: espacio, territorio y territorialidad. Nuestra intención es presentar diferentes tipos de análisis multidisciplinarios del control territorial para entender el significado simbólico, económico y social que tiene este para las comunidades indígenas. En primer momento, nos acercaremos autores como Cisneros (2007), Spíndola (2016) y Velasco (1992) que se enfocan en observar las características del espacio y su relación con los seres humanos; en un segundo momento, Rodríguez (2010), Ulloa (2012) y Silva (2010) entienden el territorio como el cúmulo de experiencias que se generan en las relaciones humanas que se establecen en determinados espacios; por último, abordaremos las características estudiadas por Avendaño (2010) y Barabas (2014) quienes entienden la territorialidad como la relación dual de las dos anteriores nociones, gracias a los significados que le otorgan las comunidades al territorio que habitan. Estas variables de análisis se presentan con la intención de conocer de cerca los motivos que sostienen los indígenas para ejercer el control territorial.

Resistencia civil: Más allá de la dicotomía entre el Estado y la sociedad civil

La relación entre Estado y sociedad civil es dicotómica, esto es, así como, se dan situaciones de colaboración, cooperación, también, se presentan procesos de tensión y conflicto. Un autor como Bobbio (1985) define esta relación de la siguiente manera: “en el Estado hay diversas formas de asociación que los individuos forman entre sí para satisfacer sus más diversos

intereses y sobre los cuales el Estado se sobrepone para regularlas, pero sin obstaculizar su desarrollo e impedir su renovación continua” (Bobbio, 1985, p. 41). Sociedad civil y Estado, así como generan relaciones de colaboración, también pueden ser adversarios. La primera situación se da en la medida en la que se fortalece la construcción del bien común: la sociedad civil avanza en desafíos sociales en cuanto el Estado vigila, garantiza cumplimiento o eventual financiamiento; mientras la segunda, se refleja cuando no existe una solución pertinente a sus demandas sociales en un período de tiempo y los ciudadanos acuden a movimientos defensores de derechos civiles, grupos étnicos, feministas, entre otros para atrapar su atención.

En el marco de esa dicotomía, cuando se expresan relaciones de tensión o conflicto, la resistencia civil desempeña un papel interesante en cuanto a la reacción de multitudes enfrentados a unos pocos que representan una porción de poder importante en el territorio, ya que este elemento de defensa intimida y reclama respeto desde una posición de inferioridad en términos de autoridad.

La resistencia civil es un mecanismo que según los autores se define a partir de diferentes enfoques. De esta manera, Martínez y Guerrero, interpretan la resistencia civil como una acción que busca demostrar las asimetrías del poder mediante la interpelación a la autoridad y la deslegitimación del Estado. Contrario a estos autores, el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín cree que la resistencia civil es un medio de comunicación para “que se pueden entender como procesos estructurales, permanentes, como un medio para transmitir un mensaje a los violentos, corruptos, tiranos, y demás, cargados del sentido de lo comunitario, por lo que termina siendo, una forma concreta de actuación profundamente política (OSHM, 2012, p.126)”. Por su parte, Quiñonez nos habla de una lucha pública de estamentos, es decir, la resistencia civil es el mecanismo por el cual una comunidad opositora al gobierno intenta persuadir a los simpatizantes del adversario de los problemas sociales que el Estado genera para el medioambiente, para la economía, para toda la sociedad.

Son tres perspectivas que dan cuenta del acto de oponerse, negarse o sublevarse a una serie de órdenes, reglamentos e incluso Estados; la resistencia civil es el primer paso para la construcción de movimientos que buscan consolidar autonomía frente a la represión estatal,

grupos ilegales y multinacionales. En esta misma línea de pensamientos, Martínez infiere que es una negación de obediencia, oposición a la lealtad a un Estado, es esencialmente la negación de la dominación (Martínez Bernal, 2016).

Lo anterior se puede explicar porque a partir del contexto de liberación y la ola constante de represión marcada por una guerra ideológica, los ciudadanos deciden hacer uso de su derecho a protestar para enfrentarse a medidas autoritarias, como en la Guerra Fría que estas acciones se legitimaban a partir de las campañas contra las armas nucleares y la oposición a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos arrastrados por el éxito político de Martin Luther King y la participación de intelectuales como el historiador E.P Thompson que junto a Bertrand Russell fundan la campaña por el Desarme Nuclear con su concepto de “exterminismo” o el psicólogo Eric Fromm y el historiador Howard Zinn que desde sus campos de estudio marcaron su posición en contra de la guerra de Vietnam. O el caso de Argelia de 1961 (en ese momento colonia francesa) que inicia una protesta contra las negociaciones que independentistas hacían con el presidente De Gaulle. Estas negociaciones quedan frustradas por la no colaboración de parte de la población francesa lo que condujo a la independencia a los argelinos y demuestra el apoyo a movimientos anticoloniales por la defensa de los derechos humanos.

Aunque esto sea un factor, el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario insiste en que el incumplimiento de demandas sociales y la intromisión de actores externos a las comunidades, son una de las muchas razones por las que una comunidad decide optar por la resistencia civil. Mediante la objeción de conciencia, un ciudadano inconforme puede rehusarse a prestar servicio militar, si condena la guerra o puede unirse a otro grupo que reivindique los derechos de una comunidad para vivir en paz y sin conflicto. La resistencia civil es iniciada desde pequeños actos cotidianos, los cuales se convierten en grandes banderas de movilización. Habiendo agotado instrumentos legales e institucionales, los civiles deciden organizarse porque no encuentran respuesta o tratamiento digno por parte de sus gobernantes (Internacionales, 2006).

Guerrero y Martínez argumentan que el principal adversario de los movimientos sociales es el Estado, pues la resistencia civil no nace por sí sola, es el resultado de las demandas históricas insatisfechas por parte de las instituciones estatales y sus sucesivos gobiernos. Para estos autores, la resistencia civil no puede ser ejercida ni organizada o alentada por el Estado, la resistencia siempre será contra el Estado o contra quienes ejerzan dominio político de sus instituciones (Universidad Nacional de Colombia, 2003). Es importante señalar que a pesar de que el Estado sea el mayor antagonista, no significa que no existan otros oponentes como las multinacionales o en el caso colombiano, los grupos armados. Tolosa cree que también es necesario referirse a las condiciones hegemónicas de dominación, las cuales se traducen en el control ideológico, político, cultural, tecnológico o económico, por instituciones como la Iglesia, la escuela, el mercado y los medios de comunicación (Universidad Nacional de Colombia, 2003).

Entre los autores referenciados encontramos una conceptualización común: oposición al Estado ante medidas autoritarias y represivas, al igual que, las principales razones de construcción de resistencia se deben a las demandas sociales insatisfechas por el Estado. Esta conceptualización no valora los movimientos de resistencia civil étnicos, por lo tanto, la resistencia civil de las comunidades indígenas es la oposición y deslegitimación de lo que el Estado representa en su totalidad, es decir, los movimientos indígenas se oponen a la hegemonía ideológica y de control social que representa el Estado con sus instituciones, intereses económicos y propuestas de desarrollo, las cuales recurren frecuentemente a actores armados para violentar sus territorios.

Para complementar nuestra noción de resistencia civil recurrimos a los postulados de Tolosa, quien afirma que en la actualidad, de manera indistinta y de acuerdo a los contextos, relaciones de poder, intereses y posturas ideológicas, el término de resistencia civil es utilizado por las organizaciones sociales como un elemento de unidad en la reivindicación de sus derechos como ciudadanos y comunidades ancestrales (Universidad Nacional de Colombia, 2003). En ese orden de ideas, la resistencia se traduce en poder (multinacionales, Estado, grupos armados) contra poder (sociedad civil y comunidades étnicas) o acciones de organizaciones sociales para contrarrestar las dinámicas y procesos de los adversarios. De

ese modo, Tolosa infiere que la resistencia civil, en tanto construcción social de poder, se definiría de entrada como uno de los elementos constitutivos de la lucha política social, es decir, la resistencia civil es la apuesta política de las organizaciones sociales para superar las acciones coyunturales, espontáneas o contestatarias, desarticuladas de una visión de futuro (Universidad Nacional de Colombia, 2003).

Interpretar la resistencia civil va más allá de la identificación de nociones generales, Osorio y Hernández plantean distintas caracterizaciones, por una parte, Osorio indica que la noción de resistencia civil parte de la identidad de los grupos “sin poder” y está estrechamente relacionada con una posición de lucha sin armas, que supone un aprendizaje de unidad y solidaridad. Por lo tanto, esta autora menciona tres características de la resistencia civil: 1. La afirmación de la identidad de los sujetos que resisten, que exigen una toma de conciencia y afirman su propia dignidad; 2. La no cooperación colectiva, tiene que ver con enfrentarse desde la desobediencia y la no colaboración con quien está ejerciendo la dominación; 3. La consecución de terceras fuerzas que apoyen su causa, lo cual implica abrirse al exterior (Osorio, 2001). Hernández agrega otras características de resistencia civil: 1. Es una acción colectiva; 2. Debe ser generada y ejercida por la población civil, aunque conquiste la solidaridad de otros estamentos de la sociedad e incluso de representantes estatales; 3. Su principal función es persuadir a los demás ciudadanos de oponerse al poder del adversario y buscar estrategias para socavar la organización de su rival; 4. Requiere inminentemente de un proceso organizativo y de planeación; 5. Finalmente, debe soportar un elemento de fuerza moral que lo legitime (Hernández, 2003).

En el caso de la resistencia civil indígena, en lo que a mí concierne, resalto que: 1. Contrario a muchos movimientos sociales, los movimientos indígenas son transnacionales, pues a lo largo y ancho del continente se enfrentan a los mismos adversarios (multinacionales, Estado y grupos armados) que atentan contra su territorio mediante la deforestación y la explotación minero energética, conllevando a que sus luchas sean homologas; 2. La resistencia civil en las comunidades indígenas colombianas hace parte del entramado de estrategias y acciones ejercidas en el marco de la autonomía indígena.

Veamos ahora las formas de actuación que utilizan los actores sociales para visibilizar los procesos de resistencia civil. Aclaremos entonces que la resistencia civil no es posible sino existen determinadas formas o mecanismos de actuación. Esto se entienden como las estrategias que concretan la acción en el quehacer político. Detrás de esas estrategias hay toda una serie de entramado político, el cual se vale principalmente de la no violencia en la mayoría de acciones. Al ser mayormente utilizada por los movimientos sociales, la resistencia civil se desarrolla mediante las prácticas de manifestaciones públicas, la huelga y la creación de instituciones gubernamentales paralelas a las oficiales. Por lo tanto, Quiñonez (2008) señala que históricamente las manifestaciones públicas nacen por los movimientos abolicionistas de esclavitud en la época colonial, después, durante la temprana edad contemporánea, los movimientos obreros particularmente los rusos, alemanas e ingleses protagonizan la ola de manifestaciones sociales en el mundo, sin olvidar que durante el siglo XX, hay distintas prácticas de resistencia civil como los sobrevivientes del holocausto Nazi, los grupos de liberación nacional en África y Asia, los movimientos pacifistas estadounidenses de mitad de siglo y los grupos indígenas de Latinoamérica a finales del siglo XX. Como lo mencionamos anteriormente, este autor infiere que la acción política que utiliza estrategias no violentas contra el adversario con el que sostiene un conflicto, se orienta principalmente a seducir a la amplia opinión pública para que voluntariamente decida no seguir depositando obediencia ni cooperación a su adversario.

Nosotros destacamos tres formas de prácticas de resistencia civil: 1. Las clásicas: las marchas, los paros y los comités de lucha (formas básicas de manifestación social); 2. Las basadas en la autonomía: principalmente nos referimos a las estrategias de movilización, cooperación y sobrevivencia de los grupos campesinos y étnicos de Colombia; 3. Las nuevas prácticas: en la actualidad gracias a la interconexión global, los mecanismos de resistencia civil recurren principalmente a la concientización de la sociedad mediante la educación, además es común observar acciones de protesta cibernética tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En resumen, independiente de la manifestación de resistencia civil, la organización es transversal a cualquier práctica de resistencia protagonizada por comunidades o actores, por

eso es fundamental que definan un repertorio de acciones, agendas de trabajo (distribución del trabajo), identificación de aliados y posibles recursos jurídicos.

La resistencia civil es una acción política que no utiliza métodos ni herramientas que puedan herir físicamente a su adversario, ya que, se fundamenta en prácticas no violentas. En ese sentido, Martínez considera indispensable interpretar el concepto de resistencia civil bajo las nociones de desobediencia civil y no violencia; para este autor, la resistencia y la desobediencia no son conceptos ni actos iguales, sin embargo, las dos nociones parten de la misma naturaleza: desobedecer a la injusticia proveniente del gobierno. La desobediencia civil es la contraposición a una norma o una ley establecida que los ciudadanos consideran injusta o nociva. La desobediencia se diferencia de la resistencia en la medida en que puede ser entendida como un método dentro de ella, es decir, la desobediencia civil es una de las acciones utilizada dentro de un proyecto de resistencia civil (Martínez Bernal, 2016). Guerrero (2003) cree que la desobediencia civil es uno de los eslabones más importantes dentro de un proyecto de resistencia civil, el cual inicia con el reconocimiento de la obediencia pasiva, sigue con la iniciativa de desobedecer al Estado y culmina con la resistencia activa (Universidad Nacional de Colombia, 2003).

Al igual que Martínez y Guerrero conceptualmente entendemos la desobediencia civil como el desacato a una decisión estatal, la cual es considerada por la sociedad como injusta y que atenta contra los derechos de los ciudadanos. Las manifestaciones de desobediencia civil recurren a la afectación del control social mediante las marchas, huelgas, protestas e incluso acciones directas; estas acciones son coyunturales, no necesariamente se conciben para lograr un cambio estructural, nacen para oponerse y deslegitimar una decisión. El Estado al reprimir los procesos de desobediencia civil, posiblemente conlleve a la práctica no violenta promovidas desde la resistencia civil.

La no violencia es concebida como el conjunto de métodos de luchas que promueven prácticas que no hace uso de la violencia para enfrentar una doctrina política, ideología, acciones

determinadas por un grupo social hegemónico, grupos armados o una propuesta o decisión de un actor gubernamental que atente contra los derechos humanos o los intereses de determinados grupos sociales.

Las comunidades o actores sociales que practican la no violencia se caracterizan por tener estructuras organizativas descentralizadas, constituidas por concejos de ciudadanos u organizaciones sociales, quienes lideran procesos barriales, comunitarios, sociales, políticos, culturales y ambientales (Martinez Bernal, 2016). Bajo ese orden de ideas, el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario (2006) sugiere que la sociedad actual, particularmente aquellos sectores que se encuentran inmersos en un conflicto interno hacen uso de medios alternativos para enfrentar a los actores armados. También, para este grupo de investigación la acción política no violenta, como un mecanismo utilizado para la resolución de conflictos refiere a una acción por lo general colectiva, encaminada a conseguir un objetivo político, reformar e incluso cambiar radicalmente un orden social, sin causar la destrucción física de los adversarios, no es una renuncia al conflicto, es una forma de tratarlo sin conducir a la violencia (Internacionales, 2006).

López (1997) aclara que la no violencia no es igual a la pasividad, inacción, debilidad y desaliento, deduciendo que la no violencia es aquello de poner la “otra mejilla” y soportar las injusticias sin poder hacer algo contra eso. Todo lo contrario, este autor define la no violencia como la acción que busca denunciar los vejámenes de la guerra y movilizar a las personas que buscan alternativas de paz ante los conflictos. Busca ante todo conseguir sociedades más pacíficas, regular los conflictos y gestionar alianzas estrategias para acabar de raíz las injusticias sociales.

Como lo hemos mencionado, existe una gran variedad de conceptualizaciones y argumentos alrededor del concepto de resistencia civil, pero en este marco teórico nos interesa enfocarnos en las características de la resistencia civil en Colombia. Por esa razón, cuando estudiamos este concepto en el contexto nacional tenemos que remitirnos inmediatamente a las

condiciones de violencia directa y violencia estructural que sufren las comunidades. Al respecto, Hernández (2003) manifiesta que la violencia directa es ejercida por los diferentes grupos armados que hay en el país, especialmente los paramilitares y guerrilleros. Las comunidades colombianas se han enfrentado históricamente a los intrusos que intentan acabar con sus territorios y sus culturas, por eso, al acercarnos al caso local es indispensable tener en cuenta los grupos externos que han protagonizado crueles conflictos. Por otro lado, es importante retomar la relectura realizada por Quiñonez (2008) a la teoría de violencia estructural estudiada por Johan Galtung, en ese sentido, este tipo de violencia hace referencia a los impedimentos sociales de acceso a los elementos básicos de subsistencia, entendidos como servicios públicos, educación, salud y crecimiento económico, también es la restricción del desarrollo individual físico y psicológico. Particularmente la violencia estructural no siempre está determinada por agentes concretos sino por un conjunto de condiciones que impiden el desarrollo de la vida digna (Quiñones Páez, 2008). En lo que concierne a esta tesis, la violencia estructural se refiere además a las prohibiciones que establecen los actores armados que afectan el desarrollo grupal y la autonomía de las comunidades. Es en ese marco donde los actores comunitarios hacen uso de la resistencia civil como un ejercicio político de oposición ante las expresiones de dominación de grupos subversivos, paramilitares, agentes estatales y grupos extractivista; pero del mismo modo, nos remitimos a la negación de métodos violentos para enfrentarse al Estado y la consolidación de estrategias no violentas.

Por esa razón, Hernández (2003) nombra las siguientes formas de entender la resistencia civil en Colombia: “método de lucha política colectiva, basada en la idea de que los gobiernos dependen del último término de colaboración, o por lo menos de la obediencia de la mayoría de la población y de la lealtad de sus instituciones; acción colectiva que evita cualquier recursos sistemático de violencia” (Universidad Nacional de Colombia, 2003, p. 61). Esta autora también observa que las comunidades indígenas y campesinas utilizan la resistencia civil como un método de defensa, pues a partir de la organización comunal crean sistemas preventivos de acción no violenta o se despliegan ante la invasión de sus territorios, al igual que, renuevan y evalúan la eficiencia de estos métodos de prevención para mantenerlos o para crear nuevas alternativas.

Osorio (2001) advierte que para el contexto de conflicto armado que hay en el país, es fundamental analizar la resistencia civil bajo la noción de supervivencia; esta es una relación presente en casi todo el territorio nacional, especialmente en comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Para esta autora la supervivencia es el conjunto de acciones que le posibilitan a las comunidades, no solo escapar de sus agresores, también para crear lazos de fraternidad y reciprocidad, es por esto que, podemos observar cómo las comunidades tejen redes de apoyo a grupos de personas desplazadas, brindándoles alojamiento y comida (Osorio, 2001). Osorio se enfoca en reconocer los métodos de supervivencia colectiva de pobladores rurales no armados que se organizan para enfrentar a grupos paramilitares, señalando las siguientes estrategias de acciones colectivas en medio de la guerra:

- “Como el gato y el ratón”: estrategia empleada para evitar ser sorprendidos por grupos armados paramilitares, consta de vigilancia permanente y coordinada para dar aviso oportuno, además cuenta con un puente de comunicación inmediata con grupos de Derechos Humanos en Bogotá.
- Desplazamiento: se trata de desplazamientos temporales y parciales, realizados de manera colectiva o familiar.
- Salir para exigir el retorno: pasado el tiempo del desplazamiento, las comunidades vuelven para exigir su territorio.
- Unidad: se reúnen los miembros de una comunidad para exigirle al gobierno recursos y atención institucional (Osorio, 2001, pp. 59, 60 y 61).

Para finalizar, Escobar (2004) se refiere especialmente al caso indígena como una comunidad excepcional, pues ellos resisten el atropello de su cultura y también al desconocimiento de su autonomía, por esa razón, la propuesta para el caso de las comunidades indígenas del sur de Colombia consisten en practicar la resistencia civil a partir del ejercicio de autonomía: consolidan un control alimentario, capacitan a sus miembros para la defensa del territorio

mediante guardias indígenas, se resisten al reclutamiento, generan grupos de alerta temprana para la denuncia del conflicto (Escobar Díaz, 2004).

Estas comunidades tienen la característica común de ser intermediarios de diálogo y generadores de paz, pues ellos intervienen en la búsqueda de secuestrado, también plantean espacios de diálogo entre guerrilleros y Ejército. En general se resisten a ser partícipes de la guerra.

En conclusión, para nuestra investigación es importante afirmar que la resistencia civil protagonizada por los movimientos indígenas propone el uso de métodos propios de la noviolencia frente a los constantes atropellos del Estado (generador de leyes neoliberales que benefician a los grupos económicos locales y extranjeros) y los grupos armados que luchan por apropiarse de los territorios indígenas. A su vez, se organizan de diferentes formas: cabildos, resguardos y organizaciones departamentales / nacionales, las cuales son orientadas por la concepción de autonomía de cada agrupación. El objetivo de la mayoría de las organizaciones indígenas del país se da para proteger su cultura y sus territorios, para fortalecer los lazos de cooperación entre comunidades y para enfrentarse a las diferentes amenazas de los actores externos. Por eso, para esta investigación el concepto de resistencia civil de las comunidades indígenas es transversal a la construcción de autonomía y, también a la consolidación de paz.

Hacia un acercamiento al concepto de control territorial

La conceptualización de control territorial está relacionada con tres variables: espacio, territorio y territorialidad. Por ejemplo, Cisneros (2007) sostiene que el control territorial es el conjunto de herramientas administrativas por el cual, un individuo o un grupo de personas interviene en un territorio. Cabe mencionar que dicha intervención cuenta con intenciones propias de territorialidad, las cuales se basan en la cultura, economía y sociabilidad del grupo que pretende controlar ese espacio.

Sin embargo, bajo la mirada de Spíndola es incompatible analizar el control territorial sin observar, en primera instancia, la noción de espacio. Este autor recurre en primer momento a las ideas de Bourdieu de espacio, quien cree que espacio es el reflejo de las relaciones de poder y las interacciones entre los agentes inmersos en un lugar determinado. En otras palabras, Bourdieu habla de la apropiación de espacios mediante mecanismos de representación, pues es así como las comunidades transforman los lugares hasta el punto de moldearlo bajo sus preceptos de identidad. Para complementar la conceptualización de espacio Spíndola también presenta la visión de Michel de Certeau, quien se refiere al espacio como el lugar donde los seres humanos reapropian sus estructuras territoriales a través de prácticas culturales con el fin de desarrollar nuevos hábitats (Spíndola, 2016).

Por otro lado, Velasco desarrolla el concepto de espacio desde la visión indígena. Para las comunidades ancestrales el espacio es un escenario metafísico, en donde se encuentra su ser, la naturaleza y el tiempo. El espacio en la tradición indígena se presenta de forma dinámica, revelando una dimensión de múltiples relaciones jerárquicas que se manifiestan física, social y simbólicamente al interior de la comunidad y establecen hacia el exterior una posición de autonomía. Este autor insiste en que cada comunidad tiene ideas y experiencias sobre el espacio, así como la dinámica de las prácticas sociales que se desarrollan en él, no obstante, es posible observar que todas le conceden un valor sagrado, cosmológico y multidimensional al espacio (Velasco Toro, 1992).

Velasco también menciona como constituyen los espacios las comunidades indígenas: el primero se refiere al privado, al lugar donde se comparte con la familia y se desarrollan las actividades cotidianas. El segundo es el espacio sagrado, el cual se encuentra demarcado por símbolos ancestrales y santuarios, este espacio es utilizado mayormente en comunidad, aunque también es posible tener santuarios cerca a las casas. Por último, se encuentra el espacio productivo, relacionado con la naturaleza, la práctica de oficios y la producción alimentaria, por lo general se encuentra en el exterior de las viviendas (Velasco Toro, 1992). Dentro de los espacios de las comunidades indígenas, podemos indicar que es necesario ubicar el espacio de convergencia de fuerzas como lo es el pueblo o el barrio, ya que, son espacios donde pueden confluír la construcción social de identidad y resistencia.

Antes de establecer la conceptualización de territorio, debemos entender que este concepto nos ayuda a comprender las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial en la que se albergan las prácticas sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan cuando interactúan con la naturaleza. El ser humano y la naturaleza siempre está en cambio, así mismo se transforma esa relación, la cual puede transformarse debido a las guerras, a la extracción de recursos naturales o a las catástrofes climáticas, sin embargo, hay comunidades como las indígenas que procuran mantener una relación estable y duradera con el territorio, intentando mantenerse lo más fiel posible a la idea originaria de protección territorial (Llanos-Hernández, 2010).

El concepto de territorio se remite a los postulados presentados por Rodríguez “el territorio es un espacio geográfico calificado por una pertenencia jurídica, es decir, es un espacio político donde se ejerce la autoridad de un Estado o de una entidad administrativa de menor escala.” (Rodríguez, 2010: 10). De igual modo, Rodríguez indica que el concepto de territorio se debe teorizar a partir de las relaciones que existen en él, es decir, el territorio es una extensión terrestre que incluye una relación de poder por parte de un individuo o un grupo, quienes se encargan de establecer límites de soberanía, propiedad, apropiación, vigilancia y jurisdicción. Sin embargo, en su estudio, este autor recurre a las ideas planteadas por Paul Claval para indicar que el territorio no es solamente una cuestión de apropiación de espacio por parte de un Estado o cualquier grupo hegemónico, sino también de pertenencia a un espacio mediante un proceso de identificación y de representación, bien sea colectivo o individual, muchas veces los grupos étnicos desconocen las fronteras administrativas clásicas (Rodríguez, 2010).

Velasco considera que el territorio es un conjunto de asentamientos humanos que están en interacción económica, social, cultural, lingüística, demográfica y política, lo que posibilita unos elementos de tensión interna y externa por los problemas que surgen a raíz del control de los recursos y su administración. Así mismo, este autor menciona que otro significado de territorio funciona con base en la relación y posiciones relativas de espacio de trabajo y sagrados que proyectan una imagen territorial conjunta que es compartida por todos los miembros de una etnia (Velasco Toro, 1992).

En síntesis, siguiendo los postulados de Rodríguez seleccionamos 4 ideas fundamentales para entender el concepto de territorio:

1. “Toda relación social tiene ocurrencia en un territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente en el marco espacial que delimita el dominio del Estado.”
2. “El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y de organizaciones”
3. “En el espacio ocurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones de complementación, cooperación y conflicto”.
4. “El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de conceptualización y organización territorial” (Rodríguez, 2010: 6 y 7)

El conflicto de poderes en los territorios indígenas ha creado recientemente un fenómeno de desterritorialización principalmente por los enclaves de explotación de recursos mineros, forestales e hídricos, y la presencia de actores armados que desconocen territorios e imponen otras lógicas de relación con el entorno. Bajo ese orden de ideas, Ulloa sugiere que es importante observar como las comunidades indígenas y campesinas del país a través del concepto de desterritorialización; este concepto hace referencia al desplazamiento y pérdida de tierras producto de las guerras territoriales propiciadas por las multinacionales, el Estado y los grupos armados; estos actores crean nuevas valoraciones basadas en prioridades surgidas del mercado, que desconocen las perspectivas locales (Ulloa, 2012). Estas situaciones se tornan en desafíos permanentes para los pueblos indígenas e implica una gobernabilidad parcial y limitada de sus territorios.

Silva (2014) agrega que la ausencia estatal es una de las causantes de este fenómeno de desterritorialización, ya que el control que debería ejercer el Estado no existe, lo que les permite a los grupos de narcotraficantes ser los dueños del territorio y desplazar a las comunidades indígenas.

Aunque, territorio y territorialidad aparentan ser conceptos similares, tienen significados distintos. Cuando nos acercamos al concepto de territorialidad nos damos cuenta que los geógrafos la definen como la acción de apropiarse de un lugar y con ello, proteger, ratificar, defender, marcar y alterar el territorio mediante prácticas tanto individuales como colectivas. La territorialidad implica la apropiación sentimental de un espacio con el objetivo de otorgarle sentido a la práctica de administrar el territorio (Avendaño Flores, 2010). Para nuestra investigación, la territorialidad corresponde al modo de apropiación y relación establecida entre el ser humano y la sociedad con el espacio, sin olvidar que esa relación conlleva la construcción de identidad mediante la asignación de atributos al territorio.

Desde la perspectiva de Barabas, el territorio y el espacio son los primeros pasos para la consolidación de territorialidad en las comunidades indígenas, pues la construcción de espacio es posible gracias a la interacción de los seres humanos con la naturaleza. Dicho de otro modo, esta autora asegura que los atributos espaciales como las montañas, rocas, cuevas o árboles reciben cargas de significación social y las reflejan hacia la sociedad sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, discursos y prácticas rituales. Así mismo, el territorio según Barabas, se constituye como un espacio cultural con lugares simbólicos y tejido por representantes que se rigen bajo creencias con un profundo sentido histórico y sentimental (Barabas, 2014).

Quisiéramos decir que para nuestra investigación no basta con decir que el territorio es un referente que describe las condiciones geográficas del Estado-Nación ni tampoco se restringe a la constitución de un soporte político-geográfico de un Estado. En este marco teórico el territorio lo definimos como un concepto multidisciplinar que permite el estudio de nuevas realidades del mundo social en un contexto de globalización y de apropiación cultural, los cuales representan una dimensión espacial fundamental para los procesos sociales de las comunidades indígenas.

METODOLOGÍA

El enfoque que se maneja en nuestra investigación es cuantitativo y un análisis documental. Recordemos que el ejercicio de resistencia puede ser interpretado desde distintas variables, determinado por un conjunto de factores políticos, sociales, económicos, identitarios y culturales, que surgen en medio de los distintos contextos de desigualdad, racismo y violencia. En ese sentido, consideramos que la resistencia civil en comunidades amenazadas por el conflicto armado debe ser estudiada desde perspectivas diversas -autorreconocimiento, territorialidad, autonomía y control territorial- que se complementan una a la otra, evitando caer en una interpretación monolítica y lineal de las manifestaciones de resistencia civil indígenas.

Por lo tanto, en este estudio de caso pretendemos estudiar desde tres perspectivas diferentes, el pueblo indígena Nasa de Jambaló, especialmente del 2015 al 2019. Las fechas escogidas corresponde al recrudecimiento del conflicto en el territorio del norte del Cauca y las consecuencias que este contexto inflige sobre la comunidad Nasa, así mismo, el acercamiento el estudio de caso es realizado en el año de 2019.

Los datos recogidos y analizados en este estudio corresponden a las encuestas realizadas a 100 personas habitantes del resguardo de Jambaló, mayores de 18 que se autor reconocieran como indígenas, las cuales mayormente pertenecen a la comunidad Nasa, en menor medida a la comunidad Misak. Es importante mencionar que es un muestreo no probabilístico. La codificación y el manejo de los datos se logró con la utilización de el programa SPSS STATISTICS, donde se utilizaron tres variables fundamentales: Resistencia Civil, Control territorial y Autoreconocimiento. Debe agregarse que la forma en que se desarrollaron las encuestas tuvo la intención de conocer de cerca la percepción social que existe alrededor de los ejercicios de resistencia civil y el grado de injerencia que tienen estas prácticas al momento de transformar los métodos de control territorial. Este proyecto surge de nuestra salida campo en la modalidad de trabajo de campo para la materia de investigación “Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación”, dicha salida fue en el mes de octubre del año 2019.

Para respaldar nuestra investigación, elegimos una serie de textos académicos que se enfoquen en las organizaciones de resistencia civil a nivel latinoamericano, principalmente de grupos

indígenas que se enfrentan a multinacionales, mega industrias y políticas neoliberales. Así mismo, elegimos investigación que dan cuenta de los métodos y prácticas sociales de autonomía, control territorial y resistencia civil en Colombia. Esta investigación profundiza en nociones como autonomía, control territorial, identidad, desobediencia civil, noviolencia, territorio, espacio y territorialidad. Todos conceptos que complementan las prácticas de resistencia civil, igualmente, responden a los enfoques que desarrollamos en este trabajo.

Como guía para el desarrollo de la pregunta principal y con la intención de lograr el objetivo principal, planteamos las categorías de análisis anteriormente mencionadas, definidas en el marco teórico, en el capítulo II y III. Para asistir dicha labor se formularon objetivos específicos, preguntas específicas e indicadores para cada categoría, desarrollados en los capítulos de la tesis de la siguiente manera:

En el primer capítulo, se presenta las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia producto de una serie problemáticas que afectan directamente a las comunidades indígenas caucanas: las pugnas históricas por la distribución de la tierra en el departamento; la consolidación de actores armados en la región; la mega industria de la minería como un actor que trabaja en conjunto con actores armados para desalojar a las comunidades indígenas; y el fortalecimiento de las plantaciones de sustancias ilícitas en los territorios indígenas. Estas son las situaciones a las que la comunidad Nasa se enfrenta y a las que intenta contener mediante el uso de estrategias de resistencia civil.

En el segundo capítulo, identificamos las manifestaciones de resistencia civil de la comunidad Nasa del resguardo de Jambaló mediante el análisis de las encuestas anteriormente mencionada, para cumplir con nuestro objetivo, nos enfocamos en la relación que existe entre los movimientos sociales y los métodos de resistencia civil, observando las similitudes de protesta y las causas en común. Este capítulo tiene la intención de responder al objetivo específico en donde nos planteamos describir las diferentes estrategias de resistencia civil que utilizan las comunidades indígenas para defender el territorio

Por último, en el tercer capítulo, explicaremos la función que cumple la resistencia civil para que las comunidades ejerzan el control territorial; para tal fin, planteamos un análisis transversal al concepto de identidad y autorreconocimiento, dos pilares fundamentales al momento de estudiar la afinidad y el impacto que tiene la resistencia en los mecanismos de control territorial.

En este capítulo también sistematizamos las encuestas realizadas en tablas donde evidencia la capacidad de transformación social que tiene la resistencia civil sobre el control territorial.

En síntesis, este trabajo investigativo se encuentra distribuido en tres partes con la intención de abarcar ampliamente el proceso de resistencia civil en el resguardo Nasa de Jambaló, cabe aclarar que los temas propuestos aquí no son ajenos entre sí, son vertientes argumentativas que se complementan y corresponden al contexto local.

Finalmente, recordemos que la pregunta que buscamos resolver es ¿de qué manera las comunidades indígenas del municipio de Jambaló-Cauca utilizan la resistencia civil para ejercer el control territorial ante los actores armados entre los años 2015 y 2019?.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CAPÍTULO 1. Caracterización de las dinámicas del conflicto armado en el departamento del cauca

En este capítulo nuestro objetivo es identificar las dinámicas y características del conflicto armado en el departamento del Cauca. Para realizarlo nos enfocaremos en presentar, grosso modo, los determinantes económicos, sociales, políticos y del conflicto armado interno que han impactado desde los años 70s al departamento del Cauca. Este capítulo está escrito en tres momentos que buscan demostrar el desarrollo del conflicto, el primer momento, caracterizaremos el departamento del Cauca y su vínculo con la disputa territorial; luego, reflexionaremos acerca del impacto del conflicto armado en el departamento; y, finalmente, observaremos la problemática de los megaproyectos en la región.

Para el acopio de la información se hizo uso de datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alianzas Territoriales para la Paz, investigaciones de académicos sobre las disputas territoriales y los estudios del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Antes de entrar en la ilustración con la caracterización de las disputas territoriales en el Cauca, es importante recordar que el departamento del Cauca es una región de gran diversidad étnica, tiene un estimado poblacional de 1'464.488 habitantes (Oficina Asesora de Planeación, 2020). Según las proyecciones del DANE para el 2015, los indígenas representaban el 21,5% (296.521) de la población total del departamento. El 22.2 % (306.176) de la población se reconoce como afro-caucana, mulata o negra. El 56,31 % (776.554) son mestizos o blancos. El 60,27% de la población reside en el sector rural, mientras que el 39,73% habita en la zona urbana (Sanabria, 2016).

La organización indígena con mayor presencia en el departamento es el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Según el informe realizado por Sanabria (2016) la organización agrupa más del 90% de comunidades indígenas en la región, en donde existen alrededor de 84 Resguardos y 115 Cabildos Indígenas (Paredes Mosquera, Segura Sandoval, Guachetá

Torres, & Orozco Ordoñez, 2016). Las comunidades indígenas se encuentran distribuidas en la región de la siguiente manera:

Tabla No. 1. Ubicación y habitantes de las principales comunidades indígenas Departamento del Cauca

Comunidad	Cantidad	Localización
Paeces o Nasa	120.000	Norte de la Cordillera Central
Totoró	5.000	Cordillera Central y altiplano de Popayán
Guambiano	16.000	Cordillera Central y Macizo Colombiano
Yanacona	25.000	Macizo Colombiano
Kokonuco	7.000	Altiplano de Popayán
Eperara	2.6000	Llanura del Pacífico
Inga	9.500	Cuenca Amazónica
Pubenense	2.500	Cordillera Occidental

Fuente: Sanabria 2016: 11.

Otro grupo étnico presente en la región son los afro-caucanos, localizados principalmente en la llanura del Pacífico y en el norte del departamento. Particularmente, en el departamento hay municipio donde las comunidades afro-caucanas superan el 50% de su población, entre ellos destacan, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Patía, Buenos Aires y Santander de Quilichao (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alianzas Territoriales para la Paz, 2014).

El departamento administrativamente está organizado en siete subregiones que poseen en su interior características homogéneas en términos geográficos, económicos y socioculturales. Las subregiones son la llanura del Pacífico, la Cordillera Occidental, el Valle del Patía, el Altiplano de Popayán, la Cordillera Central, el Macizo Colombiano y la Cuenca del Amazonas (Sanabria, 2016). El territorio con mayor importancia en cuanto a recursos naturales es el Macizo Colombiano, en tanto, representa la estrella hídrica más importante del país. Aquí, en esta subregión, nacen los ríos del Cauca, Patía, Magdalena y Caquetá, representando el área con mayor potencial de generación de energía hidráulica. Esta condición la ha convertido en una subregión estratégica a nivel mundial por la cantidad de afluentes que nacen de los páramos (Sanabria, 2016).

No obstante, el departamento del Cauca cuenta con espacios de difícil acceso para la institucionalidad. Especialmente, la zona del Pacífico alberga una exuberante vegetación, pero, al no contar con una infraestructura en materia de vías terrestres y fluviales acorde a las

necesidades de su población, la han convertido en una zona de difícil comunicación con el resto del departamento.

Como también, las dificultades de conectividad se incrementan dado que el departamento se encuentra sobre la Cordillera Occidental, caracterizada por ser una zona geográfica con grandes cerros y picos, limitando el acceso del control gubernamental por parte del Estado.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014), el 50% de la población caucana se dedica a la actividad agropecuaria, el 35% a los servicios, el 14% a la industria y el 1% a la minería. A pesar de ser una región de gran riqueza natural, en la última década el Cauca ha registrado uno de los porcentajes más altos de pobreza en Colombia. Para el año 2013, la pobreza en el Cauca era de 58,4% (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alianzas Territoriales para la Paz, 2014), en 37 de sus 42 municipios, el NBI es del 46,62%, lo que demuestra que 368 mil personas viven en condición de pobreza. Por cierto, los municipios de Argelia, Almaguer y Guapi el NBI superan el 80%; solo dos de sus municipios –Popayán y Puerto Tejada- el NBI está por debajo del 20% (Sanabria, 2016).

La desigualdad social del departamento es realmente alta, el coeficiente de Gini –usado para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso- demuestra que el Cauca sigue siendo superior al nivel nacional desde el 2008. Desde ese año, la desigualdad registra un aumento con relación a la década de los años 90s. Para el año de 2003 fue de 0,474%, en el año 2008 fue de 0,596% y en el 2010-2012 fue de 0,565 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alianzas Territoriales para la Paz, 2014). La siguiente tabla resume las condiciones de desigualdad socioeconómica de la región caucana:

Tabla No. 2. Principales datos de la situación económica en el Cauca

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)	56.4%. Más de la mitad por debajo del promedio nacional: 37%	
Población en condiciones de miseria	32%	
Tasa de analfabetismo	21.3%	
Tasas de mortalidad infantil	Son altas, por cada 1.000 nacidos vivos: 64,7 en hombres y 51,22 en mujeres. Mientras el promedio nacional es de 31,05 en hombres y 23,27 en mujeres.	
Tasas de desnutrición crónica en las diferentes zonas del departamento 1	Centro	21.9%
	Oriente	45.9%
	Costa	25,1%
	Popayán	19.9%
	Macizo	29.5%
	Sur	16,6%
	Norte	14.5%
Tasas de cobertura de servicios públicos domiciliarios	Energía	80.7%
	Acueducto	66%
	Alcantarillado	66%
	Teléfono	23.7%

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Cauca: Análisis \$ de las conflictividades y construcción de paz*. 2014. Pag 14.

Medina (2019) aclara que en el Cauca hay factores de vulnerabilidad que aumentan el impacto del conflicto armado. El departamento no supera el rezago del desarrollo en comparación con otras regiones del país. A principios de los años sesenta aportaba el 2% del PIB nacional, para el año 2005 esa participación había descendido al 1,74%. Este autor infiere que dadas las condiciones de desigualdad y las pocas oportunidades de formación educativa, el 10% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, la deserción escolar en sus 42 municipios oscila alrededor del 25 y 30%. Pese a los esfuerzos de las organizaciones étnicas por mantener fuera del conflicto a los jóvenes, estos siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado, cada vez hay mayor participación de niños en las plantaciones ilegales.

En resumen, a las dificultades de movilidad espacial de la región se le suman las condiciones de desigualdad y pobreza que afligen a la mayoría de la población caucana. El vacío de control estatal posibilita la inserción de actores armados ilegales en el territorio, creando un ambiente de violencia que ha marcado la historia del departamento del Cauca. En el siguiente apartado del capítulo, rastreadremos las razones por las cuales se ha consolidado el conflicto

en el departamento: distribución desigualdad de la tierra, gestación y constitución de grupos armados, afianzamiento de economía ilegal y la crisis de gobernabilidad en la región.

1.1. Disputas por las tierras en el Cauca

Las disputas por la tierra en el Cauca obedecen a temas históricos como el despojo, supervivencia de la comunidad, la persecución política a líderes indígenas y la poca presencia estatal, estas circunstancias se han hecho visibles por el recrudecimiento del conflicto de actores armados hacia las comunidades étnicas. Según, el Centro de Memoria Histórica, los conflictos contemporáneos por la tierra comenzaron en los años 60s, el anuncio de la reforma agraria ocasionó que cientos de terratenientes expulsaran de sus predios a los terrajeros - indígenas que pagaban con su trabajo el acceso a las parcelas-. En el año de 1971 con la participación de 2.000 indígenas y diversas organizaciones campesinas, en medio de un contexto represivo y de condiciones adversas que se contraponían al cambio sobre todo en el Cauca por los conflictos de tierras, por el poder y el control de los terratenientes, quienes buscaban con sus imposiciones sociales y económicas hacia el indígena, se consolida el Consejo Regional del Cauca (CRIC), como organización que reunía los intereses de los resguardos de Toribio, Totoró, Guambia, Pitayo y Jámbalo (Tunubala Yalanda, 2016). En ese momento, el objetivo principal era la recuperación de la tierra usurpada, en su inicio el CRIC se erigió bajo las siguientes banderas:

“1. Recuperar la tierra de los resguardos, 2. Ampliar los resguardos, 3. Fortalecer los cabildos indígenas, 4. No pagar terrajes, 5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación, 6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas, 7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas, y en su respectiva lengua” (Tunubala Yalanda, 2016, pág. 63).

Sin embargo, este tipo de organizaciones se vieron involucradas en la guerra que se desarrollaba en su departamento, cada vez más se fueron consolidando grupos guerrilleros que en un principio se unieron a las demandas de grupos étnicos, organizaciones como las FARC, el ELN y el M-19. Así mismo, los indígenas conformaron grupos de autodefensas para defenderse de los hacendados, militares y funcionarios del gobierno, lo que en un principio eran indígenas armados con palos y piedras, rápidamente se convirtió en la única

guerrilla étnica de la historia del país, el Movimiento Armado Quintín Lame, que estuvo activo hasta los acuerdos de paz previos a la Constitución de 1991.

Para la década del 2000, las luchas por las tierras cambiaron radicalmente por dos razones fundamentales. La primera, el uso de cultivos ilícitos en el departamento, la segunda, la movilidad de las drogas. El cultivo de coca en el Cauca ha variado durante esta década, esto se debe principalmente a los periodos en donde el Plan Colombia tuvo mayor inserción en el departamento, durante los años de 2000 y 2012, en más de la mitad de los municipios caucanos había plantaciones de coca, particularmente en El Tambo, Argelia, Mercaderes, Piamonte, Timbiquí y López. Para el año 2012 el 33% del total nacional de cultivos de amapola se localizaba en municipio como Jambaló, Toribio, Corinto y Miranda, los cuales son mayoritariamente habitados por indígenas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alianzas Territoriales para la Paz, 2014).

El Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (2014) sostiene que la siembra y el procesamiento de los cultivos de uso ilícito genera múltiples impactos negativos contra las comunidades, los recursos naturales y el ambiente, además de agravar las violaciones de los Derechos Humanos. Las actividades vinculadas al narcotráfico atentan contra la gobernabilidad y territorialidad de los pueblos indígenas, aumenta su vulnerabilidad y el nivel del riesgo en el que se encuentran.

Indepaz (2019) afirma que en el 2016 se registró 12.600 hectáreas de cultivos de coca en el Cauca, concentrados en los municipios de Argelia y el Tambo, en 2018 esa cifra ascendió a 22.000 hectáreas, para marzo del 2019 la expansión llega a 31.000 hectáreas. El cauca es tercer productor de base de coca con un potencial de exportación de 300 toneladas de cocaína transportada por las rutas del Pacífico.

El gobierno es incapaz de hacerle frente a la proliferación constante de cultivos ilícitos, la implementación indiscriminada de fumigaciones aéreas con químicos y la erradicación manual forzada, son medidas ineficaces que afectan directamente al eslabón más débil del narcotráfico, campesinos que se sostienen de este tipo de cultivo. Estas medidas estatales han agudizado la crisis humanitaria en el departamento provocando el desplazamiento e inseguridad alimentaria por daños a las fuentes de agua para cultivos y mata cada vez más a los animales.

En cuanto a la posición estratégica del departamento, el Cauca se encuentra en medio de un corredor de movilidad de armas y drogas, permitiendo el desplazamiento hacia el Tolima, Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. Gran parte de las rutas de envío de drogas ilícitas, contrabando y comercio de armas ilegales se concretan en el puerto de Buenaventura. En ese sentido, la cadena del negocio ilegal se expande en una ruta que recorre los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Por años, el Estado ha intentado replegar a los grupos subversivos de estos territorios mediante un control militar total, por eso, desde el año 2003 fomentó una Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción territorial (PNCT). Para cumplir este objetivo, fortaleció la presencia de Fuerza Pública en la región del Macizo colombiano, en el municipio de San Sebastián y Tacueyó se instalaron dos batallones de Alta Montaña. Además, en todo el departamento operan brigadas móviles del Ejército encargadas de combatir a las FARC-EP en el suroccidente del país (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alianzas Territoriales para la Paz, 2014).

Autoridades indígenas del norte del Cauca como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- han rechazado la destinación de cuantiosos recursos para la guerra, invisibilizando los derechos de la población civil, pues se privilegió al programa PNCT sobre las iniciativas económicas y sociales, dándole al territorio el carácter de zona de operaciones de guerra, a la vez que se les señaló de pertenecer a organizaciones insurgentes, lo que agravó su imagen a nivel nacional y promovió distintos ataques en contra de las comunidades. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alianzas Territoriales para la Paz, 2014).

En conclusión, en este apartado mostramos los conflictos socioculturales que giran alrededor de la tierra y las posiciones de los sectores indígenas en las distintas coyunturas. De esta sección rescatamos la evolución del movimiento que surgió desde los años sesenta como un fuerte opositor a la apropiación ilegal de tierra por parte de los terratenientes, un movimiento que se levantó frente a la incursión del conflicto de los actores armados en el departamento, a pesar de la fuerte persecución a la que fueron sometidos. Hoy en día, el movimiento indígena aún sostiene las banderas por las cuales ha organizado por más de 50 años.

1.1.2 La consolidación del conflicto en el Cauca

En esta sección se expondrán las circunstancias que han prolongado el conflicto armado en el departamento del Cauca, pese a la resistencia indígena de organizaciones como el CRIC y las negociaciones logradas tras los Acuerdos de la Habana firmada entre el gobierno y el grupo guerrillero con más presencia en el territorio, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). A diferencia de otras regiones del país en el norte del Cauca la intensidad del conflicto armado no muestra indicios de pacificarse y en cambio registra índices iguales incluso superiores a los que se presentaron a principios del 2000 (Fundación Ideas para la Paz, 2016).

Espinosa (2012) indica que hay cuatro razones para la prolongación del conflicto en el Cauca. La primera es la posición geográfica del departamento, el Cauca hace parte del corredor estratégico para la movilidad de armas y drogas; la segunda es el desarrollo de megaproyectos como la minería, las zonas francas y el monocultivo de caña, lo que permite una mayor presencia de actores armados legales e ilegales; la tercera, la presencia histórica de la insurgencia, en la región han actuado todos los grupos guerrilleros, actualmente se disputan el territorio las facciones del ELN, las disidencias de las FARC-EP, los clanes del narcotráfico, la delincuencia común y las fuerzas estatales de control; la cuarta y última razón, la persistencia del movimiento social del Cauca, en particular, de las comunidades indígenas del norte del departamento.

Para nuestra investigación es importante profundizar en las condiciones preponderantes para la permanencia del conflicto armado en el territorio caucano. En ese sentido, observaremos los principales ejes argumentativos que dan cuenta sobre esta problemática: 1) disputas territoriales; 2) conflicto armado; y 3) megaproyectos

1.2. El desarrollo del conflicto armado en el departamento del Cauca

En este apartado nos interesa profundizar en el número de víctimas, las dinámicas de la violencia utilizada por los grupos armados y el desarrollo del conflicto en la región. El departamento ha sido un escenario donde se promulgan amenazas, se persigue de forma violenta a líderes sociales, se masacran civiles y desplazan a comunidades enteras. Los

conflictos se entrecruzan con las disputas territoriales, la guerra por el control económico y el abandono estatal. Indígenas, afros y campesinos han padecido el asesinato sistemático de su comunidad durante décadas. El estudio realizado por La Liga Contra el Silencio (2019) reporta que tras la firma de los Acuerdos de Paz, durante los años de 2018 y 2019 se han reposicionado las estructuras disidentes de las FARC, se recompuso el Ejército Popular de Liberación (EPL), se ha desplegado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se han afianzado grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). A estos grupos se le suman Los Pelusos y el Cartel de Sinaloa. Todos se confrontan por un mismo objetivo: supervisar la producción de coca, el control de la población civil y las economías ilegales en el departamento.

Chará y Hernández (2016), mencionan que durante los años de 1985 a 2015, las víctimas del conflicto armado en el país ascienden a más de 7.860.386, de las cuales 5,2% (418.124) correspondían al departamento del Cauca. Para estos autores, existen cuatro etapas cruciales para el desarrollo del conflicto, la primera de ellas, hace referencia a la débil capacidad institucional para responder a las necesidades sociales de los ciudadanos caucanos, durante los años de 1985 y 1998, se evidenció una disputa por la distribución de la tierra entre organizaciones indígenas y terratenientes. La segunda etapa, hace mención al incremento de grupos armados y sus guerras por el control de la población civil y por la contención de las fuerzas estatales, en el periodo de 1998 y 2002, se experimentó un crecimiento del 12,6% de víctimas en la región. A esto se le suma el fallido intento del proceso de paz en el Caguán. La tercera etapa corresponde al mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez del año 2002 a 2010 y la implementación de la Política de Seguridad Democrática, en este lapso de tiempo se evidencia un claro incremento de víctimas por la presencia de grupos paramilitares en el norte del departamento y por la intensificación de las acciones armadas de las FARC y el ELN. La cuarta etapa, entre 2010 y 2015 se evidencia un mayor número de víctimas, este incremento se debe a dos razones fundamentales. La primera, los diálogos del Proceso de Paz que dividieron las facciones interiores de las FARC-EP en el departamento, provocando la salida del sexto frente y la Columba Jacobo Arenas del grupo guerrillero. La segunda, la promulgación de la Ley de Víctimas, la cual inició un proceso de reparación integral a las víctimas de la región, logrando recolectar testimonios y experiencias que antes no tenían cabida en las instituciones estatales (Chará Ordóñez & Hernández Casas, 2016).

La Defensoría del Pueblo ha registrado diferentes tipos de hechos delictivos: asesinatos, actos terroristas –hostigamientos, combates y atentados-, amenazas, desaparición forzada, desplazamiento, plantación de minas antipersonas, secuestro, tortura, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y tortura. Entre estos delitos, presentaremos las cifras del asesinato, actos terroristas y desplazamiento, por ser los hechos que más han afectado a los caucanos.

Entre los años de 1985 y 2015 se registraron 50.430 homicidios en el departamento, los cuales corresponde al 5% del total de víctimas por homicidios en el país durante el mismo periodo. El lapso de tiempo donde más hubo asesinatos fue entre 1985 y 1999, en donde el porcentaje de víctimas oscila entre el 3,8 y 7,8 (Chará Ordóñez & Hernández Casas, 2016). En el año 2017 la cifra de homicidios en el departamento fue de 303, sin embargo, esta cifra fue casi duplicada para el año siguiente, la cual alcanzó 532 asesinatos (Rincón Vega, 2019). La investigación de Rincón (2019) evidencia el asesinato sistemático en contra de líderes indígenas, para el año de 2016, la cifra fue de 41, en el 2017 fue de 30, en el 2018 fue de 12 y, en el año 2019 fue de 52. En total, durante los últimos tres años el homicidio de líderes indígenas es de 213.

La entrevista realizada por Rincón (2019) al ex asesor de paz del departamento del Cauca, Walter Aldana, indica que rastrear a los presuntos sospechosos de estos delitos es casi que imposible, pues él advierte que: “No se sabe quiénes son, algunos se presentan sin nombre, otros como Pelusos, como fortalecimiento del ELN o como disidencias de las FARC. La comunidad tiene la incertidumbre de saber quiénes son los hombres armados y esto lleva a que el silencio se convierta en el seguro de vida: ‘yo no digo nada, yo no he visto nada’. Es una característica tenaz de la guerra” (Rincón Vega, 2019).

Por otro lado, las incursiones guerrilleras y ataques a las comunidades civiles es un fenómeno que afecta a casi todos los departamentos del país. Las incursiones y ataques guerrilleros fueron vistos como una estrategia político-militar que contribuía considerablemente a la materialización de los objetivos de control territorial. Dichas estrategias provocaron graves destrozos a las poblaciones civiles y la naturaleza. Como lo indica el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre los años de 1965 y 2013, se registró un total de 1.755 incursiones guerrilleras en centros poblados y cabeceras municipales, de las cuales 609 fueron tomas y

1.146 fueron ataques a los organismos de control del Estado. Las FARC fue el grupo que más realizó este tipo de acciones, acumulando aproximadamente 1.106 de este tipo de hechos, lo que representa el 63% (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). El departamento del Cauca es el lugar donde más incursiones guerrilleras se presentaron entre los años de 1965 y 2013 con un total de 309 casos. Para la Defensoría del Pueblo (2018), pese a que los ataques violentos contra la población se han reducido de manera considerable tras la firma del Acuerdo de Paz, este tipo de violencia aún persiste en algunos municipios del departamento, principalmente en municipios como Corinto, donde hubo 6 ataques en el año 2017, y 4 ataques entre los meses de enero y septiembre de 2018.

Esta región ostenta la lamentable cifra de 12.579 personas afectadas por atentados guerrilleros, lo cual representa el 16,5% de las 77.014 víctimas en el país (Chará Ordóñez & Hernández Casas, 2016). Los años de mayor registro coinciden con la intensificación del conflicto en el departamento, sobresale el período entre 1988 y 1989, donde las acciones corresponden al 28% del total nacional. No obstante, las víctimas del departamento para los años de 2010 y 2013, representaron un 43% del total de víctimas del país (Chará Ordóñez & Hernández Casas, 2016).

En cuanto al desplazamiento forzado, se considera que la cifra en el país a raíz del conflicto armado durante los años de 1983 y 2013 es de 5.921.924 (Luque Revuelto, 2014). Este es el delito que ha generado mayor número de víctimas en la historia del país y es el de mayor frecuencia con respecto a otras modalidades de violencia. El departamento del Cauca para el año 2013 fue la mayor región con desplazamiento forzado de víctimas con alrededor de un 34%. En términos históricos se ha registrado cerca de 307.923 personas desplazadas del departamento, esto ha generado consecuencias negativas para la preservación de la cultura étnica, ha producido pérdida de vínculos territoriales, empobrecimiento de la economía local y ha disminuido la fuerza de la movilización social (Chará Ordóñez & Hernández Casas, 2016).

Suárez y Henao (2002) sugieren cinco modalidades distintas de desplazamiento forzado indígena producto de la guerra: 1. Desplazamiento interno dentro de los territorios: la estrategia consiste en no abandonar los límites de los territorios indígenas para reducir los efectos del control ejercido por grupos armados; 2. Desplazamiento intraétnicos: desplazarse

como medida preventiva hacia otro territorio ocupado por una comunidad del mismo pueblo indígena que facilite un espacio seguro; 3. Desplazamiento extraterritoriales: es una de las formas más problemáticas de desplazamiento forzado indígena, ya que consiste en movilizarse a las ciudades o cabeceras municipales; 4. Desplazamiento disperso o gota a gota: consecuencia de las acciones violentas selectiva, las comunidades en donde no hay una fuerte cohesión social o el momento histórico de la comunidad es frágil, el desplazamiento forzado se da sin una unión, lo que impide seguir con la comunidad conllevando a la dispersión de sus miembros; 5. Éxodo organizado múltiple (indígenas, campesinos y afrodescendientes): la fuerte cohesión pluriétnica gracias a las condiciones comunes históricas de supervivencia, socioeconómica y cultura, les permiten gestar desplazamientos de comunidades enteras a territorios donde puedan tener seguridad y denunciar las violaciones de Derechos Humanos (Suárez Morales & Henado Arcila, 2002).

En resumen, en este apartado evidenciamos las prácticas violentadas llevadas a cabo por las organizaciones armadas ilegales en el departamento, las cuales han infligido distintos tipos de daños a la comunidad local. Los datos históricos relacionan las etapas coyunturales con las distintas dinámicas de control violento ejercido por grupos guerrilleros como las FARC-EP. Como lo indica La Liga Contra el Silencio o autoras como Ramírez, los Acuerdos de Paz no cesaron las dinámicas de la violencia, por el contrario, se mantuvieron e incluso incrementaron durante los últimos años.

En el siguiente apartado, ahondaremos en otra de las razones de la perduración del conflicto armado en el territorio, nos referimos al desarrollo de los megaproyectos.

1.3 Las consecuencias de los Megaproyectos en el departamento del Cauca

Paradójicamente, las riquezas naturales de la región caucana no solucionan las dificultades económicas de su población, contrario a lo que se espera, generan incluso más violencia. En este apartado nos interesa conocer los conflictos producidos por la industria minera en la región.

De acuerdo con Gómez (2015), en el año 2014 la Agencia Nacional de Minería reportó que 34.278,79 hectáreas del Macizo caucano corresponden a títulos mineros, lo que es aproximadamente el 21,15% del territorio; a esto se les suma el área acumulada por las

solicitudes (37.276,59 ha) se cree que abarca el 44,14% de la totalidad del territorio. Este incremento se debe a la expedición de la Ley 685 del 2001, mediante la cual se modifica el Código Minero para reglamentar la exploración y explotación. Esta ley de expedición reduce las competencias del Ministerio de Ambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales para el otorgamiento de las licencias ambientales en el sector minero, con lo cual, se afecta la regulación de la actividad en la zona. Además, el país desde los años 90s se dirige hacia una economía neoliberal fundamentada en la extracción de minerales, esto es evidente por el artículo 332 de la Constitución Política, la cual indica que el Estado es propietario del subsuelo y los recursos no renovables, lo que abre un camino legal para expropiación, conllevando así a la afectación de la propiedad sobre la tierra de las comunidades e incluso de propiedad privadas.

Bajo la misma línea argumentativa, Espinosa (2012) menciona que en el Cauca existe una avanzada agroindustria de la caña, la cual explota el 70% del territorio fértil del Valle del Cauca y del departamento del Cauca. Además, la reciente construcción de una de las zonas francas más grandes del país al norte del departamento beneficia a más de 130 empresas transnacionales que se asentaron en la región. Transnacionales como Anglo Gold Ashanti, Cerromatoso y Carboandes, radicaron más de 1200 solicitudes de títulos de exploración minera en el departamento, cubriendo así más de un millón seiscientos mil hectáreas, que abarcan el 56% del territorio.

Uno de los casos más problemáticos es el registrado por el Pupsoc y la ANUC, pues registran conflictos a lo largo del río Esmita, en donde desde el 2007 la empresa Anglo Gold Ashanti ha instalado retroexcavadoras, alquilando tierras y funcionando a partir de concesiones particulares, además de utilizar mercurio para la extracción de oro y explotar material de arrastre. Según alertan las dos corporaciones, esta multinacional tiene pretensiones de exploración y explotación minera en el municipio de la Sierra, así como la apropiación de los recursos hídricos por parte de la organización Ardilla Lulle (Gómez Dueñas, 2015).

Espinosa también aclara que las concesiones mineras en los municipios de Almaguer, Bolívar, La Sierra, Suárez y Buenos Aires han generado graves crisis ambientales, desplazamiento de comunidades y violando los Derechos Humanos, sociales y culturales. El

recrudescimiento del conflicto armado está ligado con la entrega de terrenos a las más poderosas empresas en el país (Espinosa Moreno, 2012).

Esta relación se percibe por la militarización de los territorios, en particular por la creación de unidades militares especializadas en la custodia y protección de los proyectos minero-energéticos y de batallones de alta montaña en territorios indígenas. El Estado colombiano en concordancia con su modelo de desarrollo neoliberal ha dado la espalda a los acuerdos entre el gobierno e indígenas, afrocolombianos y campesinos en defensa del territorio, la conservación de los ecosistemas, la flora y fauna, los planes de ordenamientos territorial e incluso los planes de vida de las comunidades. Para la Defensoría del Pueblo (2015), en el departamento del Cauca existe dos ejes de argumentativos al momento de observar la problemática socio ambiental entorno a la actividad minera: 1. La presencia de actividad minera criminal realizada por actores armados al margen de la ley y 2. Procesos de formalización de la actividad minera en el norte del Cauca que omiten las propiedades comunales de los grupos étnicos de la región.

El primer elemento de argumentación infiere que después de los Acuerdos de Paz en la época del posconflicto, el ELN, las AGC y las disidencias de las FARC están copando los territorios donde violan los derechos fundamentales y cometen cualquier clase de delitos con el objetivo de controlar el narcotráfico y la minería ilegal. La Defensoría del Pueblo ha erradicado múltiples alertas sobre la actividad mineral criminal realizada por estos actores, principalmente en los municipios del norte del Cauca: Suarez, Buenos Aires y Santander de Quilichao. Esta problemática persiste por la poca participación del Estado en regular la práctica y, sobre todo, por las relaciones de los grupos armados con las grandes industrias (Defensoría del Pueblo, 2015).

Sin embargo, la conflictividad por recursos como el oro es aún más compleja que el narcotráfico, pues en ella se alberga una pugna de intereses entre compañías legales, comunidades mineras -principalmente afrodescendientes-, autoridades locales, mafias políticas, bandas criminales y grupos armados ilegales. Esta guerra golpea fuertemente a los mineros tradicionales que son presionados a entregar sus unidades a medias y grandes empresas, las cuales utilizan la intimidación y la violencia directa que en mayor medida

recurren al uso de asesinos a sueldo que a los servicios de grupos armados organizados (Indepaz, 2019).

En el segundo elemento de argumentación hace énfasis a los principales conflictos minero-energéticos que se relacionan con el desconocimiento de los derechos fundamentales a la participación, la autonomía y el territorio colectivo de los grupos étnicos, las reivindicaciones a la distribución de la tierra y a los daños ambientales provocados. Para mitigar estos daños, una de las distintas estrategias de las autoridades indígenas del Cauca es proteger los territorios de la minería que se encuentran en Zonas Mineras Indígenas (ZMI). Estas áreas están ubicadas en el norte, centro y oriente del departamento, comprenden 121.420 hectáreas, y existen alrededor de 13 ZMI. En estos territorios las comunidades realizan minería de tipo artesanal, al mismo tiempo tecnifican la extracción de minerales como el azufre (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alianzas Territoriales para la Paz, 2014).

Para finalizar este apartado queremos indicar que estas son las razones fundamentales del conflicto en el Cauca en relación con la mega industria principalmente la minería. Por generar grandes capitales económicos es proclive un mayor impacto en las comunidades étnicas. El panorama no es alentador, cada vez más se acentúa la explotación extractivista en el departamento, así mismo trae irrevocables consecuencias en la organización de los pueblos indígenas y a los recursos naturales del departamento. También, queremos mencionar el impacto de la actividad minera, pues en principio esta era de tipo artesanal y con poco peso en la producción y economía de la región, ahora con la llegada de multinacionales, tiene un papel fundamental para el desarrollo de las políticas neoliberales estipuladas por los últimos cuatro gobiernos colombianos. Este proceso que surge de la consolidación de la explotación de minerales en vínculo con capitales individuales y empresas extranjeras desarrolla elementos de carácter legal e ilegal que afectan negativamente las condiciones de vida de los pobladores y el medio ambiente. El Estado colombiano ha dejado bastante claro que le interesa más las actividades de tipo extractivistas que la protección de las comunidades que allí existen y que protegen la biodiversidad de sus territorios.

En conclusión, la problemática del conflicto se centra en la propiedad de la tierra, los ejes argumentativos expuestos se relacionan entre sí y corresponden a los momentos coyunturales del país, las dinámicas del poder en disputa entre los actores armados y los intereses

económicos globales. No obstante, el estudio de las características del conflicto armado en la región conlleva a observar de forma holística las problemáticas que se desarrollan en medio de este contexto violento, ya que las comunidades étnicas y campesinas se ven afectadas desde distintos puntos, no solo en la distribución de la tierra sino en el desarrollo de su cultura, en su autonomía política y especialmente en las condiciones que precarizan cada vez más su vida. En síntesis, los problemas de la región son transversales e inevitablemente responden a dos situaciones en particular: la falta de presencia estatal y la agresión de la autonomía por parte de todos los actores que hemos nombrado hasta el momento.

CAPÍTULO 2. La resistencia civil en el municipio de Jambaló-Cauca

El objetivo de este capítulo es identificar las manifestaciones de resistencia civil de la comunidad Nasa del municipio de Jambaló. Para alcanzar este propósito se aplicaron 100 encuestas en el año 2019. Este capítulo se dividirá en dos momentos. Inicialmente efectuaremos un análisis relacional entre el concepto de movimientos sociales y resistencia civil. Luego, presentaremos los datos arrojados del trabajo en campo con la población y sus percepciones sobre las dinámicas de la resistencia civil local.

Para iniciar, presentaremos las cifras de las movilizaciones sociales en la reciente década (2010-2019) se produjo un auge inusitado de la protesta social en Colombia. De acuerdo con la base de datos de luchas sociales del CINEP, en 2013 se presentaron 1027 manifestaciones sociales, la cifra más alta desde que empezaron su registro en 1975. Desde una perspectiva cuantitativa, existe un ciclo ascendente de movilizaciones de grandes magnitudes, que comprende los paros universitarios (2011, 2015, 2018 y 2019), el paro nacional campesino de 2013 y 2014, y la minga del año 2016 (Cruz Rodríguez, 2016). Entre los años de 2016 y 2019 se realizaron aproximadamente 2,775 manifestaciones en el país, las organizaciones cívicas convocaron a 459 (16.5%) movilizaciones a nivel nacional, en menor medida lo hicieron los sindicatos que se manifestaron en 361 (13%) oportunidades, las comunidades étnicas y campesinas se manifestaron en 85 oportunidades durante este periodo (CINEP, 2019). Entre los tipos de luchas más usadas se destaca en primer lugar la movilización social con aproximadamente 1762 manifestaciones a nivel nacional, en segundo y tercer lugar los

paros y bloqueos de vías realizadas en 799 oportunidades, en menor medida se encuentra la resistencia civil que se realizó en 19 ocasiones. El departamento del Cauca albergo 112 de las manifestaciones a nivel nacional (CINEP, 2019). Los motivos por los que más se movilizan los colombianos son por la exigencia de políticas sociales (511 movilizaciones), los malestares que causan el incumplimiento de los pactos realizados con el gobierno (485 movilizaciones), y la denuncia de la violación u omisión de derechos fundamentales por parte del Estado (391 movilizaciones). Al ser una de las herramientas de protesta más utilizada en el marco de la resistencia civil, profundizaremos en la movilización social y el impacto que la comunidad Nasa ha generado a través de este mecanismo de presión social.

En este trabajo entendemos los movimientos sociales como actores políticos colectivos que persiguen objetivos de cambio a través de acciones -generalmente no convencionales- que tienen como eje común un alto nivel de integración simbólica (Martí i Puig, 2013). Los movimientos son nutridos por personas que buscan satisfacer sus necesidades en común, esa unión se condensa por la gestación de organizaciones o asociaciones. Olson (1985) aclara que a pesar de que existan intereses heterogéneos, se espera que la organización satisfaga la mayoría de los intereses comunes. Para este autor, una característica esencial de la organización es que proporciona un beneficio inseparable y generalizado.

En ese sentido, Martí i Puig (2013) aclara que al momento de realizar una definición operativa de los movimientos sociales, se podría afirmar que son un agente de influencia y persuasión que desafía las interpretaciones dominantes sobre diversos aspectos de la realidad, incidiendo así en diferentes ámbitos. En el *ámbito político* porque es un sistema de narraciones que pretende crear nuevos registros culturales, explicaciones y prescripciones de cómo deberían resolverse los conflictos que atraviesa la sociedad. En el *ámbito interactivo* porque un acto político incide en el conflicto social y pretende cambiar la correlación de fuerzas existentes. En el *ámbito institucional* porque incide e impacta en los espacios que regulan las conductas de los actores a través de acciones no convencionales y contenciosas. Finalmente, en el *ámbito sustantivo* porque es un instrumento de cambio de la realidad.

Por su parte, CINEP cree que una de las características principales de la movilización social se expresa en la conflictividad social que solo se evidencia a partir de las tres condiciones básicas que la posibilitan. La primera, los Motivos: una valoración colectiva de una situación

injusta o conflictiva. La segunda, los Recursos: la disponibilidad de elementos (tiempo, dinero, redes sociales, discursos, entre otros más) que permite la organización y la acción coordinada de quienes tienen motivos para movilizarse. La tercera condición, una estructura de oportunidad política que permita visibilizar el reclamo públicamente (CINEP; Programa para la Paz, 2016).

Desde la perspectiva de González (2010), el análisis de los movimientos sociales conlleva a una valoración dual de los mismos. De una parte, es necesario considerarlos “producto” de los conflictos sociales, de otra parte, “productores” de cambio en la sociedad. Al ser “producto” se establece una relación entre movimientos, sociedad y actores, tal relación implica la confrontación o complementariedad de los campos culturales, es decir, las luchas de los movimientos sociales señalan la crisis del campo cultural propio, el cual se ve afectado por el constante control del campo cultural dominante. Cuando la autora infiere que los movimientos sociales son “productores” nos indica la capacidad de transformación de los movimientos; sus acciones colectivas motivan el desarrollo de cambio y reconstrucción del campo cultural dominante, a través de la consolidación de identidades colectivas, la reinterpretación de normas y la creación de nuevos significados en la acción pública, privada y política, así como propuestas de inclusión.

Bajo esta relación sistemática, los cambios sociales producidos por los movimientos transforman la vida social, pues desde la esfera social modifican las esferas políticas y económicas. Así mismo, su capacidad de producir cambios sociales se entiende observando la dinámica interna de los movimientos y la manera en cómo estos a través de diferentes mecanismos, promueven la identidad, se unen en pro de un beneficio y reflexionan entre sus miembros para reclamar a la sociedad un espacio de reconocimiento a manera de inclusión o de reforma (González, 2010).

Es preciso señalar que los movimientos sociales deben superar muchos retos antes de convertirse en impulsores de cambio social. Se identifican seis tareas para que sus propósitos tengan impacto en la sociedad: 1. Conseguir nuevos miembros; 2. Mantener la moral y el nivel de compromiso de los miembros con los que ya cuenta; 3. Conseguir cobertura de los medios de comunicación y organismos internacionales de Derechos Humanos; 4. Movilizar el apoyo de grupos externos; 5. Limitar las opciones de control social que pudieran ser

ejercidas por sus adversario; y, 6. Influir sobre el actuar político (sobre todo en las decisiones estatales) con distintas formas de presión social (Martí i Puig, 2013).

En cuanto a las estrategias y repertorio de los movimientos sociales existen dos extremos que ofrecen un abanico de propuestas indefinidas y cambiantes con el objetivo de transformar la realidad social. Por un lado, se encuentra la acción directa (acción violenta) y, de otro lado, se encuentra las acciones convencionales (huelgas, cartas a medios de comunicación y manifestaciones). En ese sentido, la historia de la acción colectiva es la historia de cómo se incorporan al repertorio formas nuevas de acción colectiva al ser aprendidas, experimentadas, vividas y asimiladas tanto por los movimientos como por los oponentes. Por esa razón, el repertorio evoluciona incorporando las nuevas manifestaciones que reemplazan a las antiguas, a la vez con el paso del tiempo muchas de las formas originalmente disruptivas se vuelven convencionales, tal como ha ocurrido con la huelga, que ha pasado de ser delito a derecho fundamental de los Estados democráticos (Martí i Puig, 2013).

En este espacio de nuevas estrategias es donde cobra vital importancia la resistencia civil de las comunidades indígenas. El impacto político que han generado en la sociedad colombiana se debe en principio al intenso activismo de su movimiento, donde se evidencia un sincretismo entre el retorno a sus tradiciones culturales, el reconocimiento de sus derechos políticos, sus multitudinarios esfuerzos organizativos y su efectiva labor contestataria (González, 2010).

Recordemos que la resistencia civil es una forma de acción política que consiste en la ejecución de estrategias que no conllevan violencia contra el adversario con el que se sostiene un conflicto. Sus acciones se orientan en la búsqueda por “seducir” a la opinión pública para que voluntariamente decida no seguir depositando su obediencia y cooperación al contendiente (Quiñones Páez, 2008). Además, la resistencia civil se consagra en las declaraciones universales de los Derechos Humanos como uno de los derechos fundamentales y, en el caso, que el Estado los viole o no los garantice, los ciudadanos tienen el deber y el derecho de acogerse a la resistencia civil para recuperarlos. La resistencia civil comprende diferentes perspectivas, desde la desobediencia civil o resistencia individual hasta formas colectivas en las cuales el colectivo actúa con más fuerza, por ejemplo en las

recuperaciones de tierra y los desalojos de actores armados de las comunidades indígenas (Rudqvist & Anrup, 2013).

La resistencia civil en Colombia, particularmente de las comunidades indígenas caucanas es un ejercicio no violento de recuperación colectiva de identidad y comprensión positiva de paz. Algunas comunidades utilizan la resistencia civil como respuesta de defensa a la violencia del conflicto armado, pero otras suelen utilizarla como mecanismo de lucha política y de defensa frente a la violencia estructural, también frente al conflicto armado y contra las multinacionales. Hernández (2006) sostiene que la resistencia civil indígena del Cauca es milenaria y ancestral, en algunos momentos de su historia ha recurrido a la violencia como necesidad de extrema defensa, pero desde un pasado reciente se ha expresado como resistencia civil al emplear acciones no violentas. La resistencia civil indígena es integral porque ejerce mecanismos de lucha y de defensa, frente a diversas violencias y actores violentos; es férrea, por pervivir en el tiempo y a las distintas dinámicas de la violencia; y es exitosa porque ha logrado en el corto tiempo concretar inclusión económica, política y social, a pesar de las condiciones de marginalidad y exclusión en la que se encuentra.

Desde los años 70s, la resistencia civil de los pueblos indígenas, en especial de la comunidad Misak y Nasa, se orientó hacia la superación de la violencia estructural mediante la recuperación de la tierra, la autonomía, la cultura y la organización política (fortalecimiento de cabildos y autoridades propias). Hernández (2006) y González (2010) insisten que, en estas comunidades, las acciones colectivas se deben entender como acciones comunitarias, dado que, no orientan su valor colectivo a partir de un criterio abstracto de bien común, al contrario, adquieren su sentido social compartido de acuerdo con los valores culturales e históricos de sus condiciones propias.

Entre las características de resistencia civil indígena caucana se encuentran los siguientes puntos: 1. Son iniciativas generadas desde las bases sociales de la comunidad; 2. Son acciones comunitarias que tiene por objetivo transformar la realidad y la defensa de los valores de vida compartidos; 3. No admiten la violencia, sin embargo, esto no significa que adopten una postura pacifista. Por ejemplo, el Pueblo Nasa cree y construye la democracia desde dinámicas participativas, optando por la resistencia no violenta como mecanismo de defensa y lucha, pero ello no implica que se descarte la acción directa como última

herramienta de defensa; 4. Sus banderas de luchas son la defensa de la vida, la autonomía, la cultura, el territorio, la integridad entre comunidades, el reconocimiento de la diversidad étnica y las propuestas alternativas de desarrollo propio; 5. Se oponen a la globalización y a los modelos económicos homogeneizantes; 6. Tienen un alto nivel de adhesión de comunidades que residen en territorio comunes, articulándose desde dinámicas participativas e instancias de coordinación y retroalimentación en espacio locales y regionales; 7. Educan a sus miembros para heredar la resistencia comunitaria; 8. Construyen de manera participativa los planes y manuales de resistencia civil, en procesos concebidos como planes de vida de los pueblos indígenas (Hernández, 2006).

En el marco de la resistencia civil, las acciones nucleares son los ejercicios más comunes: asambleas, congresos, recuperaciones de tierra y manifestaciones locales, estos ejercicios se identifican plenamente y tienen una mayor estabilidad en la historia del movimiento indígena. De estas acciones nucleares, rescatamos principalmente las asambleas y las recuperaciones de tierra por ser los ejercicios participativos con más relevancia en organizaciones como el CRIC. Cuando nos referimos a las asambleas hablamos propiamente de los espacios de discusión dinámica y abierta de la comunidad indígena. Se constituyen en auténticos espacios de información, cualificación, debate y decisión. También, por medio de este mecanismo se posibilita el desarrollo local.

Durante las asambleas se toman las decisiones más importantes de las organizaciones indígenas. Por ejemplo, en el año de 1971, en una asamblea conjunta se tomó la decisión de crear el CRIC. Bajo esta figura se permite debatir casi la totalidad de decisiones del movimiento indígena. Por otro lado, la recuperación de la tierra se constituye es unos de sus propósitos centrales. Al avivar la unidad entre los integrantes, reafirma su identidad. Para los indígenas del Cauca el terraje significó un despojo de territorio, de libertad y autonomía, la dispersión de la comunidad, la desintegración familiar, la pérdida de identidad y el control de la vida en la comunidad. Por esa razón, la recuperación de la tierra significa mantenerse unidos, como, también significa la construcción de una identidad en común, la reincorporación colectiva de su historia y el fortalecimiento de la autoridad del Cabildo, para los indígenas caucanos la tierra es el principal motivo de movilización (González, 2010).

González (2010) también menciona otros tipo de prácticas de resistencia civil, hacemos referencia a las acciones proactivas de impacto político y las acciones reactivas frente al conflicto. Las primeras son ejercicios públicos que el movimiento idea de manera creativa, para promover sus reivindicaciones frente al Estado y a la opinión pública. Estos eventos se desarrollan en su mayoría de manera local, por ejemplo, en el año 2005 se realizó la Consulta Popular y Ciudadana Por la Vida, la cual dinamizó las inconformidades de los indígenas del norte del Cauca frente al establecimiento del Tratado de Libre Comercio que ponía en peligro la soberanía de los pueblos originarios. Para realizar la consulta, los indígenas hicieron talleres informativos con el propósito de movilizar a 58.305 comuneros a votar en contra de las políticas neoliberales del gobierno. Esta iniciativa tuvo una gran aceptación en la región, pues un 98% de la población voto en contra del Tratado de Libre Comercio, así mismo, tuvo un gran efecto en la opinión nacional. Aunque, en su momento el Estado lamentó los resultados de la consulta asegurando que obedecían a la ignorancia de las comunidades. No obstante, los sectores y organizaciones sociales aplaudieron la iniciativa como un modelo de participación ciudadana.

Las acciones reactivas frente al conflicto están representadas por las actividades de la comunidad orientadas a mitigar al máximo las consecuencias sociales de la confrontación armada en el Cauca. La región donde se encuentra el CRIC hace parte del llamado corredor estratégico del suroeste colombiano, zona disputada por los actores del conflicto armado. Para mitigar el conflicto en el departamento, las acciones reactivas que se han realizado con mayor presencia son las Mingas Humanitarias y los juicios políticos a integrantes de los grupos armados (González, 2010). Por ejemplo, durante el mes de julio del año 2012, los indígenas del norte del Cauca se cansaron de la guerra, optaron por no tolerar ningún enfrentamiento armado en sus territorios, iniciando así la práctica de la recuperación de la tierra lo que provocó la expulsión de militares y guerrilleros de la zona conocida como Cerro Berlín (Ballesterio Peluffo, 2016).

Frente a este tipo de hechos, según Levalle (2018) la resistencia civil a la violencia política debe ser una práctica entendida en dos instancias. La primera, representa un conjunto de acciones frente a los efectos del conflicto armado, en ese sentido, se destacan las acciones de neutralización de los actores armados llevadas a cabo por la guardia indígena, las asambleas

permanentes en las situaciones de fuego cruzado, las audiencias públicas para juzgar los crímenes de guerra, y las comisiones masivas de búsqueda y rescate de personas secuestradas por los actores armados. La segunda instancia, hay formas típicas de lucha de los movimientos indígenas que procuran unir y reconstruir la comunidad después de los hechos violentos, esas prácticas se le conocen como acciones de resignificación (mingas, movilizaciones y denuncias).

Por último, la resistencia civil en el caso de la comunidad Nasa, se plantea como un propósito político fundamental, pues esta práctica a corto plazo promueve la identidad étnica, también permite desarrollar acciones para la valoración y recuperación de elementos culturales como: la lengua, la espiritualidad indígena, el tul, las mingas, las rotaciones, la participación en asambleas, y valores como la unidad, reciprocidad, la complementariedad, la relación armónica con la naturaleza y el sentido de arraigo territorial (Llano Quintero, 2010). De este modo, las comunidades pretenden defender su territorio frente a los actores externos, independiente de si son armados o no, esta posición es expresada en la resolución “por la Autonomía de los pueblos indígenas frente a los conflictos que atentan contra nuestro proyecto de vida” (Levalle, 2018).

2.1 La resistencia civil en el caso del municipio de Jambaló

Jambaló es un municipio que muestra una clara resistencia civil de la comunidad indígena al conflicto armado, como lo mencionamos en el capítulo anterior, este territorio es un foco históricamente disputado por la guerrilla de las FARC y el Ejército Nacional. La guardia indígena realiza actividades de control territorial del resguardo que no se coordinan con la fuerza pública, para evitar que la guerrilla ejecute cualquier tipo de violencia sobre la comunidad (Guzmán Barney & Rodríguez Pizarro, 2014). La comunidad ha mantenido desde el año de 1987 el Proyecto Global y los Planes de Vida como formas de resistencia que responden a diferentes ámbitos de la vida social de la comunidad, además estos proyectos están contruidos desde los procesos y parámetros del pueblo nasa y las organizaciones indígenas regionales como la ACIN (Asociación de Cabildo del Norte del Cauca) junto con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia indígena.

Para conocer de cerca la percepción social de los habitantes de Jambaló sobre las prácticas de resistencia civil en el resguardo, en el año 2019, se empleó una encuesta con el fin de indagar sobre los procesos de autorreconocimiento y los procesos de resistencia civil en la comunidad. La encuesta fue realizada a 100 personas pertenecientes del resguardo Nasa con el principal rasgo de que fueran personas mayores de 18 años y se reconocieran como miembros de algunos de los dos resguardos.

Las encuestas que realizamos responden a tres preguntas importantes para el análisis de la resistencia civil en Jambaló. La primera es de carácter identitario, quisimos identificar las características del autorreconocimiento como mecanismo de fortalecimiento de la resistencia en la comunidad. La segunda pregunta buscó establecer el vínculo entre el autorreconocimiento y la identidad para la protección territorial. Con la tercera pregunta nos interesamos en medir la percepción social de la resistencia civil y su valor para la protección territorial.

Tabla No. 3. La práctica de la resistencia civil ha servido para la defensa del territorio

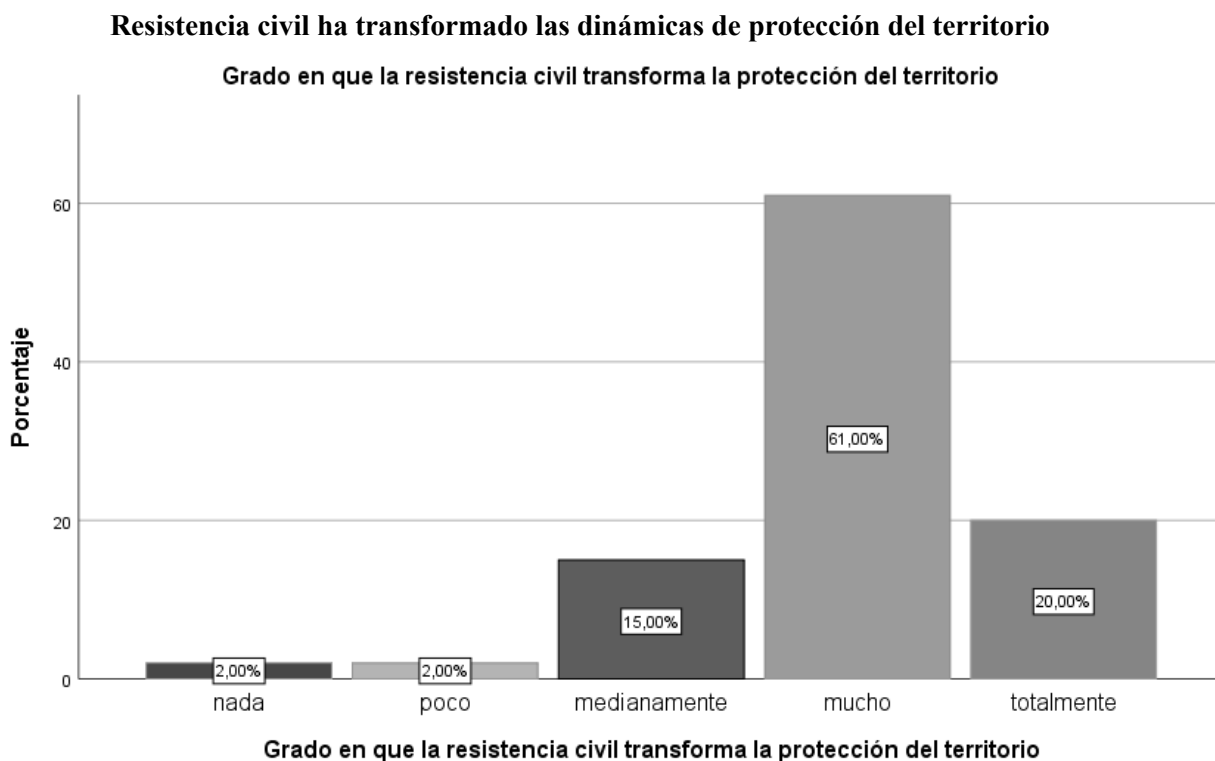
Indicadores	Frecuencia	Porcentaje
poco	6	6,0
medianamente	16	16,0
mucho	61	61,0
totalmente	17	17,0
Total	100	100,0

Fuente: Encuesta realizada por el autor (ver anexos)

La tabla 3 evidencia la magnitud de la utilidad de la resistencia civil en cuanto a la defensa del territorio, podemos observar que el 94% de los encuestados consideran que la práctica de la resistencia contribuye, de una u otra forma, en la defensa del territorio. Según Tolosa (2003) las relaciones de poder, interés y posturas ideológicas, en términos de resistencia son

utilizado desde sectores gubernamentales y el Estado para evidenciar acciones de grupos sociales frente a los actores armados ilegales con el objetivo de promover y justificar propuestas de defensa territorial. Con esto queremos decir que la identificación de prácticas y, sobre todo, el reconocimiento de la efectividad de estas por parte de los habitantes de Jambaló, les permite diseñar oportunamente dinámicas de protección frente a los actores armados que hay en su territorio.

Por otro lado, existe un 6% de los habitantes que considera que la práctica de resistencia civil no es del todo un mecanismo de defensa eficiente, lo que provoca que exista una cierta percepción de autonomía limitada dentro del territorio, evidenciado que para cierta parte de la población la resistencia civil no es el único o el método más eficiente para controlar el territorio de actores armados.



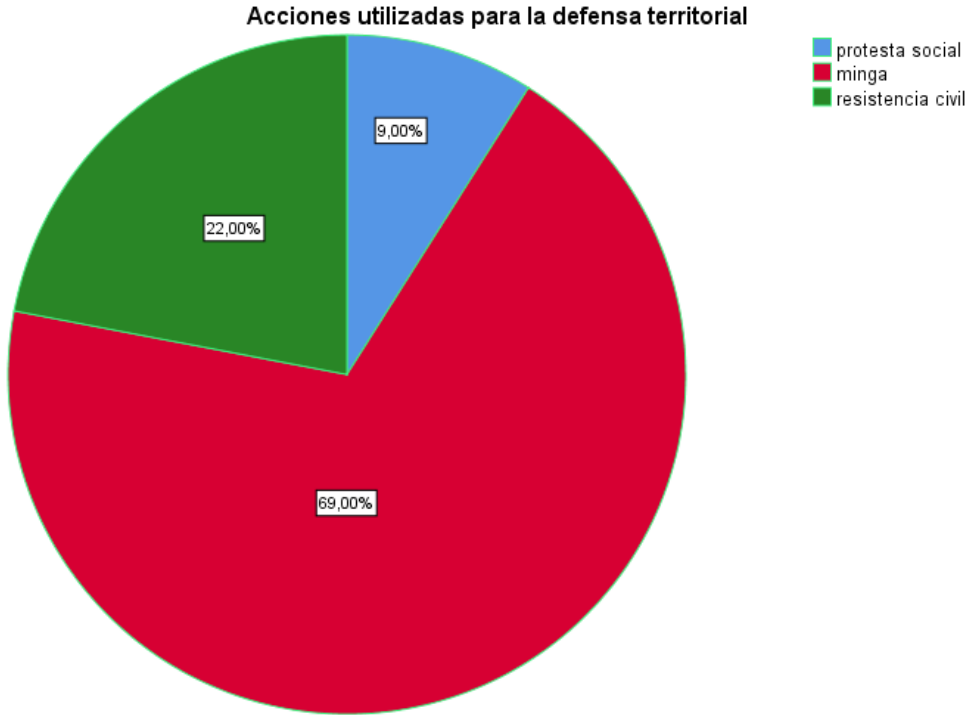
Fuente: Encuesta realizada por el autor (ver anexos)

En la gráfica 1 presentamos la percepción de los habitantes de Jambaló sobre la transformación de las dinámicas de protección en el territorio. Los datos dan cuenta que el 96% de los encuestados consideran que la resistencia civil ha transformado las dinámicas de protección. Tal como lo plantea Tolosa (2003), los integrantes Nasa han hecho de la confrontación y del diálogo un comportamiento de resistencia en la cotidianidad de la comunidad.

Esta gráfica también nos demuestra que la resistencia civil como método de participación se ha convertido en parte de los recursos para brindar seguridad en el territorio, especialmente en el pueblo nasa que se encuentra en este municipio. La resistencia civil practicada en estos pueblos se ha convertido en ejercicios de la cotidianidad.

Con estos dos análisis cuantitativos demostramos que el autorreconocimiento permite fortalecer los procesos de resistencia, pues al hacer parte de las practicas cotidianas y de la asimilación social de estos ejercicios, el pueblo Nasa ha tejido una red de protección con base prácticas culturales, organizativas y de resistencia frente a la inmersión de actores armados en el territorio.

Acciones utilizadas para la defensa territorial.



Fuente: Encuesta realizada por el autor (ver anexos)

La gráfica 2 muestra las acciones más utilizadas de resistencia civil del pueblo Nasa de Jambaló. Estos resultados obtenidos evidencian que el 69% de las personas encuestadas creen que la acción más recurrente para el control territorial es la Minga Humanitaria. Cuando mencionamos el concepto de Minga nos referimos principalmente a las formas de trabajo comunitario de los procesos de recuperación de identidad cultural. También, creemos que es un proceso de transformación colectivo que es motivado por el interés de lograr una mejor calidad de vida de la población que ejerce esta práctica. Por esa razón, las mingas humanitarias son acciones colectivas que tienen por objetivo plantear y evidenciar exigencias urgentes encaminadas a detener procesos y proyectos que amenazan la supervivencia y la seguridad de los pueblos indígenas, además, pretenden establecer instancias y mecanismos de articulación con otros procesos populares para fortalecer la resistencia y construir alternativas para enfrentar el conflicto armado en la región. Como lo mencionamos anteriormente, este tipo de actividades se encuentran en el marco de las acciones reactivas frente al conflicto.

Por otro lado, la OEA -Organización de los Estados Americanos- (2019) nos indica que la protesta social es una forma de acción colectiva dirigida que se utiliza para expresar ideas, disensos, oposiciones, denuncias y reivindicaciones frente a una problemática social o una institución que genera malestares en una comunidad. También, es la reacción a una política o la denuncia de una problemática pública; la afirmación de la identidad, visibilización de la situación y marginalización de un grupo.

La protesta social es un derecho que se encuentra constituido en los Estados adscritos a la OEA. Recordemos que en diferentes países los ciudadanos recurren al uso de mecanismo como reacción ante hechos puntuales de violencia, desalojos, cuestiones laborales u otros eventos que hayan afectado los derechos fundamentales de la ciudadanía. Así mismo, la población en general se organiza y expresa sus demandas de formas distintas y por medios de estrategias que varían de acuerdo con el objetivo de la denuncia. Por esa razón, las protestas pueden ser de presión directa, así como, de formas más institucionales y estructuradas, a través de organizaciones formalmente constituidas. No obstante, también es

posible encontrar movilizaciones no institucionales que utilizan la protesta a partir de manifestaciones espontáneas.

Reiteramos, como lo hemos venido haciendo hecho a lo largo de este capítulo, que este tipo de manifestaciones sociales se dan en el marco de las prácticas de resistencia civil del resguardo, estas acciones están en caminadas a contrarrestar la guerra y la pobreza de la comunidad. En ese sentido, los Nasa de Jambaló, en el año de 1986, crearon un Proyecto Global con la misión de mantener los lazos de la comunidad a través de acciones de resistencia que permitan postergar el legado y la historia de su pueblo.

En síntesis, la manifestación social en Colombia se presenta principalmente como una respuesta a las injusticias, a la guerra y hacia la falta de eficacia estatal para contrarrestar la brecha social. Particularmente, las comunidades indígenas no son ajenas a estas discusiones, incluso sus procesos de resistencia civil trascienden a otras latitudes del país. Además, en medio de sus métodos de defensa y denuncia, es claro que persisten las mismas dinámicas de protesta social entre los grupos sociales: paros, asambleas, mingas, bloqueos, marchas, entre otras más. No obstante, a diferencia de los movimientos sociales del país que surgen en su mayoría por coyunturas, las comunidades indígenas sostienen proyectos de largo aliento que se deben entender de forma holística: son de carácter reivindicativo, se unen a procesos nacionales, buscan formar consciencia y gestar unión entre sus miembros mediante la identidad.

Finalmente, la encuesta refleja la legitimidad social que tiene la resistencia civil, también evidenció los mecanismos más conocidos y/o utilizados del resguardo de Jambaló, permitiéndonos reconocer dos elementos fundamentales de la resistencia civil. El primero, las personas pertenecientes al municipio, en su gran mayoría, se sienten respaldados y seguros por estas prácticas de resistencia, lo que nos permite deducir que es este es un método eficiente para contrarrestar la injerencia de la guerra y para controlar el territorio. El segundo, los resultados de la encuesta evidencia la importancia del proyecto de resistencia civil que hay en la comunidad porque los indígenas ejercen diariamente prácticas propias de resistencia lo que produce una apropiación global.

CAPÍTULO 3. El autorreconocimiento como un método de defensa territorial

El presente capítulo tiene como objetivo explicar la función que cumple la resistencia civil como método de control territorial. Para lograr nuestro objetivo, decidimos presentar la percepción social de autorreconocimiento de los indígenas Nasa del resguardo de Jambaló como un elemento clave para el control territorial. Este análisis será complementado con la relación entre identidad colectiva como método de defensa del territorio. Por lo tanto, este capítulo se divide en dos apartados. Inicialmente, profundizaremos entre la relación de identidad y resistencia civil, como elementos que se unen para la defensa y preservación comunitaria del territorio. Después, en el segundo apartado, presentaremos los resultados de la percepción social de resistencia civil como un ejercicio que influye en el control territorial.

La identidad es un concepto polisémico que dependen del autorreconocimiento individual o colectivo en aras de establecer un elemento de distinción de otro grupo social o individuo. No es de nuestro interés abarcar los diferentes debates que oscilan alrededor de este concepto, pero si es nuestra intención presentar la relación que existe entre la identidad y la resistencia civil, en esa unión nacen distintos métodos de defensa, autocuidado y preservación de las comunidades indígenas. Por lo tanto, intentamos subrayar que las expresiones de resistencia civil pueden adoptar muchas formas y tener distintas connotaciones. La caracterización que hemos realizado en esta investigación sobre la resistencia civil procura resaltar sus expresiones, métodos y dinámicas como ejercicios que se encuentran dotados de un fuerte sentido de pertenencia por la defensa no violenta del territorio indígena, especialmente de la comunidad Nasa de Jambaló, pues creen que las acciones reaccionarias no violentas frente a los actores armados son mecanismos exitosos para la transformación que desean lograr.

Torres (2009) señala que la identidad es algo constitutivo que poseen los seres humanos, que orienta nuestra razón de ser como individuos y como integrantes de una sociedad. Esta autora también sostiene que los seres humanos nos formamos como personas sociales, en la medida

en la que interactuamos y somos reconocidos en proceso de relaciones sociales de alteridad. Torres, también afirma que cada cultura y sociedad tiene un modo original de ser y no existen modelos universales perfectos de sociedades, ni parámetros y paradigmas unívocos que definan o indiquen a través de un canon qué identidades son más valiosas y aceptadas en relación con alguna que se estipule como perfecta o modelo a seguir. Esta idea surge de la crítica a los teóricos modernos, quienes pretendieron, incluso pretende seguir haciéndolo, homogeneizar a las diferentes sociedades. Al buscar explicar las dinámicas comportamentales y culturales mediante patrones comunes, deja de lado el devenir histórico de cada grupo social, desconociendo sus particularidades en relación y contraposición con otros grupos en situaciones similares, pero no iguales.

La argumentación de Torres nos permite reflexionar sobre las características de la identidad indígena, ya que su identidad también se encuentra en el espacio y el tiempo sagrado. La historia de los pueblos originarios está profundamente ligada a la historia de sus deidades y el proceso de apropiación de su espacio de creación y desarrollo como seres humanos. Velasco (1992) llama a esta noción identidad étnica que surge de la cohesión social con el tiempo, el territorio y las deidades. Este autor cree que el espacio en la tradición indígena es dinámico, revela una dimensión de múltiples relaciones jerárquicas que se encuentran física, social y simbólicamente al interior de la comunidad para establecer con el resto de la sociedad una posición de igualdad mediante el respeto por su territorio y la autonomía. La identidad también es un sentimiento de arraigo que difícilmente se puede separar del territorio, pues este representa la cercanía con sus parientes, los antepasados y, sobre todo, un vínculo con las deidades protectoras de su comunidad.

Una de las características de identidad más importantes para las comunidades indígenas es la percepción del mundo llamada cosmovisión. Esta noción determina la concepción de tiempo y espacio, ligada a las actividades alimenticias y a las maneras de sentir y percibir el territorio, la cosmovisión hace parte de la vida cotidiana de los pueblos originarios, ya que esta perspectiva del mundo se presenta en la relación de las comunidades indígenas con la naturaleza. Para Correa, Cruz y Fernández (2018) la cosmovisión tiene un sentido amplio que corresponde a la forma de vivir y ver el mundo tanto interiormente como exteriormente, en el caso de las comunidades indígenas, esta idea se encuentra en la subjetividad de cada

pueblo. De ese modo, la mirada y el sentir del mundo místico, legitima el pensamiento y la esencia del indígena Nasa, correlativo a la espiritualidad en dimensiones anímicas que subyace entre el ser humano y la tierra.

Estos autores sostienen que la relación de la tierra y el territorio se concibe como el espacio de vida, en donde habitan los seres vivos y los espíritus inmateriales, el territorio es para los Nasa la Gran Casa que cobija a todos los que conviven dentro de ella. Para los indígenas Nasa del resguardo de Jambaló, el territorio está construido en la forma del rombo que integra la identidad en cada uno de sus lados; en esta perspectiva de territorio se convierte en un espacio sagrado, ya que para el Nasa la madre tierra es quien provee el alimento y la vida (Correa Nache, Cruz Cerón, & Fernández Girón, 2018).

La perspectiva de territorio occidental contempla a la tierra como un bien productivo que genera un ingreso a través de la explotación (minería, ganadería, función agrícola, entre otros); también representa un sitio para la construcción de la sociedad (visión de espacio urbano). Contrario a estas nociones de territorio, para las comunidades indígenas, la tierra representa no solo un lugar de productividad sino un territorio que define la identidad de su sociedad. Por esta razón, Choque (2017), cree que esta visión de territorio se encuentra distante con la idea capitalista de propiedad individual, pues la comunidad Nasa concibe el territorio como un todo de origen colectivo.

López (2020) argumenta que existen tres tipos de identidades: individual, social y colectiva, las tres se complementan entre sí, sin dejar de ser diferenciables entre cada una de ellas. Este autor menciona que al estudiar las comunidades étnicas debemos abordar principalmente el concepto de identidad colectiva. Las identidades colectivas son aquellas que expresan un sentido compartido de lo “propio”, es una idea casi metafísica del “ser-nosotros”, que se describe como un sentimiento de unidad e igualdad. Este autor sostiene que existen dos grandes rasgos teóricos de las identidades colectivas: la convergencia y la construcción identitaria. El proceso de convergencia identitaria consiste en la reunión de identidades individuales que se reconocen entre sí, dado que estas ya se corresponden unas con otras. Esta búsqueda sucede cuando los individuos buscan activamente colectividades con prácticas y perspectivas similares a las propias, lo que les permite la expresión de su ser. Por otro lado, el proceso de construcción identitaria corresponde a la exploración de las identidades

personales y colectivas que antes no se correspondían, este proceso puede tener varios matices, pues las identidades que terminan reuniéndose pueden empezar como diametralmente diferentes o pueden estar relativamente cercanas antes de que surtan los procesos necesarios para su alineación. En ese sentido, la convergencia de identidades puede tener diferentes consecuencias, desde la transformación radical del ser hasta la reorganización jerárquica de las identidades con intenciones de producir movimientos sociales.

Uno de los rasgos distintivos de estas identidades colectivas es su tendencia a estar asociada a otros grupos heterogéneos que se encuentran en el marco de una contienda política, es decir, las identidades colectivas se adhieren en su mayoría con mucha facilidad a los movimientos sociales que sostengan ideas e interés comunes (Rico et al., 2017). Por eso es frecuente la unión del movimiento indígena nacional a través de métodos de resistencia civil como mingas, bloqueos y protección de la protesta social. No obstante, el movimiento indígena recurre mayormente a estrategias de resistencia civil de forma local, Rosero (Universidad Nacional de Colombia, 2003) las llama luchas invisibles. Estas acciones están ligadas a las experiencias que se realizan en la localidad, estas luchas invisibles se llevan a cabo por distintas comunidades y organizaciones en temas aparentemente tan disímiles como la seguridad alimentaria, la recuperación de semillas y la protección de los conocimientos tradicionales, la lucha contra los transgénicos y la agricultura sustentada en los agroquímicos, el avance de los monocultivos, la participación democrática comunitaria, la consulta previa, los megaproyectos y la explotación insostenible de los recursos naturales. Muchos de estos temas hacen parte de la agente de los movimientos sociales que en Colombia se resisten a los vejámenes de la globalización.

Por lo tanto, las luchas invisibles son sinónimos de resistencia, asociado al derecho de las comunidades a su propia cultura y a sus formas de identidad, sus nociones propias de desarrollo en el marco de las cuales realizan sus proyectos comunitarios y planes de vida, su capacidad de autodeterminarse y ser agentes de su propio destino, fortaleciendo sus propias organizaciones de autoridades tradicionales (Universidad Nacional de Colombia, 2003).

En síntesis, podemos afirmar que es evidente que la construcción de identidad en las comunidades indígenas tiene dos elementos constitutivos: es fundamental la consolidación

de una identidad étnica, la cual es heredada a través de las autoridades tradicionales. En el caso de la comunidad Nasa de Jambaló, los elementos que constituyen dicha identidad son las expresiones y representaciones de deidades territoriales; la reciprocidad en cuanto a la distribución de los bienes producidos por las labores agrícolas; los ejercicios de culturales como las danzas, los rituales, la lengua, la educación, entre otros; la oralidad como fuente de expresión y transmisión de conocimientos; y la apropiación de mecanismos de resistencia civil en su vida cotidiana.

Por otro lado, Podemos afirmar que la identidad colectiva de los indígenas Nasa del resguardo de Jambaló yace en el sentido compartido de la protección territorial que se establece a través de la resistencia civil que transforma constantemente la forma de asociación de los indígenas sin afectar su objetivo común, la defensa del territorio. Con lo anterior queremos ratificar que la identidad colectiva de esta comunidad se desarrolla por la importancia que tiene la resistencia civil en las acciones de protección, prevención y fortalecimiento comunitario tanto en los ejercicios que establecen para contrarrestar el impacto del conflicto armado, así como los mecanismos que desarrollan para fortalecer su economía, cosmovisión y Plan de vida.

3.1 El autorreconocimiento Nasa

En este apartado presentaremos los resultados de la encuesta sobre su auto reconocimiento como población indígena. Conceptualmente nos apoyamos en la noción planteada por Choque (2017) quien concibe el autorreconocimiento como un criterio principal de acercamiento a las comunidades indígenas. Ese autorreconocimiento se define a partir de variables como ascendencia, costumbres, membresía, características físicas, entre otros aspectos. Definiendo así su grado de pertenencia con cualquier comunidad. Bajo este criterio las personas y comunidades determinan ellas mismas su propia identidad, la cual es construida en relación con la percepción de los “otros” y considerando las categorías territoriales y socioeconómicas.

Tabla No. 4. Autorreconocimiento.

Se entiende por autoreconocimiento:

Indicadores	Frecuencia	Porcentaje
Identidad	76	76,0
Sentido de pertenencia hacia un grupo o etnia.	9	9,0
Desarrollo personal	2	2,0
relación con un territorio y unas costumbres específicas	13	13,0
Total	100	100,0

Fuente: Encuesta realizada por el autor (ver anexos)

Cuando se les preguntó a los habitantes de Jambaló que entendían por autorreconocimiento, un 76% lo relacionó con la identidad. Esta respuesta señala una relación directa con el desarrollo subjetivo y colectivo mediante unas características de convergencia. Así mismo, un 13% de los encuestados señalaron que el autorreconocimiento corresponde a las costumbres heredadas y a la relación que tienen con el territorio en donde nacieron; mientras que un 9% definieron el autorreconocimiento como parte de su sentido de pertenencia hacia su propia etnia. No olvidemos que la identidad étnica está relacionada con la cosmovisión del mundo y con el arraigo a la tierra de crianza, en el caso de la comunidad Nasa de Jambaló, la madre tierra es la Gran Casa.

Tabla No. 5. Tabla cruzada de resistencia civil y autorreconocimiento de las personas como indígenas

resistencia civil	Autorreconocimiento de las personas como indígenas					
	Ha aumentado	Ha disminuido	Se mantiene	Se ha fortalecido	sin información	Total
Nada alentadoras	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
poco alentadoras	1,00%	2,00%	0,00%	1,00%	0,00%	4,00%
medianamente satisfactorias	15,00%	1,00%	4,00%	12,00%	1,00%	33,00%
Totalmente satisfactorias	42,00%	5,00%	8,00%	7,00%	0,00%	62,00%
Total	59,00%	8,00%	12,00%	20,00%	1,00%	100,00%

Fuente: Encuesta realizada por el autor (ver anexos)

La tabla 5 tiene como objetivo establecer la relación entre el aumento del autorreconocimiento de los indígenas de Jambaló y la satisfacción de los resultados de la resistencia civil. De acuerdo con los resultados, podemos evidenciar que el 57% de las personas considera que con la existencia de autorreconocimiento ya sea en aumento, fortalecido o constante los resultados de ejercer la resistencia civil, son totalmente satisfactorios.

De esto podemos analizar dos elementos. El primero es fundamentalmente la identidad, recordemos que para Olson (1985) las personas con intereses comunes tratan, en el mayor de los casos, de agruparse para favorecer estos intereses, es por esto por lo que, entre mayor aumento de autorreconocimiento más eficaces y amplias serán las manifestaciones de resistencia civil en cuanto a la protección de sus territorios.

Por otro lado, existen tan solo un 5% de los encuestados que consideran que el autorreconocimiento de las personas como indígenas ha disminuido, pero la satisfacción con los resultados de la resistencia civil ha aumentado. Esta relación inversa se puede observar en las percepciones de este 5% demuestran que factores sociales y económicos como el desplazamiento de indígenas a las ciudades, el cambio de educación y de costumbres es posible considerar que el autorreconocimiento de las personas como indígenas ha

disminuido. Sin embargo, para ellos lo anterior no significa una baja en la satisfacción, por el contrario, esta disminución en el autorreconocimiento no impide que hayan alzas en la satisfacción, para los encuestado han existido bajas en el autorreconocimiento, aun cuando, aquellos que sí se reconocen como indígenas ejercen control a través de la resistencia civil como mecanismo de protección del territorio.

Tabla 6.

Tabla cruzada autorreconocimiento y Grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio

Autorreconocimiento		Grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio					Total
		nada	poco	mediana mente	mucho	totalmente	
Identidad	% del total	1,00%	1,00%	12,00%	50,00%	12,00%	76,00%
Sentido de pertenencia hacia un grupo o etnia	% del total	1,00%	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	9,00%
Desarrollo personal	% del total	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%
relación con un territorio y unas costumbres específicas	% del total	0,00%	1,00%	3,00%	7,00%	2,00%	13,00%
Total	% del total	2,00%	2,00%	15,00%	61,00%	20,00%	100,00%

Fuente: Encuesta realizada por el autor (ver anexos)

La tabla 6 tiene como objetivo describir la relación que existe entre la percepción del autorreconocimiento y el grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio. De los resultados obtenido evidenciamos que la relación del autorreconocimiento con una identidad permite que exista una mayor transformación en la protección del territorio, la cual permite la apropiación del control territorial.

En cuanto a las personas que perciben el autorreconocimiento como identidad, aseguran que la práctica de resistencia civil ha transformado en mayor medida los ejercicios de protección territorial. En esta tabla cruzada encontramos que el 50% de las personas encuestadas reconocen que la resistencia civil transforma la protección del territorio. A ese dato debemos sumarle el 7% de los encuestados relaciona el autorreconocimiento con el arraigo territorial

y con las prácticas cotidianas de sus costumbres. Estos datos nos permiten argumentar que la identidad Nasa está directamente relacionada con los ejercicios que se practican en el cuidado de la tierra tanto para su desarrollo productivo como de agentes externos que afectan su permanencia.

Para Castillo, Guzmán, Hernández y Urrea (2010), el autorreconocimiento étnico conlleva al desarrollo de acciones colectivas que están motivadas por los lazos de identidad que se han consolidado a lo largo de la historia de la comunidad. Para un indígena que se identifique como Nasa en el resguardo de Jambaló debe comprometerse en la búsqueda y participación en los mecanismos que permiten la defensa y protección de su territorio. Estos mecanismos corresponden esencialmente a las manifestaciones colectivas de la resistencia civil: asambleas, planes de vida, guardia indígena, entre otro más.

Como lo planteamos en la primera parte de este capítulo, un 7% de los encuestados relaciona el autorreconocimiento con la identidad y su consolidación alrededor de unas características comunes: territorio, cultura, rasgos, entre otros. Por lo tanto, así sea en menor medida, reconocen que tener una identidad étnica los conlleva a adherirse a las acciones colectivas de defensa territorial.

Tabla No. 7. Tabla cruzada del grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio y defensa del territorio

Grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio	Defensa territorio				
	poco	medianamente	mucho	totalmente	Total
Nada	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Poco	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%
Medianamente	2,00%	9,00%	2,00%	2,00%	15,00%
Mucho	1,00%	4,00%	54,00%	2,00%	61,00%
Totalmente	1,00%	3,00%	4,00%	12,00%	20,00%
Total	6,00%	16,00%	61,00%	17,00%	100,00%

Fuente: Encuesta realizada por el autor (ver anexos)

En la tabla 7 observamos la relación que surge entre el grado de transformación de las dinámicas de protección propiciadas por la resistencia civil y el grado de defensa del territorio existente en el resguardo.

Con los resultados obtenidos, evidenciamos que un 54% de los encuestados afirman que a mayor defensa del territorio es mayor el grado de transformación que permite la resistencia civil al momento de proteger el territorio. Castillo, Guzmán, Hernández y Urrea (2010), afirman que los mecanismos de participación política y los movimientos sociales posibilitan la oposición a actores poderosos (e incluso violentos). Con este argumento reafirmamos que la resistencia civil es un mecanismo de participación política que le permite a los indígenas Nasa construir ejercicios eficientes para contrarrestar el accionar armado en su territorio. Igualmente, podemos afirmar que el cabildo Nasa de Jambaló existe un alto grado de resistencia civil como un mecanismo de defensa que precisa un alto grado de control territorial. Esto se debe a los innumerables y creativos esfuerzos realizados por esta comunidad desde el año de 1987, cuando decidieron construir conjuntamente un Plan Global de resistencia civil para la protección territorial y supervivencia frente a los diferentes actores del conflicto armado.

Tabla cruzada de acciones utilizadas para la defensa territorial y el grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio

Acciones utilizadas para la defensa territorial	Grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio					
	nada	poco	medianamente	mucho	totalmente	Total
protesta social	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2,00%	9,00%
minga	2,00%	2,00%	11,00%	48,00%	6,00%	69,00%
resistencia civil	0,00%	0,00%	2,00%	8,00%	12,00%	22,00%
Total	2,00%	2,00%	15,00%	61,00%	20,00%	100,00%

Fuente: Encuesta realizada por el autor (ver anexos)

En la tabla anterior identificamos la relación que existe entre las acciones que se utilizan para la defensa territorial y el grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio. De los resultados obtenidos podemos observar que un 65% de los encuestados – medianamente (11%), mucho (48%) y totalmente (6%) - consideran a la minga; así como, un 22% – medianamente (2%), mucho (8%) y totalmente (12%) - definen la resistencia civil como las dos acciones colectivas más utilizadas para la protección territorial. Esos datos nos permiten afirmar que estas estrategias son las más comunes, pero, no podemos olvidar que también existen otras prácticas de la resistencia civil como las luchas invisibles las cuales corresponden a métodos locales, como son, la soberanía alimentaria, asambleas, recuperación de tierras, entre otros.

Aunque en menor medida se encuentre la protesta social (9%) como un mecanismo de protección territorial, esto no significa, que sea una acción colectiva desechada para el movimiento indígena. Durante los últimos años, en especial durante el paro agrario (2013) y los Paros Cívicos, hemos podido observar que las comunidades indígenas recurren a estas acciones para apoyar la movilización social que se presenta en ciudades como Cali o Popayán. Organizaciones como el CRIC lideran huelgas, paros, acciones directas y bloqueos para denunciar la persecución por parte de actores armados a miembros de su organización. Estos mecanismos en algunos casos son realizados en última instancia por la contundencia de sus mensajes y por la represión estatal al momento de llevarlos a cabo.

De acuerdo a los resultados obtenidos sostenemos que el autorreconocimiento permite fortalecer los procesos de resistencia civil. También, identificamos que existe una interrelación entre las variables, esto quiero decir que, así como, el autorreconocimiento permite fortalecer los procesos de resistencia civil; también, los procesos de resistencia civil, a su vez, fortalecen el autorreconocimiento de las comunidades indígenas.

Para finalizar este apartado presentaremos dos reflexiones. La primera, el autorreconocimiento de los indígenas Nasa del resguardo de Jambaló consiste en la unión de dos perspectivas, una es la consolidación de la identidad subjetiva y, la otra, la consolidación del arraigo del resguardo. Lo que nos conlleva a concluir que la construcción de identidad particular es una conglomeración de experiencias que surgen en la relación con la comunidad Nasa y con la relación con la tierra. No olvidemos que la costumbres son heredadas por la

familia y las autoridades tradicionales, las cuales están direccionadas a la protección del territorio.

La segunda reflexión, la resistencia civil se practica junto con la identidad colectiva. Este vínculo es evidente en los métodos de defensa territorial tales como la guardia indígena, la minga, la recuperación de tierra y, sobre todo, las acciones reaccionarias frente al conflicto. Los indígenas Nasa de Jambaló tienen un gran sentido de pertinencia por su territorio, lo que conlleva a que realicen prácticas de resistencia.

CONCLUSIONES

A pesar de que exista una normativa internacional para garantizar el derecho de autonomía de los pueblos indígenas en el mundo, la ineficaz presencia y la inmersión de intereses de actores externos ha provocado que la cosmovisión de los pueblos originarios se vea especialmente amenazada. Colombia es un país que avala legalmente la protección de sus grupos aborígenes, no obstante, el desinterés y el constante olvido en que se encuentran les obliga a tomar medidas de defensa y protección frente a diferentes tipos de riesgos.

El Gobierno Nacional procura adaptarse a las exigencias económicas internacionales, apropiándose de los territorios indígenas y legislando en contra de sus derechos constitucionales, de igual forma, es evidente la venta de terrenos sagrados para la explotación de la tierra sin tener tan siquiera en la mayoría de los casos, la opinión de las comunidades. El gobierno también ha actuado en complicidad con movimientos armados al momento de expulsar a las comunidades indígenas de los territorios, acabando con sus cultivos de subsistencia y todo tipo de economía local que les permita desarrollar sus actividades diarias. Como si fuera poco, el gobierno históricamente no ha resuelto las condiciones desiguales y de pobreza que se sostienen en regiones como el Departamento del Cauca.

Como efecto tenemos una constante violación de derechos humanos, la desterritorialización de las comunidades, desplazamientos forzados masivos, la pérdida de autonomía, la persecución política y la incapacidad de establecer un modelo productivo que solvete las carencias de desigualdad históricas del departamento del Cauca. Creemos que la afectación contra las comunidades étnicas en la región caucana es sostenida, con poco interés institucional de modificar los comportamientos de la violencia y sin la capacidad de llegar a acuerdos que satisfagan las exigencias de los pueblos originarios. Como lo evidenciamos en el primer capítulo, el malestar étnico se debe a que se encuentran en medio de un fuego cruzado y al despojo territorial histórico.

Las consecuencias de estos problemas a causado que campesinos, indígenas y afrodescendientes se sumerjan al mercado ilícito o engruesen las filas de los movimientos armados de la región. No obstante, en medio del caos es evidente los esfuerzos organizativos

indígena que desarrollan ejercicios de resistencia civil para contrarrestar los efectos de la violencia y para controlar sus territorios.

El caso especial de Jambaló nos motivó a presentar literatura acerca de los mecanismos de resistencia civil de comunidades indígenas en todo el continente, en el estado del arte se ilustraron dieciocho investigaciones académicas que abordaron las prácticas de resistencia civil frente a las problemáticas acrecentadas por la violencia territorial. Los textos que presentamos estudian las difíciles situaciones que viven los grupos indígenas de países como México, Argentina, Perú y Chile, sin dejar de lado el caso colombiano, especialmente el de la comunidad del norte del Cauca. Esto lo realizamos mediante dos enfoques: investigaciones que profundizaran en las nociones indígenas de territorialidad, así como, textos que se acercan a manifestaciones indígenas de autonomía y resistencia civil. En este apartado, evidenciamos los problemas que enfrentan las comunidades indígenas en el territorio, y a su vez, entendimos el papel tan vital que juega la resistencia civil para el control territorial.

En cuanto al marco teórico, nos enfocamos en dos conceptos fundamentales al momento de estudiar los mecanismos de protección de las comunidades indígenas: la resistencia civil y el control territorial. En este apartado presentamos las variedades conceptuales de estas dos nociones, sin embargo, en el capítulo dos y tres priorizamos las convergencias que existen tras las prácticas de resistencia civil y control territorial: las movilizaciones sociales son realizadas por las comunidades indígenas para denunciar una problemática social, recuperar un territorio y atraer el apoyo de otros movimientos sociales, este método es efectivo en la medida que se realiza con la intención de velar por la autonomía y para controlar el territorio de cualquier tipo de agentes externos (en la mayoría de casos de megaproyectos y actores del conflicto armado). Por otro lado, la identidad es un elemento dinamizador para la resistencia civil, pues en el caso de la comunidad Nasa de Jambaló, la identidad representa la relación ancestral del ser humano con la tierra y el territorio al que pertenece, ocasionado que la identidad sea directamente proporcional con el control territorial, es decir, existe una unión estrecha gracias a los esfuerzos de resistencia civil que se realizan para contrarrestar el efecto del conflicto armado y para defender el territorio.

La tesis la dividimos en tres objetivos específicos. Inicialmente caracterizamos el conflicto armado en la región, el cual se encuentra directamente relacionado con la distribución

inequitativa de la tierra, la explotación y expropiación del territorio por parte de mega industrias, la consolidación del mercado ilegal de droga y el protagonismo de actores armados. Después, con el segundo objetivo, estudiamos las acciones colectivas frente a la problemática social que existe principalmente en el Cauca desde la mirada de los indígenas de Nasa del resguardo de Jambaló, valiéndonos principalmente de la percepción social de la resistencia civil que es desarrollada a partir de métodos tradicionales de protesta social como la minga y las movilizaciones. Finalmente, con el tercer objetivo, buscamos develar el carácter primordial de la identidad como un factor determinante para el control territorial, el cual está inspirado en la cosmovisión Nasa de la tierra como la Gran Casa.

Bajo la perspectiva anterior, nuestro argumento central se soporta a partir de las encuestas que posibilitaron conocer de cerca la percepción social sobre la eficacia y los métodos de resistencia civil utilizados por los indígenas Nasa. Mediante las encuestas pudimos identificar que los indígenas del resguardo de Jambaló perciben la resistencia civil como un mecanismo de organización social y planificación colectiva que recoge métodos de la protesta social. Además, se plantea como un método no violento para enfrentarse al conflicto armado y de autonomía territorial.

Con base a lo expuesto en las tablas 3 y los gráficos 1 y 2 del capítulo II sobre el análisis de resultados, podemos decir que se corrobora la hipótesis planteada. Recordemos que nuestro planteamiento inicial fue preguntarnos por ¿De qué manera las comunidades indígenas del municipio de Jambaló utilizan la resistencia civil para ejercer el control territorial ante los actores armados que se mantienen en ese espacio?

En primer lugar, mostramos que para los habitantes de Jambaló la resistencia civil tiene un gran valor de utilidad al momento de defender el territorio. Esto es evidente por la aceptación que tienen las propuestas no violentas de protección y, sobre todo, por la pluralidad de los ejercicios, los cuales tienen un componente de inmersión política bastante significativo. No olvidemos que desde 1987 se lleva a cabo en el resguardo las asambleas del plan de vida del Proyecto Global, un espacio abierto que reúne a los miembros de las comunidades Nasa para discutir acerca de las problemáticas sociales, la reconstrucción constante de los métodos de lucha, en especial las protestas para reclamar el cumplimiento de los derechos colectivos de estas comunidades.

También, indicamos que la resistencia civil, como proceso colectivo, tienen dos características esenciales, la primera, la identidad colectiva, la segunda, la identidad étnica. Conllevando a que la apropiación de la resistencia se plantee en todos los términos posibles, es decir, recordando las luchas invisibles propuestas por el autor Rosero (2003), indicamos que la resistencia abarca los aspectos más cotidianos de la vida de la comunidad, los cuales están profundamente ligados a la autonomía.

Vale la pena hacer un balance de los alcances, limitaciones y errores de nuestra investigación. El modelo propuesto para la recolección de información acerca de los procesos de resistencia civil indígena que usamos, no abarca la totalidad de todos los métodos de resistencia y tampoco los ejercicios de control territorial, en esta investigación se priorizaron las prácticas más tradicionales elegidas por los encuestados. No obstante, esto no quiere decir que sea un esfuerzo insuficiente, por el contrario, lo expuesto hasta ahora arroja grandes apreciaciones académicas y cubre, en cierta medida, un campo de investigación que hasta este momento no se había concretado los ejercicios de resistencia civil de una comunidad tan afligida por el conflicto armado y por la pobreza como lo es el municipio de Jambaló. Por otro lado, consideramos que los posibles errores que puede haber en esta investigación estarán sobre todo relacionados con la realización de entrevistas, puesto que tratar de acceder a información personal como identidad de una comunidad étnica no es una tarea sencilla. Otro error cometido consiste en que se utilizó la categoría de “indígena” en las preguntas, con lo cual, las personas de alguna forma se sintieron aludidas, sin embargo, esto no impidió que se realizara la totalidad de las entrevistas.

Finalmente, existen algunos puntos sobre los cuales la discusión acerca de la temática desarrollada puede ser ampliada. En primer lugar, es necesario explorar y trazar líneas comparativas entre las luchas indígenas llevadas a cabo en el continente, la resistencia civil planteada en México o en Argentina, no es del todo disímil a las prácticas en Colombia, esto no quiere decir que no se conserven las particularidades de cada caso, pero al hacer un estudio ampliado de perspectiva comparativa es posible complementar ideas y experiencias que enriquezcan este tipo de investigaciones. Otro punto que consideramos crucial al momento de estudiar este tipo de procesos es el de las demandas históricas y la forma en cómo estas afectan las perspectivas de resistencia civil. Algunas pistas sobre su relevancia pueden

encontrarse en el hecho de que los movimientos étnicos giran su lucha a partir de las experiencias heredadas de las acciones colectivas, cada comunidad puede tener una exigencia global en común, pero en términos de construcción de identidad y en banderas organizativas, siempre responden a los casos especiales de el pueblo que se pretende reivindicar.

Por último, creemos que este tipo de mecanismos de resistencia civil posibilitan la construcción de paz en las zonas que han sido más afectadas por el conflicto armado, así que planteamos la necesidad de apoyar la conservación y la replica de las experiencias de resistencia de las comunidades indígenas a otros movimientos sociales y otros espacios de discusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta L.E, García O y Dubois, A. (2016). Las capacidades colectivas como un instrumento metodológico para la evaluación del bienestar humano en territorio indígenas del Amazonas colombiano. *Mundo Amazónico*, 1-2, 5-20.

Los territorios indígenas en Colombia: de escenarios de apropiación transnacional a territorialidades alternativas. *Scripta Nova. Revista electronica de geografía y ciencias sociales*, 16, 1-24.

Alvarado, N. (2009). Resistencia amazónica frente a la invasión petrolera en la Curva del Diablo Perú, Bagua 2008-2009.

Avendaño Flores, I. (2010). Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: el sentimiento de pertenencia y las identificaciones territoriales. *Intercambio*, 8, 13–35.

Alcaldía Municipal de Jambaló. (2016). Plan de Desarrollo Municipal de Jambaló “Tejiendo entre todos y todas, el buen vivir comunitario” (2016-2019).<http://www.jambalocauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-vigencia-20162019>

Alcaldía Municipal de Jambaló. (2020). Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023: “Por Un Mercaderes Sostenible”.
<https://drive.google.com/u/0/uc?id=1T3xMKEoR0QLd9R152RCPo6wL0zOMzEIN&export=t=download>

Ballesteros Peluffo, G. L. (2016). Desobediencia civil indígena: El pueblo Nasa y el incidente del Cerro Berlín. *Polis*, 1-16.

Barabas, A. (2014). La territorialidad indígenas en el México contemporáneo. *Chungará (Arica)*, 46, (437-452).

Bravo, P. (2018). La autonomía como eje articulador de la lucha histórica reivindicativa del pueblo mapuche. En P.L y L. García (Ed.), *Movimientos indígenas y autonomías en América Latina* (135-164).

Castañar Pérez J (2011) La desobediencia civil después de la Segunda Guerra Mundial. *Briega*. Recuperado de <https://www.briega.org/es/especial/desobediencia-civil-despues-segunda-guerra-mundial>

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016). *Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Chará Ordóñez , W., & Hernández Casas, V. (2016). Las víctimas del conflicto armado interno en el departamento del Cauca 1985-2015. *Área sociojurídica*, 84-107.

Choque Caseres, D. (2017). La identidad indígena interpretada como una categoría de análisis en los estudios de población. *Enfermería: cuidados humanizados*, 1-28.

CINEP. (2019). CINEP. Obtenido de Base de datos de luchas sociales: <https://www.cinep.org.co/Home2/temas/programa-de-movimientos-sociales-derechos->

humanos-e-interculturalidad/linea-de-movimientos-sociales-tierra-y-territorio/movilizaciones-cinep.html

CINEP; Programa para la Paz. (2016). Tendencias de la movilización social en municipios críticos para el posconflicto. Principales hallazgos. Bogotá.

Cisneros, P. (2007). Gobernanza ambiental y conservación de la naturaleza: un caso de control territorial indígena en el parque nacional Yasuni (tesis de maestría en estudios socioambientales). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.

Colla, J. (2017). La territorialidad campesina indígena y la disputa por el territorio en el Chaco. *Geograficando*, 13, 1-16.

Correa Nache, S., Cruz Cerón, E., & Fernández Girón, S. (2018). Elementos de la identidad cultural Nasa que se han debilitado en los estudiantes de la Sede Principal de la Institución Educativa Técnica Kwe'sx Piya Yat de la vereda El Tablón, municipio de Jambaló Cauca. Obtenido de Repositorio institucional Universidad de Manizales: <https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/3766>

Cruz Rodríguez, E. (2016). El ciclo de protesta 2010-2016 en Colombia. Una explicación. *Jurídicas CUC*, 31-62.

Castaño Canoas, M. (2015). La planeación en el municipio y resguardo de Jambaló (Colombia). *Campos En Ciencias Sociales*, 3(2), 239-260. <https://doi.org/10.15332/s2339-3688.2015.0002.06>

Cogua Gómez, L. (2017.). Análisis de los procesos comunitarios relacionados con la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria de la comunidad indígena Nasa de la vereda Solapa, municipio de Jambaló, departamento del Cauca. [Trabajo de Grado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá]. Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59827>

Correa, S., Cruz, N., & Fernández, S. (2018). Elementos de la identidad cultural Nasa que se han debilitado en los estudiantes de la Sede Principal de la Institución Educativa Técnica Kwe'sx Piya Yat de la vereda El Tablón, municipio de Jambaló Cauca. https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3766/Correa_Nache_Sergio_Alejandro_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Defensoría del Pueblo. (2015). La minería sin control. un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos. Bogotá.

Defensoría del Pueblo. (2018). Situación de los derechos humanos en el departamento del Cauca. Informe ejecutivo. Bogotá.

Delgado, E. H. (2006). La resistencia civil de los indígenas del Cauca. *Papel Político*, 11(1), 177-220.

Duarte, C. (2013). Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca. Cali, editorial de la Pontificia Universidad Javeriana - Centro de Estudios Interculturales.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2019). Población Indígena de Colombia: Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-eticos/informacion-tecnica>

Escobar Díaz, D. (2004). Resistencia civil y democracia en Colombia en el umbral del siglo XXI. CINEP.

Espinosa Moreno, F. (12 de julio de 2012). Corporación Nuevo Arcoiris. Obtenido de <https://www.arcoiris.com.co/2012/07/las-razones-detras-del-conflicto-en-el-cauca/>

Fundación Ideas para la Paz. (2016). Dinámicas del conflicto armado en el sur del Valle y Norte del Cauca y su impacto humanitario. Popayán: Agencia para el Desarrollo Internacional.

González, C. (2010). Naturaleza política y acciones colectivas de los movimientos sociales, un emblemático caso de movilización indígena. *Universitas humanística*, 79-100.

Gutiérrez, S, J. y Moya, C. (2018). Pueblos indígenas y Estado costarricense: disputa de derechos y control territorial. *Revista Rupturas*, 8, 169-192.

Guzmán Barney, Á., & Rodríguez Pizarro, A. (2014). reconfiguración de los órdenes locales y conflicto armado: el caso de tres municipios del Norte del Cauca (1990-2010). *Sociedad y Economía*, 155-184.

Indepaz. (2019). Boletín: alerta humanitaria en el Cauca. Bogotá.

Internacionales, C. de E. P. e. (2006). Acción política no violenta, una opción constructiva para enfrentar el conflicto (pp. 1–11). Universidad del Rosario.

Ipia, E. (2011). Características y elementos centrales de la administración y gestión propias del pueblo nasa resguardo municipio Jambaló Cauca–Colombia [Tesis de Maestría, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN Colombia y Universidad Amawtay Wasi]. Repositorio Institucional de la Universidad Uraccan. <http://repositorio.uraccan.edu.ni/707/>

La Liga Contra el Silencio. (17 de 12 de 2019). Cerosetenta. Obtenido de <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/la-lucha-por-el-control-territorial-que-desangra-al-cauca/>

Larson, F. y Soto, A. (2012). Territorialidad y gobernanza. Tejiendo retos en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. Managua- Nicaragua, editorial del instituto Nitlapan de las Universidad Centroamericana.

Lerma, E. (2016). La autonomía yaqui y su lucha por el agua. Los retos de una comunidad frente a una consulta cuestionable. En P.L y L. García (Ed.), *Pueblos originarios en lucha por las Autonomías. Experiencias y desafíos en América Latina* (pp. 89-112)

Levalle, S. (2018). Resistencia a la violencia política y defensa de la territorialidad comunitaria en el departamento del Cauca, Colombia (1971-2012). *Sociedad y Economía*, 34, 251–266. <https://doi.org/10.25100/sye.v0i34.6483>

Llano Quintero, A. M. (2010). Centros de etnoeducación para el fortalecimiento del plan de vida Nasa : tejiendo resistencia desde la identidad. 491–518.

Llano, A. M (2010). Centros de etnoeducación para el fortalecimiento del plan de vida Nasa: tejiendo resistencia desde la identidad. 491-518.

Llanos-Hernández, L. (2010). Concepto de territorio y las investigaciones en las ciencias sociales. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 7(3), 207–220. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722010000300001

Luque Revuelto, R. M. (2014). Los desplazamientos humanos forzados recientes en el Cauca (Colombia): características e impactos sociales y espaciales. *Investigaciones geográficas*, 181-200.

López Velásquez, J. C. (2020). RESISTENCIA COMUNITARIA EN EL RÍO YURUMANGUÍ : La construcción de una nueva Identidad Colectiva para la defensa de la vida. Caso del Consejo Comunitario de la cuenca del Río Yurumanguí, distrito especial de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia 1990-201. Pontificia Universidad Javeriana Cali.

López, P.C. (2016). Disputa por la autonomía indígena y la plurinacionalidad en Bolivia: Resistencias comunitarias al neoextractivismo y al Estado Nación. En P.L y L. García (Ed.), *Pueblos originarios en lucha por las Autonomías. Experiencias y desafíos en América Latina* (pp.113-138).

Mancur, O. (1985). Una teoría de los grupos y las organizaciones. En *La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la Teoría de Grupos* (págs. 11-75). Grupo Noriega.

Martinez Bernal, D. R. (2016). La resistencia y la resistencia civil: la importancia de la teoría noviolenta. *Papel Político*, 21(2), 343–371. <https://doi.org/10.11144/javeriana.papo21-2.rrci>

Martí i Puig, S. (2013). Universidad de Salamanca. Obtenido de <https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Losmovimientossociales.pdf>

Medófilo, M. (noviembre de 2019). Razón Pública. Obtenido de <https://razonpublica.com/la-larga-historia-de-violencia-y-resistencia-en-el-cauca/>

Moreno, F. E. (Septiembre-noviembre de 2012). "La histórica lucha por la paz del movimiento indígena caucano". *Cien días*, pág. 4.

Muñoz, M. J (2017). Movimientos indígenas de defensa ambiental y Vivir Bien en un contexto de condición de colonialidad en torno a la naturaleza y al género. En J.R y M.CH (Ed.), *Sustentabilidad desde abajo. Luchas desde el género y la etnicidad* (pp.93-122).

Márquez, N. (2018, septiembre 07). Resistencia pacífica: este es el poder del bastón de mando en el Cauca. *Pacifista*. <https://pacifista.tv/notas/resistencia-pacifica-este-es-el-poder-del-baston-de-mando-en-el-cauca/>

Oficina Asesora de Planeación. (2020). Perfil departamento del Cauca. Popayán: Gobernación del Cauca.

Organización de los Estados Americanos. (2019). *Protest and human rights*. Washington D.C: Open Society Foundatios.

- Osorio, F. E. (2001). Entre la supervivencia y la resistencia: Acciones colectivas de población rural en medio del conflicto armado colombiano. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 47, 55–80.
- Paredes Mosquera, H., Segura Sandoval, M., Guachetá Torres, J., & Orozco Ordoñez, M. (2016). Derecho y paz en el departamento del Cauca frente al acuerdo de gobierno y FARC-EP. *Jurídicas CUC*, 63-86.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alianzas Territoriales para la Paz. (2014). Cauca: análisis de la conflictividades y construcción de paz.
- Procuraduría General de la Nación y Red Colombiana de Organizaciones Comunitarias Ambientalmente Amigables. (s.f). Pueblo Indígena Nasa. Caracterización. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Caracterizacion%20%20NASA%20YUWE.pdf>
- Quiñones Páez, J. (2008). Sobre el concepto de resistencia civil en ciencia política. *Ciencia Política*, 3(6), 150–176. <https://doi.org/10.15446/cp.v3n6.17027>
- Rico, D., Alzate, M., & Sabucedo, J. M. (2017). El papel de la identidad, la eficacia y las emociones positivas en las acciones colectivas de resistencia pacífica en contextos violentos. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 49(1), 28–35. <https://doi.org/10.1016/j.rlp.2015.09.013>
- Rincón Vega, M. C. (1 de noviembre de 2019). CNN. Obtenido de <https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/01/cauca-masacres-indigenas-colombia-violencia-conflicto-armado/>
- Rodríguez, D. (2010). Territorio y territorialidad Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. *Unipluriversidad*, 10(3), 1–12. <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/9582/8822>
- Rudqvist, A y Anrup, R. (2013). Resistencia comunitaria en Colombia. Los cabildos caucanos y su guardia indígena. *Papel Político*, 18, 515-548.
- Sanabria, C. E. (2016). Dinámicas del conflicto armado colombiano en el Departamento del Cauca. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Sandoval Sarria, L. (2019). Características socioeconómicas y ambientales de la población caficultora del resguardo de Jambaló y el municipio de Piendamó en el departamento del Cauca. Cali: Universidad del Valle.
- Silva valos, H. (2014). Transportistas Y Lavadores: El Control Territorial Como Argumento De Poder En El Salvador. *SSRN Electronic Journal*, 6, 1–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2512306>
- Spíndola, O. (2016). Espacio, territorio y territorialidad: una aproximación teórica a la frontera. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 61(228), 27–55. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84995705638&doi=10.1016%2FS0185-1918%2816%29300393&partnerID=40&md5=3f16f41ce177a6a312ec7c4b5dfa6d0d>

Suárez Morales, H., & Henado Arcila, D. (2002). El desplazamiento forzado indígena en Colombia - La ley del silencio y la tristeza. Analysis. Obtenido de <https://reliefweb.int/report/colombia/el-desplazamiento-forzado-ind%C3%ADgena-en-colombia-la-ley-del-silencio-y-la-tristeza#:~:text=Resumen%3A,de%20desplazamiento%20forzado%20en%20Colombia>.

Torres, J. (2009). La resistencia civil y la búsqueda de identidades sociales y culturales en las zonas de fronteras en medio del conflicto armado. Bogotá: Universidad de la Salle.

Torres-salinas, R., García, G. A., Henríquez, N. C., Zambrano-bigiarini, M., Costa, T., & Bolin, B. (2016). Desarrollo forestal, escasez hídrica, y la protesta social mapuche en la justicia ambiental en Chile. *Ambiente y Sociedad*, XIX(1), 121–145.

Ulloa, A. (2010). Reconfiguraciones conceptuales, políticas y territoriales en las demandas de autonomía de los pueblos indígenas en Colombia. *Tabula Rasa*, 13, 73-92.

Ulloa, A. (2012). Los territorios indígenas en Colombia: de escenarios de apropiación transnacional a territorialidades alternativas. *Scripta Nova. Revista Electronica de Geografía y Ciencias Sociales*, 16(16), 65. <https://doi.org/10.1344/sn2012.16.14863>

Universidad Nacional de Colombia. (2003). Los debate sobre la resistencia civil: ¿qué es y qué no es? In M. Calle (Ed.), *Memorias I Encuentro Internacional de Resistencia Civil: estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y globalización* (pp. 30–86). Programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia. Universidad Nacional

Velasco Toro, J. (1992). Espacio sagrado, territorialidad e identidad en la tradición cultural indígena (pp. 39–54).

Wilches-Chaux, G. (2005). Proyecto Nasa: la construcción del plan de vida de un pueblo que sueña. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.cecidic.edu.co/IMG/pdf/proyecto_nasa.pdf

Zibechi, R. (2007). Chile: La larga resistencia mapuche.

Álvarez S. y Guerreiro, L. G. (2016). Resistencias territoriales, prácticas comunitarias e identidad ancestral. Reflexiones en torno a las autonomías indígenas en los Valles Calchaquíes. In P. L. y L. García (Ed.), *Pueblos originarios en lucha por las Autonomías. Experiencias y desafíos en América Latina* (pp. 139–164). CLACSO.

ANEXOS

Anexo 1. Encuesta realizada a la Comunidad Indígena Nasa de Jambaló Cauca en el año 2019.

ENCUESTA SOBRE AUTORECONOCIMIENTO Y RESISTENCIA CIVIL

Objetivo: Conocer las percepciones y opiniones que tienen las personas en Jambaló Cauca, sobre la resistencia civil.

	SI	NO	NO SABE/NO RESPONDE
1. ¿Se identifica usted con alguna etnia?			

	Grupos étnicos	Marque con una X
2. ¿A qué grupo étnico pertenece usted?	1. Indígena	
	2. Afrodescendiente	
	3. Campesino	
	4. Mestizo	
	5. No sabe/No responde	

	OPCIONES	Marque con una X
3. Autoreconocerse como indígena es:	1. Obligación	
	2. Decisión propia	
	3. Sentirse Parte de la comunidad	
	Otro ¿Cuál?	
	4. No sabe/No Responde	

4. ¿A cuál cabildo indígena pertenece usted?	OPCIONES	Marque con una X
	1. Misak	
	2. Nasa	
	3. Ninguno	
	4. Otro ¿Cuál?	
	5. No sabe/ No Responde	

5. ¿Qué acciones utilizan las comunidades indígenas como formas de participación?		Nunca	De vez en cuando	Permanentemente	Casi siempre	Siempre
	1. Protesta Social					
	2. Resistencia Civil					
	3. La Minga Indígena					
	4. Cabildo Abierto					
	5. Grupos de Trabajo					
	6. No Sabe/No Responde					

6. ¿Cómo evaluaría el resultado obtenido de esas acciones?		Nada alentadoras	Poco alentadoras	Medianamente satisfactorias	Totalmente satisfactorias	No sabe no responde
	1. Protesta Social					
	2. Resistencia Civil					
	3. La Minga Indígena					
	4. Cabildo Abierto					
	5. Grupos de Trabajo					

7. ¿Qué entiende usted por autorreconocimiento?		Marque con una X
	1. Identidad	
	2. Sentido de pertenencia hacia un grupo o etnia	
	3. Desarrollo personal	
	4. Relación con un territorio y unas costumbres específicas	
	5. Otro. ¿Cuál?	
	6. No sabe/No responde	

8. ¿Dentro del resguardo al que usted pertenece,	SI	NO	NO SABE/NO RESPONDE
---	-----------	-----------	----------------------------

se han dado procesos de resistencia civil?			
--	--	--	--

9. ¿Qué entiende usted por resistencia civil?		Marque con una X
	1. Participación comunitaria	
	2. Violencia	
	3. Uso de métodos no violentos	
	4. Defensa del territorio	
	5. Otro ¿Cuál?	
	6. No sabe/No responde	

10. ¿Los procesos de resistencia civil fortalecen el auto reconocimiento de las comunidades indígenas?	OPCIONES	Marque con una X
	1. Nada	
	2. Poco	
	3. Medianamente	
	4. Mucho	
	5. Totalmente	
	6. No Sabe/No Responde	

11. ¿En qué grado considera que la práctica de la resistencia civil ha servido para la defensa del territorio?	OPCIONES	Marque con una X
	1. Nada	
	2. Poco	
	3. Medianamente	
	4. Mucho	

	5. Totalmente	
	6.No Sabe/No Responde	

12. ¿Cuáles de estas acciones han sido utilizadas para la defensa territorial?	ACCIONES	Marque con una X
	1. Protesta Social	
	2.La Minga	
	3.Resistencia Civil	
	4. Otra ¿Cuál?	
	5. No sabe/ No Responde	

13. ¿En qué grado considera usted que el auto reconocimiento permite fortalecer los procesos de resistencia civil?	ACCIONES	Marque con una X
	1.Nada	
	2. Poco	
	3.Medianamente	
	4. Mucho	
	5. Totalmente	
	6.No Sabe/No Responde	

14. ¿Con qué frecuencia dentro de su grupo o etnia se reúnen para generar estrategias de resistencia civil?	OPCIONES	Marque con una X
	1.Nunca	
	2. Todos los días	
	3. De vez en cuando	
	4. Cada mes.	
	5. Cada año.	

	6. No sabe/no responde	
--	------------------------	--

15. ¿En qué grado considera que resistencia civil) ha transformado las dinámicas de protección del territorio?	OPCIONES	Marque con una X
	1.Nada	
	2. Poco	
	3.Medianamente	
	4. Mucho	
	5. Totalmente	
	6.No Sabe/No Responde	

16. En los últimos años usted considera que el auto reconocimiento de las personas como indígenas:	OPCIONES	Marque con una X
	1. Ha aumentado	
	2. Ha disminuido	
	3. Se mantiene	
	4.Se ha fortalecido	
	5. No sabe/ no responde	

17. ¿Considera que el auto reconocimiento étnico sirve para la protección del territorio?	OPCIONES	Marque con una X
	1.Nada	
	2. Poco	
	3.Medianamente	
	4. Mucho	
	5. Totalmente	
	6.No Sabe/No Responde	

<p>18. ¿De quién considera que es responsabilidad el control del territorio?</p>	<p>OPCIONES</p>	<p>Marque con una X</p>
	1. De los Gobernadores del resguardo	
	2. De toda la comunidad	
	3. De quienes se reconocen como indígenas	
	4. Del departamento	
	5. Del gobierno central	
	6. No Sabe/No Responde	
<p>19. ¿Qué tan informado está usted sobre las acciones que lleva a cabo la minga indígena?</p>	<p>OPCIONES</p>	<p>Marque con una X</p>
	1. Nada	
	2. Poco	
	3. Medianamente	
	4. Mucho	
	5. Totalmente	
	6. No Sabe/No Responde	

<p>20. ¿Ha participado directamente en la práctica de la resistencia civil?</p>	<p>OPCIONES</p>	<p>Marque con una X</p>
	1. Nunca	
	2. De vez en cuando	
	3. Permanentemente	
	4. Casi siempre	
	5. Siempre	
	6. No sabe/no responde	

Anexo 2. Codificación de la encuesta realizada a la comunidad indígena Nasa de Jambaló Cauca en el año 2019.

# DE LA VARIABLE	NOMBRE	CÓDIGOS
1	Identificación con alguna étnia	1- Si 2- No 99- Sin información.
2	Grupo étnico	1- Indígena 2- Afrodescendiente 3- Campesino 4- Mestizo 99- Sin información
3	Autoreconocerse como indígena	1- Obligación 2- Decisión propia 3- Ninguno 99- Sin información
4	Cabildo Indígena	1- Misak 2- Nasa 3- Ninguno 99- Sin información
5	Protesta Social	1- Nunca 2- De vez en cuando 3- permanentemente 4- Casi siempre 5- Siempre 99- Sin información
6	Resistencia Civil	1- Nunca 2- De vez en cuando 3- permanentemente 4- Casi siempre 5- Siempre 99- Sin información
7	Minga indígena	1- Nunca 2- De vez en cuando 3- permanentemente 4- Casi siempre 5- Siempre 99- Sin información
8	Cabildo abierto	1- Nunca 2- De vez en cuando 3- permanentemente 4- Casi siempre 5- Siempre 99- Sin información
9	Grupos de trabajo	1- Nunca 2- De vez en cuando 3- permanentemente 4- Casi siempre

		5- Siempre 99- Sin información
10	Protesta Social	1- Nada alentadoras 2- Poco alentadoras 3- Medianamente satisfactorias 4- Totalmente satisfactorias 99- Sin información
11	Resistencia Civil	1- Nada alentadoras 2- Poco alentadoras 3- Medianamente satisfactorias 4- Totalmente satisfactorias 99- Sin información
12	Minga indígena	1- Nada alentadoras 2- Poco alentadoras 3- Medianamente satisfactorias 4- Totalmente satisfactorias 99- Sin información
13	Cabildo abierto	1- Nada alentadoras 2- Poco alentadoras 3- Medianamente satisfactorias 4- Totalmente satisfactorias 99- Sin información
14	Grupos de trabajo	1- Nada alentadoras 2- Poco alentadoras 3- Medianamente satisfactorias 4- Totalmente satisfactorias 99- Sin información
15	Autoreconocimiento	1- Identidad 2- Sentido de pertenencia hacia un grupo o étnia 3- Desarrollo personal 4- Relación con un territorio y unas costumbres específicas. 99- Sin información
16	Procesos de resistencia civil	1- Si 2- No 99- Sin información
17	Que se entiende por resistencia civil	1- Participación comunitaria 2- Violencia 3- Uso de metodos no violentos 4- Defensa del territorio 99- Sin información

18	Resistencia Civil fortalece el autoreconocimiento	1- Nada 2- Poco 3- Medianamente 4- Mucho 5- Totalmente 99- Sin información
19	Resistencia civil en la defensa del territorio	1- Nada 2- Poco 3- Medianamente 4- Mucho 5- Totalmente 99- Sin información
20	Acciones utilizadas para defensa territorial	1- Protesta Social 2- Minga 3- Resistencia Civil 99- Sin información
21	Grado en que el autoreconocimiento fortalece la resistencia civil	1- Nada 2- Poco 3- Medianamente 4- Mucho 5- Totalmente 99- Sin información
22	Frecuencia en la que se reúnen para generar estrategias de resistencia civil	1- Nunca 2- Todos los días 3- De vez en cuando 4- Cada mes 5- Cada año 99- Sin información
23	Grado en que la resistencia civil transforma la protección del territorio	1- Nada 2- Poco 3- Medianamente 4- Mucho 5- Totalmente 99- Sin información
24	Autoreconocimiento de las personas como indígenas	1- Ha aumentado 2- Ha disminuido 3- Se mantiene 4- Se ha fortalecido 99- Sin información
25	Autoreconocimiento étnico sirve para la protección del territorio	1- Nada 2- Poco 3- Medianamente 4- Mucho 5- Totalmente 99- Sin información
26	Responsabilidad en el control del territorio	1- De los gobernadores del resguardo

		2- De toda la comunidad 3- De quienes se reconocen como indígenas 4- Del departamento 5- Del gobierno central 99- Sin información
27	Informado acerca de las acciones que lleva a cabo la minga indígena	1- Nada 2- Poco 3- Medianamente 4- Mucho 5- Totalmente 99- Sin información
28	Participación directa en la práctica de la resistencia civil	1- Nunca 2- De vez en cuando 3- Permanentemente 4- Casi siempre 5- Siempre 99- Sin información.